

CUARTA SERIE

EXPLORADOR BOLIVIA

5

LE MONDE
diplomatique

La inclusión conflictiva



invertir en el desarrollo del país



**U\$S 1.400
millones
en 2016**

Somos la primera petrolera privada del país.
Con el esfuerzo y el ingenio de nuestra gente, trabajamos
para llevar más energía a todos los argentinos.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso invirtiendo
U\$S 1.400 millones que se suman a los
U\$S 13.000 millones ya invertidos entre 2001 y 2015.

Para producir. Para desarrollar. Para transformar.

Porque la energía nos pone en acción.



Conocenos

**Pan American
ENERGY**

BOLIVIA

EXPLORADOR

5

CUARTA SERIE

La inclusión conflictiva

**LE MONDE
diplomatique**

Edición
Laura Oszust
Diseño de colección
Javier Vera Ocampo
Diseño de portada
Javier Vera Ocampo
Diagramación
Ariana Jenik
Edición fotográfica
Laura Oszust
Investigación estadística
Juan Martín Bustos
Corrección
Alfredo Cortés

**LE MONDE
DIPLOMATIQUE**

Director
José Natanson
Redacción
Carlos Alfieri (editor)
Pablo Stancanelli (editor)
Creusa Muñoz
Luciana Garbarino
Laura Oszust
Lucía Bartolomé (pasante)

Secretaría
Patricia Orfila
secretaria@eldiplo.org
Publicidad
Maia Sona
publicidad@eldiplo.org
www.eldiplo.org

Redacción, administración, publicidad y suscripciones:
Paraguay 1535 (C1061ABC)
Tel.: 4872-1440 / 4872-1330
Le Monde diplomatique / Explorador es una publicación de Capital Intelectual S.A. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © *Le Monde diplomatique*

Impresión:

Forma Color Impresores S.R.L.,
Camarones 1768, C.P. 1416ECH
Ciudad de Buenos Aires
Distribución en Cap. Fed. y Gran Buenos Aires:
Vaccaro Hnos. Representantes
editoriales S.A. Entre Ríos 919,
1º piso. Tel.: 4305-3854
C.A.B.A., Argentina

Distribución interior y exterior:
D.I.S.A. Distribuidora Interplazas
S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836
Tel.: 4305-3160
C.A.B.A., Argentina

Le Monde diplomatique (París)
Fundador: Hubert Beuve-Mery
Presidente del Directorio y Director de la Redacción:
Serge Hallim
Jefe de Redacción:
Philippe Descamps
1-3 rue Stephen-Pichon,
75013 Paris
Tel.: (33) 53949621
Fax: (33) 53949626
secretariat@monde-diplomatique.fr
www.monde-diplomatique.fr

INTRODUCCIÓN

Una batalla ancestral

por Laura Oszust

Con la llegada de Evo Morales al poder, las organizaciones indígenas conquistaron derechos políticos y sociales y el reconocimiento de sus instituciones. Más allá de la presencia del presidente indígena en el Palacio Quemado, las comunidades deberán continuar defendiendo sus logros.

Ubicada en el corazón de América del Sur, Bolivia cuenta con una población de 10.700.000 habitantes, siendo uno de los países con menor densidad poblacional de la región. Pero no es ésta la única característica demográfica particular del país. Su composición social es por demás interesante. Más del 60% de sus habitantes se autoidentifica como indígena, frente al 24% de habitantes indígenas en Perú, siendo aymara la comunidad que predomina. La misma tuvo (y aún hoy sigue teniendo) una intervención de gran relevancia en la vida política y social del país, que se remonta a la historia del siglo XVIII.

Si bien esta tierra le debe su nombre a Simón Bolívar, considerado el “Padre de la Patria” por su destacado papel en la gesta de la independencia, la comunidad aymara también participó en la lucha por la emancipación de España. Mucho antes de la Declaración de Independencia el 6 de agosto de 1825, la corona española recibió los embates de los habitantes originarios de la región. En 1781 Bartolina Sisa y Túpac Katari iniciaron el levantamiento del ejército aymara en lo que actualmente es el municipio de Ayo Ayo en La Paz. Sisa, hija de comerciantes de coca que sufrieron la dominación colonial, y Katari, vinculado en la lucha al líder indígena de Perú, Túpac Amaru, lograron conformar un ejército de 80 mil personas con el objetivo de romper las cadenas de sumisión y esclavitud a las que los condenaba la corona española. A pesar de la magnitud de su milicia, la sublevación tuvo el peor desenlace: traicionados por uno de sus colaboradores, Sisa y Katari fueron apresados y condenados a la pena de muerte.

Las comunidades originarias de Bolivia continuaron viendo avasallados sus derechos por parte de distintos gobiernos, pero no por ello abandonaron la disputa por un espacio en la arena política. Los aymaras, los quechuas, los chapacos, entre otros, lograron hacerles frente a las privatizaciones que comenzaron con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985 y a

las medidas económicas impulsadas por organismos internacionales como el FMI. Estas organizaciones indígenas llevaron a cabo revueltas en contra de estas políticas, pero también en defensa de los recursos naturales, en el marco de la protección de la Pachamama y el “Vivir Bien”.

Refundar el Estado

Luego de la ola del neoliberalismo nuevos horizontes se fueron vislumbrando. Líder del movimiento cocalero y miembro de la comunidad aymara, Evo Morales fue elegido diputado en 1997 y ganó las elecciones presidenciales en 2005, con Álvaro García Linera, sociólogo y ex militante del Ejército Guerrillero Túpac Katari, como vicepresidente. La defensa de los recursos naturales, la nacionalización de los servicios públicos y la refundación de Bolivia, en el marco de un Estado Plurinacional, fueron sus promesas de campaña, retomando las banderas de las comunidades originarias. Morales fue ungido en enero de 2006 como máxima autoridad indígena un día antes de tomar posesión de la presidencia. En su discurso en Tihuanacu hizo referencia al respeto que les confería a los indígenas: “Los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, chapacos, son dueños absolutos de esta enorme tierra” (1).

En este contexto, los protagonistas de los levantamientos de 1871 volvieron a entrar en escena, no sólo por la pertenencia de Morales a la comunidad indígena, sino porque en 2009 se votó una nueva Carta Magna: la Constitución del Estado Plurinacional. En su artículo N° 3 determina: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena-origenario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. En la normativa también se reconoce la autonomía indígena y se respetan las instituciones que pertenecen a las comunidades. De esta manera, en septiembre de 2015 el municipio de Charagua,

ubicado en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, votó en un referéndum por el “Sí” para obtener la autonomía indígena, convirtiéndose en la primera del país. Un año más tarde, los habitantes de la autonómica Charagua Guarani Iyambé eligieron a sus autoridades. Este acto soberano es posible ya que en Bolivia la nueva legislación estableció una democracia intercultural, compuesta por la democracia participativa y directa, la representativa y la comunitaria; esta última introduce la elección de autoridades y representantes propios de las naciones y pueblos indígenas. El respeto a otras formas de organización institucional propició un mayor reconocimiento de las comunidades como actores políticos.

La lucha continúa

La llegada del MAS al Palacio Quemado y la posterior inclusión política de las organizaciones originarias, sin embargo, no terminaron con los conflictos.

Además de los enfrentamientos por el pedido de autonomías departamentales de la “Media Luna” (Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija), Morales tuvo que sobreponerse a los reclamos de los “nuevos actores políticos”, que a su vez conforman su gobierno, compuesto por la coalición del MAS con las cinco organizaciones campesino-indígenas. En 2011 el proyecto de construcción de la carretera que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) generó rechazo de parte de algunas organizaciones de la zona, quienes aducen que el camino causaría consecuencias ecológicas y socioculturales negativas. Durante su tercer gobierno surgían nuevas protestas con la construcción de la represa hidroeléctrica de El Bala, ubicada en las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas. Según explica el sociólogo boliviano Fernando Mayorga, estos conflictos reflejarían la contradicción entre los derechos colectivos de los indígenas y la soberanía estatal (2). El MAS, desde el inicio de estas manifestaciones, vive una relación de mayor tensión con las organizaciones que representa.

Puede observarse entonces que a partir de 2006 los movimientos indígena-campesinos han podido conquistar mayor representación, derechos y participación con las políticas implementadas por el gobierno del MAS, pero se abre un interrogante sobre la continuidad de estas transformaciones sociales ante la posible salida del poder de Evo Morales, ya que en febrero de 2016 ganó el “No” en el referéndum para reformar la Constitución y permitirle presentarse como candidato para un cuarto mandato. Sin embargo, a la luz de la lucha del pueblo boliviano, lo que podría asegurarse es que si las organizaciones continuaron batallando aún frente a un gobierno de las bases, seguirán resistiendo ante otros menos inclusivos. ■

1. “Los discursos de Evo”, *Página/12*, 30-1-2006.

2. “El camino boliviano”, *Página/12*, 10-2-2014.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

BOLIVIA

La inclusión conflictiva

INTRODUCCIÓN

2| Una batalla ancestral

Laura Oszust

1. TIEMPOS DE TENSIÓN

Lo pasado

7| La Revolución Nacional del MNR

C. Koehler Zanella,
P. Marconatto Marques,

R. A. Silva Seitenfus

Alain Labrousse

Nicole Bonnet

Walter Chávez

Laura Oszust

Enzo Girardi

W. Chávez y S. Cáceres

11| Golpe a golpe: la resistencia

14| El giro neoliberal

17| El largo estallido

20| La Guerra del agua

22| Los nuevos sujetos de poder

24| El surgimiento de una “nueva izquierda”

2. EL HURACÁN EVO

Bolivia hacia adentro

29| Evo: un cocalero al poder

Pablo Stefanoni

30| Capitalismo andino-amazónico

Álvaro García Linera

34| La tercera es la vencedora

Federico Bernal

37| Un divorcio sin Paz

Claudia Peña Claros

41| Una metamorfosis histórica

Ignacio Ramonet

44| Las mil caras de Bolivia

Enzo Girardi

46| “Mandar obedeciendo al pueblo”

Martín Sivak

49| Los obstáculos de la revolución

Álvaro García Linera

3. EL NORTE EN LA REGIÓN

Bolivia hacia afuera

55| Con la mirada hacia el Sur

Daniel Agramont Lechín

61| La pelea por una salida al mar

Cédric Gouverneur

64| Enemigos íntimos

Hernando Calvo Ospina

67| La hoja de la discordia

Johanna Levy

68| La planta sagrada

P. Stefanoni y H. Do Alto

4. IMAGINAR DESDE LA DIVERSIDAD

Lo vivido, lo pensado, lo imaginado

73| La realidad plural en el séptimo arte

Rodrigo Ayala Bluske

74| La voz de “Domitila”

Anónimo

78| El enigma de la madre Tierra

Renaud Lambert

5. UN DEVENIR IMPREDECIBLE

Lo que vendrá

82| El MAS en su encrucijada

Pablo Stefanoni



Túpac Katari. Junto a su esposa Bartolina Sisa, el líder indígena formó un ejército aymara que combatió a los españoles.

1

Lo pasado

TIEMPOS DE TENSIÓN

Bolivia, país complejo debido a su geografía y su composición demográfica, tiene una historia rica en transformaciones sociales, políticas y económicas. La organización de los trabajadores, junto con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, hizo posible a partir de 1952 un gobierno cercano a los intereses de la población. Años después, distintos golpes de Estado y gobiernos liberales –uno de ellos comandado por el líder de la Revolución- dieron marcha atrás con los logros obtenidos y dañaron al pueblo pero no su resistencia.





Nacionalización de la minería, sufragio universal y reforma agraria

La Revolución Nacional del MNR

por **Cristine Koehler Zanella, Pâmela Marconatto Marques, Ricardo Antônio Silva Seitenfus***

En el año 1952 las clases populares bolivianas deponen a un gobierno militar. El Movimiento Nacionalista Revolucionario asumió el poder, con Víctor Paz Estenssoro como presidente, quien en su primer mandato llevó adelante una serie de reformas revolucionarias que dieron comienzo a una nueva etapa del país.

Toda sociedad vive a la sombra de su pasado. Tal vez no haya país al que esta verdad se le aplique mejor que Bolivia. Salvo algunos períodos de insurgencia, carga el fardo de una historia de explotación y subordinación política y económica que sustenta el mito de la inviabilidad del desarrollo nacional. En el mismo territorio marcado por una historia de tantas dificultades y amarguras se originan, de tanto en tanto, las voces de hombres y mujeres que toman conciencia de su existencia precaria y se hacen directores de la trama de la historia de su país. Del mismo modo, tampoco es fácil encontrar otra sociedad en que las clases populares sean tan conscientes de su poder frente al Estado. En ciertas ocasiones, los sectores insurgentes depositan su fe en gobiernos que legitiman la expectativa de ver realizada la promesa de una sociedad más justa, y el sueño de un futuro mejor parece adquirir nuevamente sentido. Aun cuando la revolución social emprendida en 1952 no haya producido todos los efectos esperados, el incansable pueblo boliviano no se rindió a la condena de Sísifo (1): después de cada caída, volvió a empujar la piedra hasta la cima de la montaña, con esperanzas renovadas y ahora encarnadas en la figura del actual presidente y ex líder cocalero Evo Morales. A semejanza de la Revolución de 1952, este gobierno [2007] fue gestado en el lecho de la insurgencia de los movimientos sociales y es el resultado de circunstancias especiales. Que sea capaz de satisfacer las expectativas de la población y de generar un diálogo que permita construir políticas más adecuadas para encaminar a Bolivia al siglo XXI dependerá de las lecciones aprendidas de la experiencia vivida por el país hace ya medio siglo.

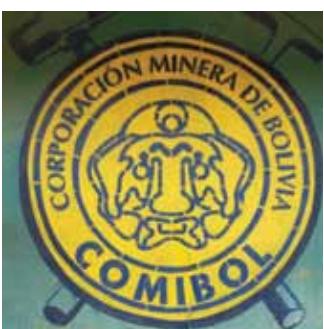
Los inicios

Hace unos cincuenta años, los ojos del mundo se volvieron azorados hacia el levantamiento que inflamó a las masas de este país enclavado en las solitarias altitudes de los Andes. En esa ocasión, los sectores populares se movilizaron contra el ejército para deponer a un gobernante que manejaba a Bolivia de acuerdo sólo con su voluntad. El arduo proceso histórico de la insurgencia y de la implementación de las reformas por el gobierno que asumió el poder fue conocido como la “Revolución Nacional Boliviana”. Los factores desencadenantes de la revolución popular más importante de América Latina (hasta el triunfo en enero de 1959 de la Revolución Cubana) durante el siglo pasado pueden rastrearse hasta la soledad milenaria del Altiplano.

A comienzos de la década del 40, grupos civiles descontentos, que mantenían aspiraciones de cambio no atendidas luego de la Guerra del Chaco, comienzan a organizarse en partidos opositores. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fundado en 1941, se consolidó como el más importante exponente de ese descontento. Aunque este partido haya actuado en un primer momento de forma conservadora, verá su destino alterado por el curso de una historia reorientada por la acción insurgente de las masas populares. Al principio, en una actuación coherente con la formación de sus cuadros, provenientes de la clase media urbana y de orientación fascista, el MNR se alió al grupo militar que llevó a la Presidencia al coronel Gualberto Villarroel. Poco tiempo después, sin embargo, debido a su orientación fascista, el gobierno de Villarroel fue →



Participación de los trabajadores. El decreto de creación de la COMIBOL establecía dos representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros en su directorio.



COMIBOL. Su fundación anticipó la nacionalización de la minería.

→ depuesto en una sangrienta revolución, a punto tal que fue retirado a la fuerza del Palacio Presidencial por una multitud revolucionaria.

En los años siguientes, la inestabilidad continuó y los partidos conservadores tradicionales fueron incapaces de gobernar. Frente a esta situación, el MNR buscó el respaldo del partido trotskista y triunfó en las elecciones de 1951 apoyado en un discurso de defensa de mejores condiciones de vida para la población empobrecida. Disconformes con el ascenso del MNR y amparadas en los significativos índices de abstención de aquella elección, las viejas oligarquías rápidamente organizaron una Junta Militar, presidida por el general Hugo Ballivián Rojas, que declaró nulas las elecciones y asumió el poder. Esta situación, característica de la fragilidad de la democracia boliviana y del ambiente hostil en que tendrían que moverse los gobernantes constitucionales, se repetiría luego en varias oportunidades. La débil estructura de las instituciones del país contribuyó al mantenimiento de un gobierno usurpador del poder conferido al MNR. Sin embargo, las divisiones internas del gobierno y las ambiciones de uno de los ministros de Ballivián hicieron que un sector del oficialismo cooperara con el MNR y buscara el final del gobierno *de facto*. Se facilitaron armas a los rebeldes, y así se inició el levantamiento. Durante tres días, una lucha encarnizada tomó las calles de La Paz. El ministro rebelde rápidamente se retiró del combate, pero la población, tomada por un heroísmo febril y apoyada por los trabajadores mineros, resistió y venció a los regimientos de la Junta Militar. El MNR ascendió finalmente al poder y el 15 de abril de 1952 Víctor Paz Estenssoro retornó del exilio en Buenos Aires y asumió la Presidencia.

Una gestión revolucionaria

Nadie esperaba la asombrosa insurgencia del pueblo boliviano. La esperanza, tanto de los sectores del ejército que iniciaron el movimiento de rebeldía como de los líderes del MNR, era llegar al poder por la sorpresa del golpe antes que por la resistencia en el combate contra las Fuerzas Armadas. Éstas, finalmente, acabaron casi destruidas, mientras que la población permaneció fuertemente armada. Con todo, el ejercicio del gobierno no podía sustraerse a la realidad de que las armas estaban en manos del proletariado y que éste, que más tarde se organizaría en milicias, era el verdadero poder en Bolivia. Así, una vez tomado el gobierno, surgió la responsabilidad de proponer soluciones y elaborar programas, ya que la llegada al poder no es garantía de mejoras estables. Se necesitan programas de largo plazo que sólo son posibles a partir de la reorganización del aparato estatal y de la consideración de los instrumentos democráticos de participación, sobre todo cuando se trata de combatir situaciones de extrema pobreza. La necesidad más urgente era, entonces, la toma de conciencia de la población insurgente. Paz Estenssoro enfrentaba el desafío de responder a las demandas populares a través de medidas de refundación de la sociedad que permitiesen el acceso efectivo de los grupos rebeldes a las instituciones estatales. Sólo así podría ser superada la tensión entre revolución e inestabilidad.

Bajo la mirada vigilante de las milicias populares, Paz Estenssoro promovería, en los cuatro años de su primer gobierno, una serie de reformas sustanciales para la sociedad boliviana, entre ellas tres especialmente significativas.

La primera fue la ampliación de los derechos de ciudadanía. En 1956, Paz Estenssoro institucionalizó el sufragio universal y pone fin a un sistema electoral que excluía a las mujeres y a más del 70% de la población masculina por ser analfabeto o no poseer los requisitos mínimos de propiedad agraria exigidos. La segunda reforma importante fue adoptada el 2 de agosto de 1953 con la promulgación del decreto de institución de la reforma agraria, bajo el lema "la tierra para quien la trabaja". Ésta es considerada la medida de mayor contenido social implementada durante su primer mandato. El decreto abrió la posibilidad de redistribución de la tierra de las propiedades consideradas improductivas a los campesinos que las estuviesen trabajando. Más allá de las expectativas que en un primer momento generó esta política, los historiadores bolivianos han criticado el hecho de que "una vez distribuida la tierra –especialmente a las familias–, la Reforma Agraria de 1953 deja a los campesinos abandonados a su suerte, sin ningún apoyo ni políticas públicas explícitas de desarrollo rural" (2). La falta de políticas de apoyo para generar un cultivo sustentable de la tierra, la inexistencia de redes de comunicaciones y de educación rural, los transportes precarios, la ausencia de inversiones en ciencia y tecnología y la escasez energética hicieron que este

amplio abanico de posibilidades no fructificara. Esto trajo como consecuencia resultados materiales paupérrimos y una gran desilusión hacia un Estado que se demostraba incapaz de pensar un país de manera completa, no segmentada. De esta forma, los avances sociales se frustraron debido a la falta de un programa de largo plazo que, partiendo de la demanda puntual de redistribución de la tierra, fuese capaz de conducir, al final, a la superación del atraso agrario. “El sector agrario permaneció distante, cerrado sobre sí mismo, manteniéndose como una estructura económica feudal, impermeable a los progresos técnicos y centrada en niveles de producción tendientes primordialmente a la mera subsistencia” (3).

La tercera medida importante implementada por el gobierno de Paz Estenssoro constituye un punto esencial para comprender los ciclos de explotación y pobreza por los que pasó Bolivia en sus cinco siglos de historia. Se trata de la nacionalización de las más importantes minas de estaño, mineral que en esa época representaba la casi totalidad de las exportaciones del país. La gestión estatal de las grandes fuentes de recursos posibilitaba al gobierno orientar el curso de la actividad y beneficiarse de los ingresos obtenidos pa-

estructurales del país. Lo paradójico es que estas presiones y estas respuestas, en el marco de un sistema que relaciona las instituciones estatales con las fuerzas populares, se retroalimentan y resultan en perjuicio de ambos actores: el gobierno implementa remedios de efecto instantáneo pero difíciles de sostener, y los movimientos populares insinúan una y otra vez su fuerza y ponen en evidencia la inestabilidad política del país. Al final quedan seriamente comprometidas las instituciones del régimen democrático, lo que perjudica a ambos. Las relaciones que se establecen entre el Estado y la población deben ser de coordinación y no de subordinación. Cuando la fuerza de uno prevalece sobre la del otro, el resultado degrada la democracia y, por lo tanto, es negativo para ambos.

En la difícil solución de este problema radicaliza la clave del desafío que se imponía –y se impone a inicios del siglo XXI– a las sociedades posrevolucionarias.

Las lecciones extraídas del período iniciado con la Revolución del 52 se refieren, sobre todo, a las relaciones entre el Estado y la población, lo que indica que los mayores desafíos de Bolivia pasan por el campo político antes que por el económico. Estas lecciones subrayan una faceta del sistema político que saldría a la superficie

El líder

Víctor Paz Estenssoro fue profesor de Economía en la Universidad de San Andrés antes de la Guerra del Chaco, en la que participó bajo las órdenes del capitán Antonio Seleme Vargas. Fue ministro de Hacienda del gobierno de Gualberto Villarreal, y ante la caída de éste debió exiliarse en Buenos Aires entre 1946 y 1952.

En 1956 se pone fin a un sistema electoral que excluía a las mujeres y a más de 70% de los hombres por ser analfabetos.

ra impulsar el desarrollo de otros sectores. Es verdad que, por tratarse de una actividad localizada, sin grandes vínculos con otros sectores de la economía, la simple gestión eficiente de la Comisión Minera de Bolivia (Comibol) no sería la solución para todos los problemas económicos. La buena administración de los recursos de la Comibol, sin embargo, permitiría mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mineros en el corto plazo y, en el largo plazo, las de las demás clases populares, debido a la inversión en sectores como el agrícola, responsable de la mayoría de la mano de obra. Pero no se realizó una buena gestión ni se emplearon de manera eficiente los recursos obtenidos.

El péndulo de la historia

En síntesis, durante los cuatro años de su primer mandato (1952-1956), Paz Estenssoro intentó atender a las múltiples reivindicaciones de una población armada y consciente de su fuerza ante el gobierno, por lo cual realizó importantes reformas en la sociedad y en la economía. Muchas de ellas, sin embargo, estuvieron lejos de ser eficaces y no lograron mejorar la calidad de vida de las clases populares. La responsabilidad del fracaso puede atribuirse tanto al propio Paz Estenssoro como a los sectores populares, que en el afán de lograr la satisfacción de sus múltiples aspiraciones presionaron al gobierno y lo impulsaron a adoptar medidas de efecto inmediato pero que no consiguieron dar soluciones sólidas a los problemas

en otros momentos: la sociedad no se ve reflejada en el gobierno y éste no se percibe como un instrumento al servicio de ella. El choque entre uno y otra se repetirá y la oscilación del péndulo de la historia nunca detendrá su marcha. Bolivia deberá plantearse como objetivo salir del tiempo de revuelta y miseria para aprender del pasado o trabajar para el futuro. ■

1. En la mitología griega, los dioses habían condenado a Sísifo a hacer rodar una roca hasta el pico de una montaña, de donde volvería a caer debido a su propio peso. Tendría que repetir la operación una y otra vez, cíclicamente: no habría castigo más terrible que el de un trabajo inútil y sin esperanza.

2. Miguel Urioste Fernández de Córdoba, “Bolivia: el abandono de la reforma agraria en zonas de los valles y el Altiplano”, en *Reforma agraria: colonización y cooperativas*, FAO, Roma, 2004.

3. Raúl Federico Abadie-Aicardi, *Economía y sociedad de Bolivia en el siglo XX*, Río de la Plata, Montevideo, 1966.

*Cristine Koehler Zanella es profesora de Derecho Internacional (Facultad de Derecho de Santa María, Brasil); Pâmela Marconatto Marques es académica de la Maestría en Integración Latinoamericana e investigadora en el área de movimientos sociales y democracia en América Latina (Universidad Federal de Santa María, Brasil); Ricardo Antônio Silva Seitenfus es doctor en Relaciones Internacionales (Universidad de Ginebra).





Años de inestabilidad y gobiernos de facto

Golpe a golpe: la resistencia

por Alain Labrousse*

Desde 1964 se sucedieron en Bolivia diferentes golpes de Estado. Uno de sus más sangrientos dictadores, el general Hugo Banzer, a partir de 1971 prohibió las actividades políticas y sindicales y detuvo y torturó a decenas de miles de personas. Pero el rechazo de la sociedad, expresado en una huelga de hambre iniciada por mujeres de mineros, aceleró el fin del régimen.

El 28 de diciembre de 1977, a las 18 horas, cuatro mujeres acompañadas por sus hijos comenzaron una huelga de hambre indefinida en la sede del arzobispado de La Paz. Provenientes del centro minero Siglo XX, reclamaban una amnistía general y sin condiciones; la reincorporación de los mineros despedidos por el régimen militar; el reconocimiento de los sindicatos; el retiro del ejército de los centros mineros. Tres semanas más tarde, el 18 de enero de 1978, los huelguistas de hambre eran más de mil en todo el país. Se firmó un acuerdo entre sus representantes y los del gobierno militar del general Hugo Banzer, quien cedió en los tres primeros puntos. Los últimos doce presos políticos, entre ellos, los jefes de la organización guerrillera ELN-PRT (Ejército de Liberación Nacional-Partido Revolucionario de los Trabajadores), fueron liberados el 14 de febrero a las 13 horas. Los dirigentes de la oposición regresaron a Bolivia o abandonaron la clandestinidad. Se organizaron elecciones sindicales en los centros mineros.

Esta victoria es producto de una evolución compleja cuyo origen se remonta a noviembre de 1977, cuando el general Banzer anunció repentinamente que las elecciones generales (presidenciales y legislativas), previstas inicialmente para 1980, se celebrarían el 9 de julio de 1978. El sentido de esta decisión surge de un rápido repaso de los acontecimientos que se desarrollaron en Bolivia durante las dos últimas décadas.

Una dictadura institucionalizada

Luego de las presidencias transformadoras de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, en noviembre de 1964, los generales Alfredo Ovando Candía y Re-

né Barrientos, tomaron el poder. En 1966, Barrientos fue elegido gracias al voto campesino y a la violenta represión de la oposición de los mineros.

Bolivia vivía entonces un período de inestabilidad: en 1967 es asesinado el "Che" Guevara. En abril de 1969, Barrientos encontró la muerte en un accidente de helicóptero, calificado entonces de "sospechoso". Asumió la presidencia Luis Siles Salinas, quien fue derrocado el 26 de septiembre por el general Ovando Candía. Este último realizó algunas reformas, entre ellas, la nacionalización de la compañía estadounidense Gulf Oil.

En octubre de 1970, un golpe de Estado militar provocó una reacción de la izquierda del ejército, dirigida por el general Juan José Torres, quien proclamó su gobierno "nacionalista y revolucionario". En junio de 1971, se reunió una Asamblea Popular con el propósito de acelerar la radicalización del régimen. Pero, en agosto de 1971, un levantamiento militar apoyado por Argentina, Brasil y secretamente por Estados Unidos derrocó al general Torres y llevó al poder al general Hugo Banzer. Formó un primer gobierno, en cuyo seno se encontraban miembros de la Falange Boliviana, de carácter fascista, y el MNR, que institucionalizaba así su viraje a la extrema derecha.

El carácter represivo del régimen fue denunciado particularmente en una publicación de octubre de 1977 de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), dirigida por el ex presidente Luis Siles Salinas: entre 1971 y 1977, fueron detenidas 14.750 personas, una veintena de las cuales fueron ejecutadas sumariamente; muchas de las que fueron liberadas permanecieron luego bajo arresto domiciliario. La tortura era utilizada sis-→

Operación Cóndor

A este plan de coordinación de dictaduras militares de América Latina para la persecución de opositores se sumó el entonces dictador Hugo Banzer, quien negaría su participación. En junio de 2016, el gobierno boliviano anunció la desclasificación de archivos que vinculan al país en la ejecución de este plan criminal.

→ temáticamente en las cárceles. Alrededor de 20.000 personas abandonaron el país por razones políticas.

La Universidad estuvo cerrada un año en 1971-1972, y nuevamente durante tres meses en 1973. Emisoras de radio de la Iglesia fueron ocupadas por el ejército y sus instalaciones destruidas. El gobierno se enfrentó con la Iglesia en varias oportunidades: en 1974 y 1975, en particular, cuando los militares arremetieron contra la Comisión Episcopal de Justicia y Paz.

En julio de 1974, el general Banzer rompió con la Falange y el MNR y formó un gabinete exclusivamente militar. El 9 de noviembre, mediante una serie de decretos "institucionalizó" la dictadura: suspensión de actividades políticas y sindicales, prohibición de huelgas, creación de un servicio civil que permitía movilizar a los opositores. En junio de 1978, el ejército ocupó nuevamente las minas, luego del congreso de la Federación de Mineros, en Corocoro, que exigió al gobierno un aumento del 110%. El sindicato decreto entonces una huelga que se prolongó durante un mes. Cientos de trabajadores fueron detenidos o perdieron su empleo; cincuenta y tres dirigentes se exiliaron en el sur de Chile.

Si bien el régimen podía jactarse de algunos logros en su política económica, sólo beneficiaban a una ínfima parte de la población.

El ocaso de un dictador

Los indicadores económicos reflejaban una situación relativamente favorable. En 1977, la tasa de crecimiento era cercana al promedio 1973-1977, 6,8%; la inflación sólo era del 15%. En 1976, se lanzó un ambicioso plan quinquenal que preveía el desarrollo de la metalurgia, la creación de una industria petroquímica y la puesta en valor de los importantes yacimientos de hierro de Mutún.

Estos datos económicos no logran ocultar la miseria de la mayoría de la población. Con un ingreso promedio de 390 dólares por año en 1978, Bolivia pertenecía al grupo de 5 países cuyos habitantes eran los más pobres de América Latina.

Aunque las elecciones presidenciales estaban programadas para 1980, el general Banzer anunció el 9 de noviembre de 1977 que se celebrarían el 9 de julio de 1978, y que estarían precedidas por una amnistía política. Este viraje causó sorpresa; sus razones no resultan claras.

El fracaso de las negociaciones con Chile sobre el acceso de Bolivia al mar también influyó en esta decisión. El prestigio del general Banzer se vio afectado por este fracaso a los ojos de la opinión pública, así como de los "jóvenes oficiales" que consideraban humillante la aceptación por parte del jefe de Estado de la propuesta chilena de un corredor desmilitarizado. Llegaron a proponer una transferencia del poder político a los civiles, con el fin de que el ejército pudiera dedicarse a preparar un eventual enfrentamiento con Chile en 1979.

El anuncio de las elecciones significaba para Banzer una forma de reafirmar su posición y dar una nueva

legitimidad a su régimen. La proscripción de una parte de la oposición y el "control" por parte del ejército del voto campesino tornaban a la operación sin riesgos.

Si el general Banzer renunció finalmente a presentar su candidatura para apoyar la del ministro del Interior, general Juan Pereda Asbún, se debió a que los militares le exigieron que dejara el uniforme y se presentara como un simple ciudadano con el fin de evitar que el ejército se viera salpicado por los efectos de la campaña. Quedaba la cuestión de la amnistía. Desde el anuncio de las elecciones, la APDH, presidida por Luis Siles Salinas, multiplicó las presiones para que fuera general y sin condiciones. El 2 de noviembre, la Conferencia Episcopal se pronunció en el mismo sentido. Como único canal de expresión social, la APDH se convirtió rápidamente en un amplio frente que agrupaba a todos los sectores de la oposición: partidos, sindicatos, burguesía liberal, sectores progresistas de la Iglesia... El gobierno cometió el error de menospreciar este fenómeno y subestimar la fuerza de una campaña en favor de una verdadera democratización del Estado.

La huelga de hambre

Así, el 21 de diciembre, liberaba a 33 detenidos y amnistía a 284 exiliados, pero, al mismo tiempo, se publicaba una lista de 348 ciudadanos a los que se les prohibía regresar a Bolivia, debido a los crímenes cometidos "contra la tranquilidad y la paz de la Nación". En esta lista figuraban líderes sindicales como Juan Lechín, presidente de la Central Obrera Boliviana, y el ex presidente Hernán Siles Zuazo. Esta medida tuvo como efecto disgustar a los opositores de todos los sectores. Una huelga de hambre desatada una semana más tarde se iniciaba en un contexto político que favorecía su éxito.

La APDH había aprobado el recurso a una huelga de hambre. Pero su inicio se debió a cuatro mujeres de trabajadores de Siglo XX. Cuatro días más tarde, una serie de organizaciones sindicales y culturales apoyaban esta iniciativa; sobre todo, un segundo grupo de once huelguistas, encabezado por Domitila Chungara, esposa de un minero y presidenta del comité de mujeres de Siglo XX, se instalaba en las oficinas del diario católico opositor *Presencia*. A partir de entonces, el movimiento se convirtió en una bola de nieve: obreros, estudiantes, campesinos, sacerdotes, intelectuales, ocupaban iglesias, facultades e incluso las oficinas de Naciones Unidas en La Paz. El 10 de enero, los huelguistas de hambre eran más de quinientos en todo el país.

La Federación de Mineros, en la clandestinidad, lanzó una primera consigna de huelga de veinticuatro horas, que fue masivamente acatada. Gran decepción para el gobierno, que creía haber desmantelado la organización obrera más poderosa del país. Intentó entonces negociar. El cardenal Mauer, arzobispo de Sucre, firmó con él un acuerdo que preveía la amnistía, salvo para los sindicalistas que hubieran cometido delitos "comunes". Los huelguistas rechazaron



Juan José Torres. Asesinado por la dictadura argentina en 1976.

lo acordado por el cardenal y exigieron la aplicación de los cuatro puntos del memorándum inicial. Al vigésimo día de huelga, alrededor de 1.300 personas se sumaron al movimiento. La Federación de Mineros llamó, con éxito, a una segunda huelga de 48 horas. Los trabajadores de la industria de La Paz obligaron a sus empresas a cerrar una tras otra. Los estudiantes se manifestaron en las diferentes ciudades del país. Hastiada de la corrupción y la arbitrariedad, la opinión pública, en su conjunto, simpatizó con la huelga.

El gobierno obligó entonces a los funcionarios al cese de tareas durante una jornada, en señal de oposición a la huelga. Medida impopular que terminó de desacreditarlo. Desbordado, el general Banzer cometió entonces el error de recurrir a la fuerza.

El 17 de enero, a las 3 de la mañana, la policía y el ejército ocuparon la mayoría de los lugares donde se encontraban los huelguistas, particularmente algunas iglesias. Dos sacerdotes y una religiosa fueron detenidos. Estas medidas generaron un endurecimiento de la posición del clero. El obispo de La Paz suspendió hasta nuevo aviso la celebración de los oficios y amenazó con excomulgar a todos aquellos que atacaran a los huelguistas. Agotados, estos últimos continuaron sin embargo con su medida en las instalaciones del hospital de la policía.

Banzer cedió pues en los tres primeros puntos: amnistía sin condiciones, reincorporación de los trabajadores, libre ejercicio de las actividades sindicales. Pero el ejército seguiría ocupando los centros mineros más importantes.

En definitiva, la victoria fue producto de la dimensión de un movimiento de opinión pública en el cual la huelga de hambre brindó la ocasión de expresarse de manera unida. La oposición de la Iglesia, finalmente, desempeñó un papel determinante permitiendo al sector de la prensa ligado a ella enfrentar la propaganda oficial. También pudieron incidir factores externos: por un lado, la presión de Estados Unidos; por el otro, el fracaso de las negociaciones con Chile que, al generar contradicciones dentro del ejército, debilitó al gobierno del general Banzer.

¿El poder militar en retirada?

Gracias a la vigilancia constante de la APDH, las presiones de la Iglesia y los sindicatos, los acuerdos firmados el 18 de enero fueron en general respetados. Los dirigentes sindicales y los jefes de partidos regresaron al país sin inconvenientes y pudieron participar de la campaña electoral. Los mineros despedidos durante esos años recuperaron poco a poco su trabajo.

Sin embargo, la oposición estaba en libertad condicional. El ejército seguía ocupando los centros mineros más importantes. El arsenal jurídico de la dictadura seguía vigente. Al pretender los estudiantes restablecer la autonomía universitaria, el ejército ocupó el 28 de abril la Universidad de La Paz, que fue cerrada y muchos estudiantes fueron detenidos.

La represión en las zonas campesinas continuó

© KEystone Pictures USA/Alamy/LatinStock



Complicidad. Banzer estuvo vinculado a la Triple A, organización que funcionó durante el gobierno de Isabel Perón.

siendo muy fuerte. Ahora bien, el 65% de la población indígena y rural, rigurosamente controlada por caciques muy fieles al ejército, decidía tradicionalmente las elecciones. El presidente y su candidato, el general Pereda, no parecían demasiado temerosos de la oposición en el terreno electoral.

Pero nuevos elementos intervinieron. La Democracia Cristiana lanzó la candidatura del general René Bernal, ex ministro de Defensa del general Banzer, que hablaba lenguas indígenas.

Las contradicciones dentro del ejército aún se reflejaban en la candidatura del coronel José Patiño Ayoroa, por la Falange Boliviana, y en el retorno del general Ovando, apoyado por sectores "nacionalistas" del ejército.

Frente a esta triple candidatura militar, la izquierda se presentó también dividida. La Unidad Democrática y Popular presentaba la candidatura de Hernán Siles Zuazo. Más radical y menos "electoralista", el Frente Revolucionario de Izquierda tenía el apoyo del líder sindical Juan Lechín. El Maoísmo y un sector del trotskismo presentó simbólicamente la candidatura de Domitila Chumbara a la vicepresidencia. Pero, más allá de las elecciones, todos eran conscientes de que el ejército seguía siendo el dueño del juego.

Finalmente, luego de once años sin poder votar, el pueblo boliviano volvió a las urnas el 9 de julio de 1978. Los resultados dieron como ganador al general Pereda, pero el 20 de julio la Corte Electoral anuló los resultados al encontrar irregularidades en la elección, como la emisión de más votos que la cantidad de votantes. A pesar de ello, un día después, Banzer fue depuesto por Pereda. Bolivia continuaba su seguidilla de golpes de Estado. ■

*Periodista, especialista en América Latina.

Traducción: Gustavo Recalde

A LA ESPERA DE 1952

1942

Masacre de Catavi

El gobierno de Enrique Peñaranda reprime una huelga por aumento salarial en Potosí. Se funda el MNR, con Víctor Paz Estenssoro como líder.

1944

Creación de FSTMB

Se crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), con el apoyo del MNR. Esta organización fue la base para fundar la Central Obrera Boliviana (COB).

1945

La tesis de Pulacayo

Este documento, aprobado en el Congreso de la FSTMB, ubica a la organización en el lugar de vanguardia política y propone la toma del poder. Ese año se realiza el Primer Congreso Indígena.

1947

Rebelión indígena

Levantamientos en Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí por la represión de una serie de huelgas indígenas en reclamo de tierra y libertad.

El inicio de una nueva etapa económica

El giro neoliberal

por Nicole Bonnet*

Durante la década del 80, Bolivia puso en marcha su nueva política económica, con el visto bueno del FMI. El presidente Paz Estenssoro, quien había participado de la Revolución de 1952, prometió poner fin a “la anarquía sindical” y llevó a cabo las primeras medidas neoliberales, como la privatización de empresas públicas.



© Janine Wiede/Alamy/Latinstock

En 1986, Bolivia vivía su segundo período democrático. La población, tradicionalmente rebelde a la oligarquía, el imperialismo, la dictadura, había votado sin embargo masivamente por la derecha en las elecciones del 14 de julio de 1985. El general Hugo Banzer, ex dictador, obtuvo la mayoría de los votos con su convocante consigna “Orden, paz y trabajo”. Paz Estenssoro fue electo en la segunda vuelta y solamente por el Congreso. Él también había prometido una democracia fuerte que pondría fin “a la anarquía sindical y la dictadura del proletariado”.

El fracaso del reformismo

En 1982, tras once años de dictadura militar prácticamente ininterrumpida, los bolivianos habían puesto todas sus esperanzas en la Unión Democrática y Popular (UDP), una coalición de centroizquierda que presidía Hernán Siles Zuazo, uno de los padres de la revolución de 1952. Ya habían votado por la UDP en tres oportunidades, en 1978, 1979 y 1980. En cada ocasión, la derecha (parlamentaria o militar) le había cerrado el camino a Siles Zuazo.

Cuando finalmente se instaló en el “Palacio Quemado”, el 10 de octubre de 1982, exigió a los ciudadanos un último sacrificio: tres meses de economía de guerra para detener la inflación y frenar la recesión. Sólo después, pensaba, sería posible recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, reducido a la mitad en diez años.

Pero este plan de recuperación desató la ira. La coalición se fracturó. La lucha sindical se reanudó con mayor intensidad, aprovechando la indulgencia y la debilidad de un régimen que pretendía ser popular. Paros, marchas de protesta, cortes de rutas, huelgas generales, boicot a los servicios esenciales, conducían invariablemente a torcerle el brazo al régimen. Los aumentos de salarios, financiados exclusivamente por la emisión de moneda, alimentaban la inflación, al mismo tiempo que la producción caía.

En octubre de 1982, el dólar costaba 44 pesos. Treinta y cuatro meses más tarde, en el mercado oficial, costaba 75.000 pesos, y veinte veces más “en el mercado negro”. La inflación para el año 1985 era de 21.000%. El presidente Siles, cediendo una vez más a las presiones sindicales, acortaba su mandato un año.

Señal del fracaso del reformismo. Pero también del fracaso del capitalismo de Estado. La calamitosa situación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), columna vertebral de la economía nacional, era puesta en relieve por la derecha. La Comibol acumulaba un déficit superior a 300 millones de dólares. En la mayoría de sus veintinueve empre-

sas, la producción bajaba. El robo del mineral había alcanzado proporciones industriales, la burocracia se incrementaba, la corrupción se generalizaba.

En esta crítica, la derecha sólo cometía un error: olvidaba que la Comibol había sido la gallina de los huevos de oro de todos los régimes; todo proyecto económico se había apoyado siempre en el estaño.

Neoliberalismo “sin anestesia”

Los dos proyectos de recuperación presentados durante la campaña electoral por la derecha partían de un diagnóstico idéntico y llegaban a las mismas conclusiones: el déficit se debía a un exceso de demanda. Para absorberlo, era necesario restringir el consumo congelando los salarios y aumentando los precios. Otro punto: el Estado, controlando los dos tercios de la producción, no logró ni frenar la crisis ni disciplinar a los diversos agentes económicos. Solución: abolición del proteccionismo y retorno al liberalismo.

El general Banzer había prometido “una cirugía sin anestesia” si resultaba electo. Pero fue Paz Estenssoro, quien asumió el 6 de agosto de 1985, al que se creía más mesurado, quien lo aplicó con mano dura. El decreto supremo del 29 de agosto de 1985 estableció la flotación del peso; el congelamiento de los salarios en la administración pública; la libertad de precios, contrataciones y despidos, y del comercio exterior. Preveía la desnacionalización y la privatización de las principales empresas del Estado: la Comibol y la Compañía Nacional de Petróleo.

Esta “nueva política económica” fue rechazada de plano por la central única de trabajadores, COB. El 5 de septiembre de 1985, la COB declaró una huelga general, fortalecida el 17 de septiembre por una masiva huelga de hambre. Paralelamente, el gobierno reaccionó: amenazas, estado de sitio, toque de queda y destierro de doscientos dirigentes sindicales a rincones inhóspitos de la Amazonía.

A comienzos de octubre de 1985, los mineros capitulaban, con profundo pesar y el único consuelo de una vaga promesa de diálogo. Las demás ramas sindicales habían abandonado la lucha, una tras otra. En un mes, Paz Estenssoro había logrado quebrar a la otra rama poderosa central obrera.

El gobierno también hizo oídos sordos a las críticas de la Iglesia. La Conferencia Episcopal abogó por “una economía al servicio de los hombres, y no a la inversa”. “¿A qué sectores beneficiarán estas medidas? –preguntaban los obispos–. ¿No profundizarán la brecha entre ricos y pobres? Con un salario congelado, ¿cómo

podrán los trabajadores hacer frente al aumento del costo de vida? ¿Cómo podrá la industria nacional luchar contra la competencia? ¿Cómo defender el empleo? ¿Acaso estas medidas no fomentarán la especulación en las divisas y el ‘blanqueo’ de dólares provenientes del tráfico de cocaína?”. No resulta difícil responder punto por punto a las preocupaciones que tenía la Iglesia en esos años.

“¿A qué sectores beneficiarán estas medidas?” Al sector exportador, minero particularmente, estimulado por un “dólar real” y el retorno a la libre comercialización de los minerales; al sector financiero, y finalmente al comercio, contrabandistas y traficantes de cocaína incluidos. Los representantes de estos sectores son los cerebros de esta política de rigor y también sus ejecutantes: tras la reforma ministerial del 22 de enero de 1986, Guillermo Bedregal, ex ministro de Planificación, asumió como ministro de Relaciones Exteriores. Era asesor de una filial de la Marc Rich, transnacional especializada en el comercio del oro. Sánchez de Lozada, presidente del Senado en ese momento, era también presidente de la minera Sapi-Comsur (empresa muy ligada al First National City Bank, primer acreedor de Bolivia); y desde la reforma ministerial del 22 de enero, fue ministro de Planificación.

“Estas medidas, ¿no profundizarán la brecha entre ricos y pobres?” Los salarios de la administración pública fueron congelados, pero no para todos los estratos sociales: los parlamentarios y la alta jerarquía militar recibieron un apreciable aumento de sus remuneraciones que superaban los mil millones de pesos...

“¿Cómo se protegerá la industria autóctona?” La producción nacional dependía en sus dos terceras partes de productos básicos importados; no era competitiva, ya que el valor agregado era mínimo. En el corto plazo, era toda la industria la que estaba condenada a muerte. “¿Qué sucederá con el empleo?” Es difícil evaluar las consecuencias de la libertad de contratación en el sector privado. Se estimaba en diez mil el número de obreros despedidos en la capital. En el sector público, había treinta mil despedidos. “¿Qué sectores absorberán esta mano de obra?” En el mejor de los casos: la colonización de tierras calientes, el contrabando, la especulación y el tráfico de cocaína...

“¿Contribuirán estas medidas a una mayor especulación en las divisas y al blanqueo de los dólares provenientes del tráfico de cocaína?” El decreto insistía en el hecho de que los bancos debían estar abiertos, sin ninguna restricción, a la repatriación de divisas, lo que favorecía directamente el blanqueo de dólares provenientes del narcotráfico.

La “nueva política económica”, al parecer,

satisfacía plenamente al FMI, que debía efectuar un primer desembolso de 50 millones de dólares, correspondiente a la tercera parte de un crédito *stand-by*. Por su parte, Washington, que había apostado a la candidatura del general Banzer, también estaba tranquilo: el gobierno de Paz Estenssoro conducía una política atractiva para el gran capital, y había firmado un acuerdo con la OPIC (Overseas Private Investment Corporation), una institución estadounidense que protege las inversiones privadas en el exterior. Y se sabe que Bolivia formaba parte del grupo de quince países a los cuales se aplicaría prioritariamente el “Plan Baker”.

“Un gabinete de patrones”

Esos primeros siete meses del régimen generaron un profundo malestar en el seno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido que estaba en el poder, muy especialmente entre los hombres políticos. Las principales quejas eran tres: el presidente gobierna autocráticamente; el Estado es Paz Estenssoro; antes de tomar una decisión importante, rara vez se consulta a los altos dignatarios del partido.

En segundo lugar, los líderes políticos del MNR estaban preocupados por el costo social de las medidas económicas. Javier Campero Paz, secretario ejecutivo del partido, quien prometía “hacer que vuelvan a flamear las banderas de la Revolución Nacionalista del 9 de abril de 1952”, tuvo varias discusiones violentas con Sánchez de Lozada, ya que “Goni” defendía el neoliberalismo a ultranza.

Finalmente, algunos dirigentes del MNR temían sobre todo ver a su partido absorbido por la Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido conservador del general Banzer. De hecho, el equipo del MNR que diseñó la “nueva política económica” compartía con los dirigentes de la ADN los mismos intereses.

El “pacto por la democracia” firmado entre Paz y Banzer el 16 de octubre de 1985 simplemente formalizó una comunión de intereses. La distribución de las “porciones de poder” se había realizado anteriormente. La ADN controlaba ya el tribunal electoral, las aduanas, los aeropuertos y el Banco Central.

El ala izquierda del MNR boicoteó la ceremonia de investidura del nuevo gabinete, considerando que “era un gabinete de patrones”, tal como declaró Ñuflo Chávez. ■

*Periodista.

Traducción: Gustavo Recalde



El largo estallido

por Walter Chávez*

El proceso neoliberal iniciado en la década del 80 con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro se consolidó durante las dos presidencias de Gonzalo Sánchez de Lozada, principalmente a través de “El Plan de Todos”. A principios de los años 2000 el pueblo volvió a resistir las medidas que lo empobrecían con las denominadas “Guerra del agua” y “Guerra del gas”.

En abril de 2000 la “Guerra del agua” expulsó del país a la transnacional Bechtel, que intentaba subir las tarifas del agua potable en Cochabamba (1) y en enero de 2003 un levantamiento popular en La Paz acabó con el “impuestazo” a los sueldos (2) propuesto y exigido por el Fondo Monetario Internacional para rebajar el déficit fiscal que, de acuerdo a datos oficiales, en Bolivia bordeaba el 8,5%.

Estos dos momentos de resistencia al modelo neoliberal preanunciaban ya la insurrección popular que el viernes 17 de octubre de 2003 echó del gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada, el empresario minero, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que en junio de 2002 ganó las elecciones generales que le abrieron la posibilidad de gobernar por segunda vez el país del Altiplano.

Es inevitable comparar la salida de Sánchez de Lozada con la de Fernando de la Rúa en Argentina, ambos desalojados del poder por una explosión de descontento popular. Para Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada significó el punto más alto del período neoliberal; su momento más agresivo y también más lúcido. Además, la insurrección boliviana es el resultado de una acumulación y politización del movimiento social, con reivindicaciones que van más allá de la mera renuncia del Presidente y que buscan la liquidación de la ortodoxia neoliberal y la consecución de un nuevo pacto social, a través de una Asamblea Constituyente.

El modelo de “Goni”

Hijo de un empresario boliviano que llegó a ser asesor de Nelson Rockefeller, Gonzalo Sánchez de Lozada se educó en Estados Unidos y, después de amasar fortuna en la minería, en 1979 ingresó en la actividad política, dispuesto a introducir en Bolivia la “modernidad” neoliberal. Buscó un partido histórico, el MNR, organizó un entorno de expertos en economía y revolucionó los métodos del análisis y la acción política del país mediante el empleo de encuestadores y especialistas en marketing político, siempre estadounidenses. Primero fue elegido diputado por el departamento de Cochabamba, luego ministro de Planeamiento del gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), encargado de dar el giro neoliberal a la economía y sociedad bolivianas. Con la colaboración de Jeffrey Sachs, elaboró el Decreto Supremo 21.060 (promulgado el 29/8/85), con el que la economía boliviana entra de lleno en el neoliberalismo. Sin embargo, el grueso de las reformas del nuevo modelo recién fue implementado cuando “Goni” –diminutivo con el que se conoce a Sánchez de Lozada en Bolivia– fue elegido Presidente, en las elecciones de 1993. La sociedad boliviana, golpeada y postergada por el militarismo de los 60 y 70, fue seducida por la predica “modernizante” de “Goni”. Su plan de gobierno, llamado “El Plan de Todos”, prometía elevar el crecimiento de la economía al 10% anual; crear 500 mil nuevos empleos –lo que equivalía a reducir prácticamente a cero el desempleo–; atraer inversión extranjera productiva mediante la privatización de

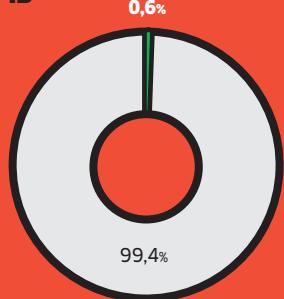
las empresas estatales (telecomunicaciones, transportes, hidrocarburos, etc.); reformar los sistemas de pensiones, e implementar reformas en la justicia y la educación. Es decir, un giro neoliberal completo.

Ese programa estuvo sustentado por una enorme ofensiva ideológica sostenida por analistas, polítólogos e intelectuales que convalidaron ante la sociedad el modelo neoliberal. Fueron estos ideólogos, agrupados en fundaciones, ONG y el sistema mediático, los que de alguna manera sostuvieron conceptualmente la viabilidad del modelo, aun cuando a partir de 1998 se hace evidente que la economía boliviana atravesaba por una grave crisis. En efecto, el gobierno de Sánchez de Lozada nunca pudo cumplir las metas de crecimiento, no creó empleos y la privatización empezó a ser cuestionada por haber atraído capital especulativo y hasta corrupto, que enviaba el poco excedente al exterior, sin beneficiar en nada al país.

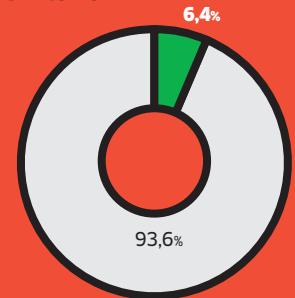
Al cabo de década y media de neoliberalismo, la única modernidad a la que Bolivia asistía se expresaba en la proliferación de automóviles de lujo, en los que circulaban las élites empresariales y políticas, y los cybercafés, que vendían a los bolivianos el espejismo de estar asistiendo a alguna forma de globalización. Es así que en el año 2000 se despierta el descontento popular, cuando comienzan los bloqueos en el Altiplano para exigir mayor atención en salud, educación y desarrollo de parte del Estado y el pueblo de Cochabamba declara la “Guerra del agua” a la Bechtel por haber subido imprevistamente las tarifas →

Bolivia en América del Sur
(en porcentaje, 2015)

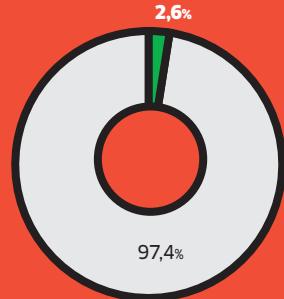
PIB



Territorio



Población



© DAVID MERCADO/REUTERS/LATINSTOCK

Octubre negro. Los habitantes de La Paz y Cochabamba se manifestaron contra la privatización del gas y fueron violentamente reprimidos.

→ del agua potable, logrando que esa compañía abandone el país. Aquella fue la primera vez que se rechazó al capital transnacional. “Hemos logrado un triunfo histórico sobre la globalización”, dijo entonces Óscar Olivera, líder de la Coordinadora del Agua.

Las cifras macroeconómicas justificaban holgadamente la rebeldía popular. Los 15 años de neoliberalismo habían favorecido a una élite empresarial y política y al capital extranjero, pero la economía nacional se había estancado y en algunos casos había retrocedido de manera alarmante. En 2002 las exportaciones bolivianas alcanzaban los 1.300 millones de dólares; cifra exactamente igual a la de 1980. El ingreso per cápita de los bolivianos era de 940 dólares al año en 1980; en 2002 fue de 960 dólares. Lo que no permaneció estancado fue el índice de desempleo, ni el de la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el año 2003 el 58,6% de los bolivianos era pobre y en el campo esta cifra se vuelve escalofriante: el 90% vivía bajo la línea de pobreza. Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 2003, en el área rural los pobladores subsisten con menos de un boliviano al día (10 centavos de dólar). De los 8 millones de pobladores de Bolivia, 3,8 millones son campesinos, según el INE. Esto explica el grado de combatividad de los movimientos sociales, conformados principalmente por gremios y sindicatos campesinos, que fueron los que sostuvieron las movilizaciones y bloqueos desde 2000 hasta la renuncia de Sánchez de Lozada.

El surgimiento de la oposición

Desde que sectores criollos fundaron la República de Bolivia en 1825, los campesinos e indígenas siempre fueron excluidos. De cuando en cuando se fueron dictando normas para despojarlos de sus tierras. Recién con la Revolución Nacional de 1952 los indígenas pasan a ser ciudadanos y se les concede el derecho al voto. Sin embargo, no participaron activamente de la vida política a lo largo de todo el siglo XX. Antes de 2000, las ideas progresistas estaban encarnadas por las izquierdas universitarias, ciertos grupos minoritarios de las clases medias –derrotados ideológicamente a partir del derrumbe del socialismo real– y por los sectores mineros que fueron diezmados en 1985 por el Decreto Supremo 21.060, que los despojó de sus fuentes de trabajo.

Este dato es central, pues explica la inexistencia de oposición al modelo neoliberal y al programa de reformas de “Goni” durante su primer período de gobierno. Sin embargo, ese tejido social escindido empieza a reagruparse en otros ámbitos. Los mineros relocalizados (despedidos de las minas) se asientan en el trópico del departamento de Cochabamba y comienzan a sembrar coca. Y de allí emerge, a partir de la segunda mitad de los años 90, el movimiento cocalero que en 2002, agrupado en un partido político llamado Movimiento al Socialismo (MAS), lleva al Parlamento a 35 indígenas y campesinos. Su líder, Evo Morales, disputó en el Congreso la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada.

Paralelamente, en el Altiplano boliviano resurge un movimiento de reivindicación aymara, que en septiembre de 2000 realiza una contundente huelga general y un bloqueo de carreteras que pone al pre-

sidente de entonces, Hugo Banzer Suárez, al borde de la renuncia. Los indígenas aymaras también conformaron un partido político en 2001, el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), que llevó a seis indígenas al Parlamento, entre ellos a su líder Felipe Quispe.

La irrupción de los indígenas en las elecciones de 2002, copando casi un tercio del Parlamento boliviano, causó un profundo resquemor en las élites, las clases medias y los llamados poderes fácticos bolivianos; es decir, los que determinan en los hechos el rumbo del país: los empresarios privados, el ejército y la embajada de Estados Unidos. El MAS y el MIP aca- pararon el 28% de los votos válidamente emitidos y frente a eso los partidos tradicionales –de centro de recha– el MIR y MNR (después se sumó la NFR) asu- men un acuerdo para controlar el gobierno y el Par- lamento. Pero poco pueden hacer para enderezar la economía del país y para satisfacer las demandas po- líticas de esta nueva izquierda indígena, potenciada por otros movimientos sociales como los sindicatos campesinos del Oriente, la Coordinadora del Agua de Cochabamba y los ayllus (comunidades originarias) de Potosí, que empezaban a cobrar una importancia decisiva en la política boliviana, aunque hasta enton-

Es en este punto que los movimientos sociales y partidos de la nueva izquierda encuentran por pri- mera vez un objetivo común en el cual centrar su lucha: la exigencia de que la propiedad de los hidro- carburos vuelva a manos del Estado y la no exportación por Chile, ni para Chile, del gas natural. Este es el origen de la llamada “Guerra del gas”. De manera conexa –e incluso anterior a esta demanda– los mo- vimientos sociales y la nueva izquierda exigieron in- sistentemente al gobierno de Sánchez de Lozada la convocatoria a una Asamblea Constituyente para re- dactar una nueva Carta Magna: “Con ello pretende- mos cambiar al modelo neoliberal desde sus raíces y, a la vez, enmendar definitivamente el pacto social que hoy no cubre suficientemente toda la realidad so- cial ni cultural del país”.

La consigna de recuperar el gas fue creciendo. El gobierno nunca informó sobre las reales cifras del negocio, pero extraoficialmente se supo que las transnacionales pensaban vender el gas a Estados Unidos a un precio irrisorio: 0,7 centavos de dólar el millar de pies cúbicos, siendo que Brasil pagaba 1,7 dólares y en el mercado mundial el precio oscilaba entre 2 y 4,5 dólares. “Es evidente pues que si se lle-

Ajuicio

En enero de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó un juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, radicado en Estados Unidos luego de las revueltas de 2003, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes de funcionario público en la privatización de la empresa ENFE.

Con la privatización del gas, Bolivia sólo podría beneficiarse con las regalías que dejen la explotación y la exportación.

ces sólo como opositores al modelo neoliberal, cen- trados todavía en reivindicaciones particulares.

Al asumir su nuevo período de gobierno en agosto de 2002, y ante la parálisis de la economía, Gonzalo Sánchez de Lozada encuentra que el único modo de re- componer el modelo es favoreciendo la exportación del gas natural, del que en los últimos años se descubrieron enormes yacimientos que hacen de Bolivia la segunda reserva –después de Venezuela– del continente.

En 1997, dos días antes de concluir su primer período presidencial, Sánchez de Lozada firmó un decreto -Nº 24.806- por el cual el gas boliviano pasó a ser propiedad de las empresas transnacionales, que conformaron el consorcio Pacific LNG (la española Repsol YPF, British Energy y Panamerican Energy), por lo tanto Bolivia sólo podría beneficiarse con las regalías que dejen la explotación y la exportación. Desde entonces, el Estado sólo dispone de la facultad de elegir la manera y el lugar por dónde exportar el gas.

Unidos por un objetivo

En este contexto, Sánchez de Lozada emprende una serie de negociaciones con el consorcio Pacific LNG para enviar el gas a Estados Unidos vía Chile. Ahí mismo comenzaron a agitarse las fibras del naciona- lismo boliviano, pues Chile tiene una deuda histórica con Bolivia desde que en la Guerra del Pacífico (1879) le arrebatara sus costas, privándola del acceso al mar.

vaba adelante este negocio, Bolivia recibiría miserias como regalías. Por otra parte, mientras California hubiera encendido cada noche sus luces de neón con el gas boliviano, aquí en el Altiplano nuestros herma- nos habrían seguido cocinando sus alimentos con bosta de vaca y de burro, como lo hacen hoy. Por eso, este proyecto era inviable, indigno de realizarse, eco- nómica y políticamente. Primero se debe recuperar la propiedad sobre el gas y luego exportar”, dice Felipe Quispe, líder del MIP (3).

Ocho meses antes del estallido, los movimientos sociales, el MAS y el MIP, venían desarrollando una amplia campaña para recuperar el gas. Sin embargo la consigna demoraba en prender. Pero cuando todo estaba estancado funcionó otra vez esa vieja dialécti- ca del azar y la necesidad. El 12 de septiembre, los ma- llkus, jilakatas y mamat’allas (autoridades indígenas, hombres y mujeres, de 30 provincias del Altiplano), se declaran en movilización permanente y piden que se libere al jilakata Felipe Huampo, apresado por la Poli- cía Nacional y los fiscales del Poder Judicial, acusado de haber empleado la justicia comunitaria –en reali- dad un ajusticiamiento– contra dos ladrones de gana- do, en su comunidad, a orillas del Lago Titicaca.

Como las autoridades del gobierno central se nie- gan a reconocer el “acto de justicia comunitaria”, las comunidades del Altiplano declaran el bloqueo de caminos y carreteras y sus principales líderes de- →

LAS MANIFESTACIONES DE ABRIL DE 2000

La Guerra del agua

por **Laura Oszust**

En 1999 el gobierno del general Hugo Banzer, apoyado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, vendió la empresa estatal SEMAPA, encargada de la distribución de agua potable y del alcantarillado del municipio de Cochambamba, al consorcio internacional Aguas del Tunari. Esta multinacional era propiedad de las compañías estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa, y las bolivianas Petrovich y Doria Medina. Al mismo tiempo, según Marcela Oliveras, activista por el derecho al agua, también se privatizaban los pequeños sistemas autónomos que abastecían al 60% de la población.

Para asegurar la privatización el gobierno aprobó la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, mediante la cual le otorgaba a Aguas del Tunari el monopolio sobre todos los recursos del agua; incluso estipulaba que la población requería de una licencia para recoger el agua de lluvia.

Al poco tiempo, la empresa aumentó un 200% las tarifas del agua, con un costo mínimo de 20 dólares por mes, tanto en la ciudad como en el campo. Frente a la imposibilidad de la ciudadanía de afrontar el gasto, la empresa advirtió que si los ciudadanos no pagaban se les cortaría el servicio. En este contexto, el malestar de la población fue creciendo, hasta que a fines de 1999 un grupo heterogéneo compuesto por sindicatos obreros, juntas de vecinos, campesinos regantes, maestros y estudiantes, entre otros, dio origen a la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida.

Entre enero y abril de 2000 los vecinos de Cochabamba realizaron distintas protestas de gran magnitud en la plaza principal, bloqueos de las carreteras más importantes del país y una huelga que cerró por cuatro días la economía de la ciudad. El 8 de abril de 2000 Banzer decretó el Estado de Sitio, permitiendo el arresto de activistas y la represión de las protestas.

El 9 de abril, cerca de Achacachi, en una manifestación reprimida por soldados es asesinado Víctor Hugo Deza, un joven de 16 años. Este hecho escribió el final de las protestas. Ante la crisis económica que sufría el país y el asesinato de Deza, el presidente Banzer se vio obligado a rescindir el contrato con Aguas del Tunari, remunicipalizar la empresa SEMAPA y retrotraer las tarifas a los precios anteriores al 2000.

→ cretan una huelga de hambre que se realiza en El Alto, una ciudad poblada casi íntegramente por aymaras, donde el 92,4% de los ciudadanos son pobres. Este movimiento de rebeldía contra el ordenamiento jurídico del Estado centralista coincide y se potencia con una movilización a nivel nacional decretada por los movimientos sociales el 19 de septiembre: queda así declarada formalmente la “Guerra del gas”. La movilización es exitosa, participan más de 100 mil personas en todo el país y el bloqueo de carreteras se agrava en el Altiplano. Un día después, el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, interviene al mando de un pelotón del ejército en la localidad de Warisata. Se desarrolla una balacera y cinco campesinos resultan muertos. Esa fue la chispa que encendió la pradera. Las muertes de campesinos aymaras –entre ellos una niña de ocho años– generan un amplio movimiento de solidaridad y las comunidades deciden declarar la guerra sin concesiones al gobierno gonista: “Ahora sí, guerra civil”, es la consigna. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto declara un paro general de 24 horas y luego otro de carácter indefinido, el 8 de octubre. Lo mismo hace la Central Obrera Boliviana (COB), con el apoyo de los mineros que, después de muchos años, vuelven a movilizarse. A las demandas por la recuperación del gas y por el inmediato cese de la masacre de los aymaras se suma un contundente pedido de renuncia al Presidente de la República.

La estrategia del gobierno de Sánchez de Lozada, explicada en las reuniones de gabinete, es no actuar; dejar “que los bloqueadores se rindan por cansancio”. Pero la revuelta crece, el paro de El Alto es contundente, impide la llegada de combustibles y alimentos a La Paz, ante lo cual el gobierno ordena la toma militar de la ciudad aymara. El sábado 11 y el domingo 12 de octubre prácticamente se combate calle por calle, pero la superioridad numérica y logística del ejército no puede con la organización de los vecinos, que resisten con palos y piedras, aunque sin causar bajas a las fuerzas militares. Todos los muertos de aquellas dos jornadas son civiles (más de 30), exceptuando un soldado que habría sido asesinado de un disparo en la cabeza por un capitán de la Fuerza Aérea, cuando se negó a disparar contra el pueblo.

En lugar de hacer retroceder al pueblo aymara, la masacre lo une aun más y la “Guerra del gas” se amplía al principio timidamente a Potosí, donde los ayllus se pliegan a la “guerra civil” y marchan sobre la sede de gobierno; más tarde a las comunidades de Sucre y Cochabamba y a las zonas pobres de La Paz. El ejército responde el lunes 13 con un nuevo baño de sangre: 30 muertos y cientos de heridos de bala, esta vez ya en el centro y zonas periféricas de La Paz.

Ese fue el último acto de fuerza que toleró el conjunto de la sociedad boliviana. En la tarde del miércoles 15 las clases medias, que permanecían al margen de los conflictos sociales, se movilizan, declaran la huelga de hambre general y apoyan el pedido de renuncia del Presidente. Este hecho es relevante, pues

hasta ese momento el conflicto estaba polarizado entre las cúpulas de los partidos tradicionales que sostienen al gobierno y los movimientos sociales, reprimidos por el ejército sin contemplaciones. En este punto se apoyaba el argumento de Sánchez de Lozada hacia el exterior: se trataba de una conspiración golpista alentada por el “narcoterrorismo”⁽⁴⁾. Pero cuando las clases medias se suman al pedido de renuncia rompen esa polarización y cierran el consenso en contra del Presidente. El impacto político de este desarrollo de los acontecimientos es decisivo, toda vez que los líderes de clase media que encabezaron la huelga habían apoyado o tolerado pasivamente la imposición del modelo neoliberal durante la década del 90.

En dos días se abren decenas y decenas de piques de huelga en todas las iglesias del país. Sánchez de Lozada, que ya había abandonado el Palacio de Gobierno, se atrincheró en la residencia presidencial –más cercana a los barrios residenciales– y envía mensajes confusos, mientras la protesta avanza. Miles de campesinos y mineros avanzan sobre La Paz para definir la “guerra civil” y en el ámbito urbano las clases medias se confunden con los indígenas mientras corean “¡Que se vaya el asesino!”.

De acuerdo a una encuesta hecha por Radio FIDES el jueves 16 de octubre, dos tercios de los bolivianos querían que Sánchez de Lozada renunciara, pero la embajada de Estados Unidos se oponía rotundamente. Es esto lo que alargó por unas horas la agonía del régimen. Sin embargo, esa misma noche el embajador Greenlee se convence de que todo está perdido y opta por el repliegue. Al mediodía del viernes 17, “Goni” envía su renuncia escrita al Congreso y huye en un helicóptero que le había enviado el presidente peruano Alejandro Toledo.

Según estimaciones del sociólogo y actual vicepresidente Álvaro García Linera⁽⁵⁾, la insurrección que depuso al presidente Sánchez de Lozada fue superior en movilización social a la de 1952 con la Revolución Nacional, con la diferencia de que esta vez los insurrectos no llegaron a medir militarmente sus fuerzas con el ejército y tampoco pretendían tomar el poder. Se contentaron con la renuncia del Presidente, símbolo del neoliberalismo, y con la promesa de que su sucesor hará recortes esenciales al modelo sin acabar con la institucionalidad democrática.

La nueva izquierda boliviana no tenía un proyecto programático de toma del poder, ni aspiraba a una eventual dictadura obrerista, como proponía la izquierda en los 70. Por el contrario, fueron los mismos líderes de los movimientos sociales quienes propusieron la idea de que la renuncia de Sánchez de Lozada debería dar paso a una sucesión constitucional, encumbrando al vicepresidente Carlos Mesa, con el apoyo del Parlamento.

Por otra parte, aun siendo artífices del recambio presidencial, ni el MAS, ni el MIP, ni la Confederación Obrera Boliviana (COB), ni los mineros asumieron cuotas de poder en el nuevo gobierno, sino que



© Nick Baylis/Alamy/Latinstock

Volver al poder. El Movimiento Nacionalista Revolucionario retoma la presidencia en 2002 por poco tiempo. Sánchez de Lozada renuncia en 2003.

81 muertos

y 420 heridos fueron el saldo de la represión desatada por el gobierno de Sánchez de Lozada en la “Guerra del gas” en 2003. El ex presidente enfrenta un juicio civil por la violación de derechos humanos.

prefirieron quedar al margen y en estado de alerta permanente para ver si Carlos Mesa, el sucesor constitucional de Sánchez de Lozada, es capaz de frenar la ortodoxia neoliberal, recuperar el gas y convocar a una Constituyente.

La inhibición de los movimientos sociales de tomar parte en este nuevo gobierno estaba claramente influenciada por el discurso mediático difundido fuera y dentro de Bolivia por el viejo orden, del que participa activamente la embajada de Estados Unidos. “Un gobierno con cocaleros, aymaras y los retazos de los partidos políticos tradicionales fácilmente sería estigmatizado como narcoterrorista, boicoteado desde afuera y desde adentro para llevarlo a una bancarrota en la administración y luego ir a nuevas elecciones para recomponer el modelo desde el centro, con las clases medias que siempre son tibias. Nosotros no tenemos que desesperarnos, tenemos que ir cerrando etapas, lo nuestro sigue siendo un anuncio continuo de lo que puede venir, una acumulación permanente que terminará con un gobierno legítimo de esta nueva izquierda, logrado por la vía democrática electoral”, afirmaba el diputado Filemón Escobar. ■

1. Luis Bilbao, “En Bolivia colapsa una estrategia”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, noviembre de 2000.

2. Walter Chávez, “La rebelión boliviana”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, marzo de 2003.

3. Entrevista a Felipe Quispe, *ibid*.

4. Declaración de Sánchez de Lozada a los medios, en la residencia presidencial, 15-10-03.

5. Programa de televisión “El Pentágono” (PAT), 21-10-03.

* Editor del bimestral *El Juguete Rabioso*, La Paz, Bolivia.

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

El despertar indígena ante la privatización

Los nuevos sujetos de poder

por Enzo Girardi*

El movimiento etno-político liderado por la comunidad aymara surgió como actor clave en las protestas contra las privatizaciones a comienzos de la década del 2000. La implementación de un Estado multi-étnico, el retorno “a lo propio”, la protección de la naturaleza y la resistencia al neoliberalismo siguen siendo hoy sus principales banderas.



© Pablo Caicedo/Alamy/Latinstock

Las comunidades indígenas batallan por medio del activismo etno-político para reivindicar su identidad y la vigencia de sus derechos. Sitúan al indio como referente de una articulación movimientista comunitaria con el fin de “indianizar” la agenda política.

Los indígenas rescatan y asumen el concepto de “ciudadanía étnica”, que comprende a los miembros de un determinado grupo sociocultural en un contexto multicultural; pero lo moldean y lo profundizan hasta lograr una redefinición política e ideológica de sí mismos, de su rol y aspiraciones, de modo tal de presentarse como portadores de una “ciudadanía etno-política”, que expresa al individuo comprometido con su nacionalidad. Este activismo sirvió para desmontar la representación socio-política que, articulada sobre las concepciones de sociedad civil y mercado, ejercieron los partidos políticos tradicionales para recrear un esquema de liberalismo social.

El liberalismo social había sido el recurso en términos de representación sociopolítica con el que el sistema político formal matizó su adscripción al neoliberalismo. Las categorías de ciudadanía y de sociedad fueron utilizadas para desvirtuar las pretensiones del movimiento etno-político de erigirse en expresión “antisistema” y deslegitimar su compromiso con la construcción de un nuevo paradigma nacional.

El neoliberalismo estructura la sociedad civil a partir de los mandamientos del mercado: bendice el éxito individual, fomenta la capacidad de consumo como representación de realización personal, entroniza al individualismo como estilo de vida y hace emergir la inestabilidad y la precarización del trabajo formal. Los lazos de solidaridad se resienten y los compromisos colectivos se diluyen. El Estado cede atribuciones estratégicas para convertirse en gestor del interés privado.

Los nuevos protagonistas

La adscripción de los agentes de poder político, económico, cultural y mediático a la doctrina neoliberal revitalizó el activismo indígena ya que a su estrategia histórica de resistencia al Estado-nación agregó una nueva dimensión: la del rechazo a los imperativos que encarnan los agentes estatales y privados transnacionales.

El movimiento etno-político aspira a concretar el Estado multiétnico, al que imagina como medio para diseñar una nueva democracia, incluyente y sin hegemonías, que modificará la geografía del poder; una democracia pluricultural que incorporará al indio al proceso de

constitución de la ciudadanía. Promueve la politización de la etnicidad y alienta la movilización social para frustrar el modelo de sociedad y presupuestos de desarrollo puestos en práctica por la doctrina neoliberal.

Protagoniza un proceso de resistencia que apunta a desbaratar distintas expresiones de hegemonía: la política, la económica y la cultural representadas en el Estado-nación de la República; la de las transnacionales, interesadas en controlar los recursos estratégicos y los segmentos más rentables de la economía; los proyectos externos de control nacional guiados por países a los que considera ejecutores de designios neoimperiales (Estados Unidos, países líderes de la Unión Europea) y la de los actores políticos, económicos y mediáticos internos comprometidos con estos planes o funcionales a ellos.

El movimiento etno-político avanza en este proceso a través de dos etapas. En primera instancia, presiona para revertir los mecanismos y las consecuencias inherentes al paradigma neoliberal: rechaza en las calles, con movilizaciones y protestas, las políticas del Gobierno, denunciando la corrupción gubernamental para debilitar la credibilidad del Estado y de las entidades que dan significado al modelo. Expressa un discurso de poder alternativo, que argumenta la necesidad de una democracia multicultural y un Estado plurinacional.

En segunda instancia, acciona sobre la gestión externa del gobierno neoliberal para impactar sobre el marco de alianzas con grupos de poder político y económico extranjeros y con los organismos multilaterales, quienes representan la estructura de apoyo internacional sobre la que se sostiene el modelo.

Esta expresión movimientista no sólo recuperó para el debate la discusión histórica acerca de la administración del patrimonio público y de los recursos naturales, sino que también insertó en la agenda gubernativa sus demandas culturales, políticas y económicas.

Encarna un proyecto de poder que se hace eco del punto de vista indio de lo que significa la nación y de lo que debería representar el Estado. Plantea la necesidad de perfeccionar la democracia y transformar la práctica de gobierno por medio de un Estado multiétnico.

Si desde una mirada superficial las movilizaciones de octubre de 2003 representaron un brote masivo de nacionalismo contra el proyecto del Gobierno neoliberal de exportar gas a Estados Unidos y México a través de Chile, la posibilidad de leer estos hechos con una mirada más profunda y extendida en el tiempo revela la emergencia a la superficie política e institucional de un cuestionamiento

global, integral, a la representación del Estado y del Gobierno en la República de Bolivia.

Levantar la cabeza

Este cuestionamiento fue promovido y protagonizado por actores a los que el esquema republicano ubicó en un espacio de subordinación, pero que acreditan una identidad vital y enraizada, que se asienta en un denso patrimonio de saberes y experiencias históricas. Los indios resistieron los sucesivos embates para asimilarlos al orden establecido y la crisis del sistema oficial en la segunda mitad del año 2003 les brindó la oportunidad de reaparecer y confiar en sus prioridades.

Irrumpieron con peso propio en el escenario nacional porque:

- Demostraron claridad de objetivos, cohesión interna y capacidad de acción con relevantes efectos políticos internos y externos.
- La crisis de octubre de 2003 fue el desenlace de un prolongado proceso de decadencia, al que contribuyeron tanto la falta de credibilidad y representatividad de sus protagonistas, como los efectos sociales y económicos de las políticas neoliberales.
- La sustanciación de un escenario global de mayor interdependencia no sólo ha reformulado las relaciones de poder entre Estados centrales y periféricos, sino que también ha reconfigurado el rol de las comunidades nacionales frente a los Estados.

El activismo etno-político convirtió a los indígenas en sujetos de poder, capaces de intervenir tanto en la dimensión interna como externa del Estado. En este contexto, los aymaras dejaron atrás la categoría de sujeto particular para ejercer el liderazgo de un emergente sujeto hegemónico que dio significado a la participación popular.

Lideraron la expresión populista que terminó con el gobierno de Sánchez de Lozada, y que acabó con casi dos décadas de hegemonía neoliberal.

Los aymaras confrontaron la crisis de legitimidad que socavó los cimientos de la política formal y las representaciones partidarias y expusieron cohesión y unidad de acción frente a la dispersión del esquema político oficial.

Su intachable espíritu nacionalitario se erigió en faro que irradió el sentimiento de pertenencia a un sistema de valores y de prácticas que ha sobrevivido a los embates del poder, y que por ello se ha confirmado como genuino y perdurable.

La envergadura del liderazgo aymara se pone de manifiesto en el impacto que sus demandas registran en las tres dimensiones que rigen para las políticas públicas: la simbólica-concep-

tual, la sustantiva y la operativa (1).

En la primera dimensión, en la que tiene lugar la construcción social de las demandas y se establece el sistema de creencias, los aymaras han legitimado e incorporado sus reclamos a la agenda política, imponiendo sus valores y referencias culturales como señales de identidad.

En la segunda dimensión, aquella en la que se establecen líneas de acción, el alto grado de cohesión interna que expresaron las movilizaciones, convirtieron a la comunidad en un agente político sólido, de influencia profunda y cotidiana, cuya capacidad de acción se ha situado por encima de la coyuntura.

En la tercera dimensión (ejecución efectiva de políticas) la ausencia de respuestas desde el Gobierno y del sistema político oficial a las demandas del movimiento etno-político aceleró el derrumbe del sistema de poder sobre el que se afirmaba la República.

El crecimiento electoral y la asunción de responsabilidades concretas de administración en distintas áreas y niveles del Movimiento al Socialismo y el Movimiento Indio Pachakuti ponen de manifiesto que los aymaras cuentan con herramientas políticas para gestionar el Estado.

La acción indígena

El movimiento etno-político se apropia del espacio público y recupera los símbolos de poder indígena para consolidar el sentido de pertenencia e impulsar la movilización colectiva. Destacan como referencias identitarias en la acción beligerante contra el Estado la whipala (bandera indígena), la hoja de coca o las imágenes de los líderes históricos: Tupac Katari, Bartolina Sisa.

Se trata, según intelectuales indígenas, del advenimiento de los tiempos del pacha tixra y del pachakuti; es decir, la práctica cotidiana que recupera la memoria histórica para plantear el devenir de un nuevo orden social asentado en los pensamientos originarios.

Este retorno a lo propio insinúa la emergencia de un paradigma que combina pensamientos y prácticas originarias, destinado a romper con la trama histórica de la colonización. ■

1. Víctor Toledo Llancaqueo, "Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina, 1990-2004. Las fronteras indígenas de la globalización", en Pablo Dávalos (comp.), *Pueblos Indígenas, Estado y Democracia*, Buenos Aires, CLACSO, 2005.

Fragmento del libro *El ejemplo Aymara en Bolivia*, editorial Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009.

*Licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Nacional de Córdoba) y especialista en Asuntos Internacionales. ©2009, Capital Intelectual

El MAS, el nacimiento de una alternativa

El surgimiento de una “nueva izquierda”

por **Walter Chávez y Sergio Cáceres***

Los campesinos que migraban del Altiplano empezaron a asentarse en la región del Chapare después del cierre de empresas estatales en el proceso de privatización. Buena parte de este contingente comenzó con el único camino posible para sobrevivir: sembrar coca. Los gobiernos bolivianos, presionados por Estados Unidos, no fueron capaces de frenar esta actividad, y los cocaleros, activos partícipes de las protestas de fines de la década del 90, ingresaron a la escena política a través del Movimiento al Socialismo. Con un liderazgo distinto, gran capacidad de convocatoria, exigiendo el respeto por las tradiciones y luchando contra la “nueva política económica”, lograron la elección de Morales como diputado en 1997, en lo que sería el primer paso hacia la consolidación de una novedosa opción política.

El 13 de junio de 2002, el Movimiento al Socialismo (MAS), el “partido” de Evo Morales, obtuvo el segundo lugar en las elecciones y, según la Constitución, pasó automáticamente a disputar la Presidencia en el Congreso Nacional con Gonzalo Sánchez de Lozada, el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que aglutina a los sectores medios y conservadores alineados con las políticas fondomoneytaristas.

El MAS es el instrumento político creado por las confederaciones campesinas del Chapare y de todo el trópico de Cochabamba, el lugar más reprimido por las fuerzas policiales bolivianas –bajo el financiamiento y asesoramiento de la Drug Enforcement Agency (DEA) y otras entidades estadounidenses– debido a que allí se siembra la hoja de coca. No hay cifras exactas, pero se estima que en los últimos quince años, en esa región han muerto más de 250 campesinos defendiendo su derecho a sembrar coca.

La región del Chapare es el lugar donde, desde principios de los ochenta, se fueron asentando los campesinos que migraban del Altiplano. En 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto 21.060, por el cual Bolivia pasó de una economía mixta de corte estatista a un neoliberalismo duro y ortodoxo. Se cerraron las empresas estatales como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y más de 20.000 mineros fueron despedidos. Una buena parte de este contingente se internó en el Chapare y tomó el único camino posible: sembrar coca, pues otros productos agrícolas ni son rentables ni tienen mercado seguro.

“Coca no es cocaína”

El gobierno de Estados Unidos empezó a preocuparse por la coca del Chapare desde fines de los 80, alegando que esa producción derivaba directamente hacia el narcotráfico. Pero el presidente de entonces, Jaime Paz Zamora (1989-93) se negó a penalizar el cultivo de la hoja de coca y, apelando a una comprensión histórica y soberana del problema, organizó la llamada “diplomacia de la coca”, bajo el lema “coca no es cocaína”. Cuando Paz Zamora terminó su mandato fue duramente atacado por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, varios de los dirigentes de su partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron enjuiciados –uno de ellos, Oscar Eid, fue a la cárcel– por supuestos vínculos con el narcotráfico y el propio Paz Zamora perdió su visa para Estados Unidos.

Estas medidas formaron parte de una

campaña de intimidación a todos los políticos bolivianos. El mensaje era claro: quien no está contra la coca del Chapare está contra la política de Estados Unidos en Bolivia. De allí en adelante la embajada estadounidense organizó distintos y variados planes de erradicación durante la década de los 90, que sólo los campesinos resistieron. De allí emergió el liderazgo de Evo Morales.

En abril de 2000, los pobladores de Cochabamba, agrupados en la llamada Coordinadora del Agua, se levantaron contra la empresa Aguas del Tunari, impusieron su voluntad y ganaron la “Guerra del Agua”, según la llamaron los medios.

Los campesinos cochabambinos, incluidos los del Chapare, jugaron un rol decisivo en la “Guerra del Agua”. Se extendieron los vínculos entre los movimientos sociales. Surgieron nuevos liderazgos y los partidos políticos fueron arrinconados y perdieron legitimidad. Así, cuando en enero de 2002 el gobierno conservador de Jorge Quiroga decidió cerrar los mercados de coca de Sacaba –un poblado cochabambino– el movimiento popular reaccionó como un solo bloque y aun cuando hubo siete muertos (tres campesinos y cuatro militares), el conflicto se resolvió de manera favorable para los campesinos: los mercados de coca siguieron abiertos y se paralizó temporalmente la erradicación.

En 1997, Evo Morales fue elegido diputado por el MAS. Su desempeño parlamentario estuvo íntimamente ligado a la defensa de la coca del Chapare y de los movimientos populares contrarios a las políticas neoliberales. En enero de 2002, la Comisión de Ética del Parlamento organizó un repentina proceso en su contra (según se sabe hoy, detrás del operativo estuvo el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha) y terminó expulsándolo. Se lo acusaba de ser el instigador de la violencia en Sacaba y por lo tanto responsable indirecto de la muerte de los cuatro militares.

Pero esta expulsión arbitraria resultó el empujón decisivo para que Evo Morales se convirtiera en el líder de los sectores populares, que vieron en ese hecho el emblema del abuso y la discriminación de los partidos políticos tradicionales hacia los campesinos y sus dirigentes.

El 5 de marzo de 2002 Morales hizo pública su candidatura a la Presidencia de la República. Como acompañante de fórmula había elegido a Antonio Peredo, el hermano mayor de dos míticos guerrilleros que lucharon junto al Che Guevara en su última incursión en Nancahuazú (ambos sobrevivieron, pero fueron eliminados posteriormente en operativos de

tipo paramilitar, que nunca llegaron a esclarecerse). En ese momento, las encuestas daban al líder del MAS apenas el 2% de intención de voto, pero al comenzar a calentarse la campaña empezó a crecer de manera sostenida.

A medida que los partidos favoritos (el MNR y la Nueva Fuerza Republicana –NFR– liderada por un ex capitán del ejército graduado en la Escuela de las Américas) se acusaban a través de los medios de enriquecimientos ilícitos y un sinúmero de corruptelas, los votantes del campo, las zonas urbano-marginales y los intelectuales progresistas iban decantando su simpatía hacia Morales y Felipe Quispe (otro líder campesino de origen aymara, que participó en las elecciones y obtuvo el 6% de los votos). El pánico empezó a cundir en los sectores conservadores y en la embajada de Estados Unidos. El 27 de junio, tres días antes de las elecciones, el embajador Manuel Rocha comunicó a los bolivianos a no votar por Evo Morales con el argumento de que este candidato estaba vinculado al narcotráfico, en una imperial y descarada intromisión en los asuntos internos del país. Pero como en otras ocasiones de la historia latinoamericana (1), el tiro salió por la culata: según investigaciones de la empresa de encuestas Equipos Mori, este hecho exacerbó los sentimientos patrióticos y antiimperialistas de los bolivianos, volcando la elección a favor del MAS en cifras incluso superiores al 15% en las ciudades.

Una propuesta diferente

El segundo lugar obtenido por Morales no sólo abrió la posibilidad de que ingresen al Parlamento boliviano 35 indígenas y campesinos, sino también de que un líder popular, de origen aymara, llegue por primera vez a la Presidencia de la República. Pero puesto que para ello necesitaría del apoyo de otros partidos que en los últimos años se caracterizaron por apoyar directa o indirectamente el esquema neoliberal, Morales ha decidido pasar a la oposición para potenciar aun más aquello que algunos analistas llaman “la nueva izquierda”, cuyas características centrales son:

- Sus líderes ya no son intelectuales de las clases medias o altas. Sus dirigentes son líderes campesinos e indígenas que se encumbraron a partir de la lucha por la defensa de su territorio y de sus culturas ancestrales.

- A diferencia de los movimientos de los años 60 y 70, no propone la disolución del Estado ni la lucha de clases, sino mayor participación en el sistema democrático; exige el reconocimiento de sus tradiciones, de los poderes fácticos que operan en las comunidades y de sus propias autoridades.

- Está vinculada a los movimientos socia-

les y no al sindicato obrero. Esto le otorga una mayor capacidad de convocatoria, ya que las demandas que estos últimos años han propuesto las organizaciones sociales bolivianas abarcan a toda la sociedad, incluso a los sectores urbanos.

En esta “nueva izquierda” no aparece la idea tradicional de “el Partido”, lo que supone un arma de doble filo: por un lado se evitan las prácticas sectarias y los lineamientos verticalistas impartidos a modo de catecismo; pero por otro asoma una debilidad estructural que a largo plazo puede ser muy nociva: la historia enseña que los movimientos sociales acaban dispersándose.

De todos modos, Evo Morales hizo pública su decisión de no convertir al MAS en un partido de cuadros, con un comité central como los partidos tradicionales de izquierda: prefiere optar por generar centenares de comités populares que actúen en todos los estratos sociales, posibilitando la resistencia y la movilización contra el modelo neoliberal. Todo esto apoyado por la bancada parlamentaria, que intentará “tenderle un cerco interior al neoliberalismo”.

El otro terreno en donde el MAS se jugaba su futuro, según Morales, es en el espacio de lo simbólico, “el neoliberalismo ha tenido a su favor un trabajo de desmovilización social organizado a la perfección por las ONG y la cooperación internacional, que nos convirtieron en países mendigos. Vamos a proponer modelos de resistencia a ese avasallamiento ideológico”.

El MAS es el resumen de las experiencias aquilatadas en los últimos veinte años por los sectores empobrecidos por el modelo neoliberal. Morales lo tiene claro: “Nosotros hemos heredado las experiencias de los zapatistas en cuanto a su capacidad de encontrar en los campesinos la fuerza para interpelar las agresiones del mundo globalizado; hemos tomado de los cacerolazos argentinos la fuerza moral para salir a las calles y decirles a los amos del mundo que nos están matando de hambre y hemos heredado de la vieja izquierda ese espíritu rebelde que nos dice que los pobres del mundo unidos podemos encontrar una salida digna”. ■

1. Para citar un ejemplo: en 1945, la intervención del embajador estadounidense en Buenos Aires, Spruille Braden, en contra de la candidatura de Juan Domingo Perón fue una de las razones determinantes de la posterior abrumadora victoria del líder popular.

* Editores del bimensual *El Juguete Rabioso*, La Paz, Bolivia.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



2

Bolivia hacia adentro

EL HURACÁN EVO

El 21 de enero de 2006 Evo Morales es ungido como máxima autoridad indígena en Tihuanacu y un día después asume la presidencia de un país azotado por dos décadas de gobiernos neoliberales. Aquellos tiempos de efervescencia popular propiciaron la emergencia de este líder cocalero y su histórico triunfo electoral. Su gobierno tiene como objetivo central refundar el Estado sobre bases sociales y étnicas que superen una larga historia cargada de injusticias y opresión.





De la coca al Palacio Quemado

Evo: un cocalero al poder

por Pablo Stefanoni*

El 18 de diciembre de 2005 el Movimiento al Socialismo gana las elecciones presidenciales con un 53,7% de los votos. Su líder, Evo Morales, surgido del movimiento cocalero, se convierte en el primer presidente indígena de América Latina. A un mes de la victoria de la “nueva izquierda”, este artículo retrata la Bolivia que recibió Morales al asumir en enero de 2006.

El resultado obtenido por el Movimiento al Socialismo (MAS) representó un duro golpe no sólo para una derecha que se postulaba como un muerto de contención ante la emergencia indígena-popular, sino también para un conglomerado de poderosos medios de comunicación que jugaron sus fichas a fin de evitar un triunfo de la izquierda y para unas encuestadoras que, como en anteriores ocasiones, siguen sin registrar el pulso de la Bolivia profunda. Pese a los avances operados desde la Revolución Nacional de 1952 y del reconocimiento constitucional de Bolivia como un país “pluriétnico y multicultural” en los años 90, ésta sigue sometida a una suerte de *apartheid*, en el que la etnidad opera todavía como limitante o facilitadora del ascenso y del reconocimiento sociales.

Pastor de llamas (“llamero”), trompetista, futbolista y cultivador de coca, amigo de Hugo Chávez y Fidel Castro, resistido por el gobierno estadounidense, que lo considera un “agitador de la coca ilegal”, Evo Morales logró cohesionar la demanda de cambio que atraviesa transversalmente a la sociedad boliviana cansada del dogma neoliberal aplicado desde 1985 y de los pactos políticos que garantizaban la supervivencia en el poder de un desprestigiado conjunto de partidos que en el último cuarto de siglo vació de contenido la democracia reconquistada en 1982 y transformó el armazón institucional del país en una correa de transmisión de mandatos externos. Por otro lado, la derecha de Poder Democrático Social (Podemos, de Quiroga) debió enfrentar el rechazo social a la conformación de sus listas –que fueron el receptá-

culo de infinidad de “tránsfugas” que encontraron en Podemos un refugio frente a la pulverización de sus partidos –y a la “guerra sucia” desatada contra la izquierda, que hablaba de pérdida de mercados externos y expansión del narcotráfico si Evo Morales llegaba a la Presidencia y hasta acusaba al candidato del MAS de no pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Puesta la polarización izquierda-derecha en términos de “cambio vs. continuismo”, la relación de fuerzas electorales comenzó a favorecer al MAS, que escaló la cuesta electoral respirando el aire que iba perdiendo la derecha conservadora.

Un grito de cambio

“Las recientes elecciones [del 18 de diciembre de 2005] en Bolivia han sido una confirmación política, legal, democrática, constitucional, institucional –y todos los demás adjetivos de la ciencia política que se quiera– de una violenta y persistente ola de fondo contra la dominación neoliberal en un Estado racista de matriz colonial como ha sido desde siempre el boliviano”, escribió el político Adolfo Gilly a modo de balance de una victoria que no puede explicarse sin tomar en cuenta el ciclo de acumulación política del movimiento popular boliviano en el último quinquenio, desde la “Guerra del agua” en Cochabamba (abril de 2000), pasando por las sublevaciones sociales de febrero y octubre de 2003 y mayo-junio de 2005, que provocaron la caída de dos presidentes: Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

En el marco de este ciclo de contestación popular fueron madurando ideas-fuerza “antineoliberales”, →

EL MODELO ECONÓMICO DEL MAS

Capitalismo andino-amazónico

por Álvaro García Linera*

El triunfo electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales representa una vuelta de página en una historia boliviana cargada de injusticias y segregación de sus pueblos indígenas originarios: la descolonización del Estado y la implementación de un nuevo modelo económico marcarán, desde el primer día, al gobierno de la izquierda indígena que acaba de iniciar un proceso de cambio irreversible para el próximo medio siglo.

La marea de votos obtenida por el MAS permite avanzar en la clausura de las dos décadas nefastas y terribles que destruyeron nuestra economía y debilitaron hasta límites nunca vistos al Estado boliviano.

Para quienes hemos acompañado desde la academia y las luchas a los movimientos sociales emergentes desde 2000, la victoria del 18 de diciembre de 2005 significa el ingreso a una nueva etapa: el ejercicio del poder estatal. Los desafíos de la izquierda en la gestión de los asuntos públicos serán muchos y complejos pero, como hemos señalado a lo largo de la campaña electoral, nuestras fuerzas se encaminarán fundamentalmente a la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que he denominado, provisoriamente, “capitalismo andino-amazónico”. Es decir, la construcción de un Estado fuerte, que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para potenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico.

En los siguientes 50 años predominará en Bolivia la economía familiar estructural, base de las últimas rebeliones sociales; el desafío es qué hacer con ella. El nacionalismo revolucionario de los años 50 pensaba que la comunidad desaparecería y que todos se volverían industriales, modernos, capitalistas y asalariados, pero eso no ocurrió y, en la actualidad, el mundo moderno representa sólo entre el 7% y el 15% de la economía y de la población económicamente activa (PEA). Hoy pensamos que, al menos, podemos idear un modelo para que lo comunitario deje de estar subsumido de manera brutal a la economía industrial, evitando que lo moderno exprima y quite todas sus energías a lo comunitario, potenciando su desarrollo autónomo. Para ello contamos con el Estado y con el excedente de los hidrocarburos nacionalizados.

El potencial comunitario que vislumbraría la posibilidad de un régimen comunitarista socialista radica en fortalecer las pequeñas redes comunitarias que aún perviven y enriquecerlas. Esto permitiría, en 20 o 30 años, poder pensar en una utopía socialista.

*Vicepresidente de Bolivia.

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

→ cuyo núcleo duro es la demanda de nacionalización de los hidrocarburos y de los recursos naturales, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que “refunde el país”. Y, junto con ello, el reclamo de reconstrucción de un Estado pulverizado por las recetas “ortodoxas” que los tecnócratas de Washington ni siquiera se molestaban en traducir al castellano.

El MAS llega al Palacio Quemado bajo el influjo de los movimientos sociales que le dieron vida. Morales ya había anticipado, en una reunión en Quillacollo, Cochabamba, el 21 de diciembre de 2005, que el suyo “será un gobierno de los movimientos sociales” y que “no solamente hay que invitar a los Presidentes extranjeros (a la asunción de este 22 de enero), sino también a las organizaciones populares de Latinoamérica, que nos darán la fuerza para frenar la soberbia del Imperio”.

La transversalidad étnica, clasista y regional de la demanda de cambio se expresó con nitidez en la nueva geografía electoral boliviana cristalizada el 18 de diciembre. Una de las sorpresas fue el elevado porcentaje obtenido por el MAS en Santa Cruz de la Sierra, embarcada en una “guerra de posición” autonomista liderada por las élites locales a través del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPSC): el escrutinio final le otorga una votación del 33,2%, que se traduce en un senador. Este resultado –impensado incluso para los más optimistas– pone en cuestión la representatividad del discurso de las oligarquías regionalistas, basado en la supuesta existencia de “dos Bolivias”: una andina, “caótica y conflictiva”, y otra oriental, “moderna y productiva”. Un reciente estudio del Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia (PIEB) se sumerge en la construcción de la identidad cruceña irradiada por el CCPSC, de la cual queda excluida una gran parte de la población –entre otros, los indígenas de tierras bajas– que ha sido eficazmente interpelada por el discurso “popular” del MAS y explica las motivaciones de este aluvión de votos obtenido por un “enemigo de Santa Cruz”, tal como la derecha local definía a Evo Morales.

“Ya no hay una Bolivia polarizada entre regiones. Este mandato de cambio está presente en todo el país, desde el Oriente hasta el Occidente, en la ciudad y el campo, entre mestizos e indígenas, entre empresarios y trabajadores [...] es la Nación la que se ha puesto de pie [...] Solamente en etapas revolucionarias se llegó a resultados semejantes. Quedaron atrás los intentos de dividir artificialmente el país”, analizó el vicepresidente, Álvaro García Linera ante un triunfo que reconoció “inimaginado”.

A estos guarismos, un terremoto político en el país, se suman resultados plebiscitarios como el 66,6% obtenido en el departamento de La Paz (frente al 18,1% de Podemos), trasformado en la plaza fuerte del MAS. A tal punto llegó el “tsunami azul” en este departamento, que Evo Morales resultó vencedor en todas las circunscripciones de la sede de gobierno, posibilitando que incluso Guillermo Beckar, candidato a diputado



Marxista clásico. El vicepresidente García Linera admite haber sido seducido por la insurgencia indígena, militancia que comenzó en los años 80 cuando formó parte del Ejército Guerrillero Túpac Katari.

uninominal por la acomodada zona sur, resultara ganador. Las motivaciones fueron diversas: desde la demanda de cambio hasta un razonamiento curioso: “Si gana un bloqueador quizás se acaben los bloqueos”.

En las zonas “duras” del Altiplano paceño, como las orillas del Lago Titicaca, Evo Morales invadió con éxito las ex fortalezas del caudillo aymara Felipe Quispe (el MAS ganó con 55% frente al 29,5% del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) en la combativa localidad de Achacachi, sede de la rebelión indígena de 2000-2001) y en la cuna del MAS, el Chapare, el voto cocalero fue prácticamente unánime, superando en algunas circunscripciones el 90%.

Un partido de bases

Conocidos los primeros resultados del conteo rápido el domingo 18 de diciembre, mientras la noche iba cayendo sobre la ciudad de La Paz, la perplejidad les ganaba la batalla a la alegría y la tristeza de vencedores y vencidos. No hubo festejos populares masivos, que se reservaron para la asunción del primer Presidente indígena de la historia boliviana. “Los indígenas festejan cuando se cumple y no cuando se gana”, dijo Morales. Pero quedó claro que un campesino cocalero y un ex guerrillero fueron los protagonistas de la “revolución en las urnas”, que ha aumentado los rechazos del Departamento de Estado sobre la posible incorporación de Bolivia al eje La Habana-Caracas. El encargado de negocios venezolano, Azael Valero, fue relevado de su cargo, antes de las elecciones, por haber dicho ante los medios que “Si Evo Morales es antiimperialista, pues que viva Evo Morales”. Declara-

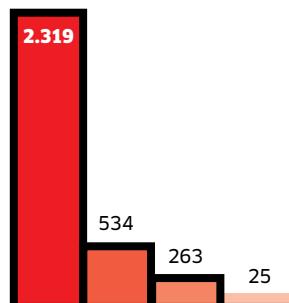
ciones que, pese a la rápida reacción de Jorge Quiroga –quien alentó una marcha de repudio ante la embajada venezolana– estuvieron lejos de llevar agua al molino de la derecha, como si lo habían hecho a favor del MAS, en las elecciones de 2002, las amenazas del embajador estadounidense Manuel Rocha, que por supuesto el Departamento de Estado no consideró necesario reemplazar en aquella ocasión.

Nacido en 1995 en un congreso campesino en Santa Cruz de la Sierra, el Instrumento Político por la Sobreranía de los Pueblos (IPSP), que luego utilizaría como sigla electoral la del MAS (un viejo desprendimiento de Falange Socialista Boliviana, que giró hacia la izquierda) plantea una forma novedosa de articulación de lo social y lo político. Desde su núcleo duro en la región tropical del Chapare la izquierda campesina emergente, en paralelo a la crisis del movimiento obrero minero, fue logrando articular un conjunto de demandas populares contra las políticas neoliberales y el sometimiento del país a los dictados de Washington. Para ello desempolvó parcialmente el viejo discurso nacionalista revolucionario de los años 50 que dividía al país entre la nación y la antinación, y le incorporó la denuncia del “colonialismo interno” desarrollada por el Movimiento Katarista en los años 70.

“El MAS, que en 1997 consiguió el 3% de los votos (incluyendo la diputación de Evo Morales) ha aumentado 17 veces su votación en menos de 10 años. Hoy completa su ciclo de despegue viendo a Evo Morales convertido en el candidato presidencial más votado desde 1966”, afirmaba el periodista Rafael Archondo. →

PIB (año 2015)

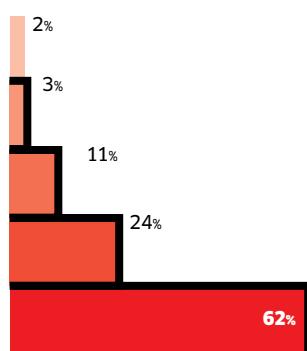
(en miles de millones de dólares de 2010)



■ Brasil
 ■ Argentina
 ■ Chile
 ■ Bolivia

Población indígena

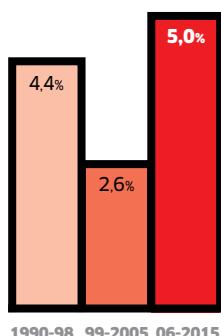
(en porcentaje, 2010)



■ Argentina
 ■ Colombia
 ■ Chile
 ■ Perú
 ■ Bolivia

Crecimiento del PIB

(promedio anual por períodos, en porcentaje)



© David Mercado/Reuters/Latinstock



Movimientos campesinos. En la década de 1980 los cultivadores de coca de la zona del Chapare y Yungas comenzaron a organizarse para enfrentar las políticas de erradicación de la planta impulsadas por Estados Unidos.

© Blickwinkel/Jagex/Alamy/Latinstock



Erythroxylum. La planta de coca tiene propiedades medicinales.

Hacia una “nueva Bolivia”

Es un lugar común comparar este regreso de la izquierda al poder con su más inmediato antecedente, la Unidad Democrática Popular (UDP) (1982-1985), expulsada del poder por el sabotaje de la derecha empresarial (hiperinflación) y las presiones de la izquierda radical encarnada en la Central Obrera Boliviana (COB). Pero el contexto parece presentar más diferencias que similitudes con el de los años 80. Dos de ellas: el 22 de enero la izquierda indígena se hizo cargo de una economía que, pese a sus limitaciones estructurales, presentaba una serie de indicadores macroeconómicos favorables, alejados de los “desequilibrios” de los 80: déficit fiscal del 3,5% (frente al 9,2% de 2001); una inflación anual del 5%, un crecimiento económico modesto pero positivo del 3,9%, datos que se suman a la condonación de la deuda con el FMI (222 millones de dólares). La deuda social residía en la pobreza (67% de la población), el desempleo (8,7%) y la desigual distribución del ingreso (el 10% más rico se queda con el 32% y el 10% más pobre capta sólo el 1,3%).

Por otra parte, a diferencia de Hernán Siles Zuazo, Evo Morales no tiene enfrente a una COB con un potencial de movilización capaz de vetar políticas estatales, sino a una organización en la que los recuerdos de anteriores gestas heroicas pesan más que su debilitada realidad actual. A ello se suma la biografía de luchador social de Evo Morales, que hace que sea percibido como “uno de nosotros” por los sectores indígenas populares, lo cual nunca ocurrió

con la izquierda criolla posterior a la Revolución Nacionalista de 1952. A la legitimidad social del próximo gobierno se suma un paraguas de legitimidad política derivada del resultado plebiscitario del triunfo electoral, que se expresará parcialmente en el plano de las instituciones: mientras el MAS contará con una clara mayoría en Diputados, en el Senado tendrá 12 bancas frente a 13 de Podemos, 1 del MNR y otra de Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina.

La “nueva Bolivia” que postula Evo Morales, deberá ponerse en marcha en la próxima Asamblea Constituyente, convocada para julio de 2006 y espectáculo de los sueños populares de transformación radical del país y de las pesadillas de la burguesía boliviana, que teme que esta instancia “refundacional” sea el escenario de una “revancha indígena” que ponga en riesgo sus intereses fundamentales, como la propiedad de la tierra. Algunos hablan de una Constituyente “chavista” que proyecte la victoria electoral de la izquierda hacia una revolución de mayores alcances. García Linera intenta despejar estos recebos señalando que el nuevo gobierno impulsará “una salida pactada, en la que los intereses de los derrotados serán, en parte, reconocidos por los victoriosos”.

Los desafíos de la “nueva izquierda”

Dos desafíos marcarán, desde los primeros días de su gobierno, la agenda política del nuevo gobierno:

1) El de los cultivos de coca que, en palabras de Evo Morales, “parieron el instrumento político de liberación” y que, al mismo tiempo, son una de las fuen-

tes de inquietud de Washington. “No habrá coca cero; racionalizaremos los cultivos para abastecer la demanda legal. Tampoco permitiremos que Estados Unidos siga dirigiendo a nuestras Fuerzas Armadas y policía”, advirtió Evo Morales.

2) La cuestión petrolera, que provocó la caída de dos Presidentes desde 2002. Morales señaló que no habrá expropiaciones, pero que las transnacionales serán socias y no dueñas de los energéticos, y será el Estado el que controle el negocio hidrocarburífero, incluyendo las exportaciones. Para implementar el control “efectivo” del Estado, el MAS deberá lograr la firma de nuevos contratos de exploración y explotación acordes a la ley de hidrocarburos aprobada en mayo de 2005, que las empresas califican de “confiscatoria”. “La relación con las petroleras va a ser uno de los temas fundamentales desde el primer día del gobierno. La lucha por la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos es producto del movimiento social que se dio en el país. Quienes votaron por el MAS, votaron por la recuperación inmediata de la propiedad de los hidrocarburos”, dijo el referente económico de ese partido, Carlos Villegas.

Junto a un grupo de técnicos provenientes de las

El fracaso electoral de los “radicales” (como Felipe Quispe, cuya votación fue inferior al 3%; o Jaime Solares, líder de la COB, que ni siquiera logró concretar su candidatura), otorga un renovado margen de acción para el nuevo Presidente. Sectores como la estratégica Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto –invitada por el MAS a formar parte de las comisiones de transición– o la Central Obrera Regional (COR) de esa misma ciudad, ya anticiparon su disposición a contribuir al proceso de cambio que encarna el MAS.

Sin una importante oposición por izquierda, queda una derecha política debilitada (pero no vencida) por el revés de las urnas, que se enfrentará a un gobierno potenciado por esas mismas urnas en una dimensión desconocida en la historia boliviana reciente. Y una derecha regionalista (fundamentalmente cruceña) que ha comprobado que su hegemonía es más porosa de lo que parecía.

La transición

Después de un largo “empate catastrófico” entre fuerzas indígeno-populares y fuerzas conservadoras, se visualiza una nueva hegemonía en ciernes de

Evo logró cohesionar la demanda de cambio que atraviesa a la sociedad boliviana cansada del dogma neoliberal.

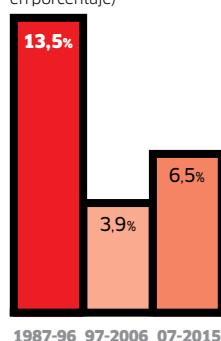
clases medias urbanas, el MAS intentará suplir la falta de cuadros, producto de la forma organizativa *sui generis* de la nueva izquierda boliviana, surgida de las “escuelas” del sindicalismo campesino. La relación entre el MAS y los intelectuales ha sido desde el principio sinuosa y más cercana a la figura del asesor que a la del “intelectual orgánico”, en ausencia de estructuras institucionales que permitan articular a los “técnicos” con los movimientos sociales, tarea que recae en el liderazgo del propio Evo Morales. La elaboración del programa de gobierno del MAS reflejó, en gran medida, las dificultades para resolver la compleja ecuación entre capacidades técnicas y compromiso político. Más que un boicot frontal a la administración de Morales resulta más plausible esperar (a la luz de una rápida “sociología” de las élites bolivianas, en un país con un raquítico sector económico privado) que los viejos cuadros estatales –a muchos de los cuales deberá recurrir el MAS a falta de suficientes cuadros propios– se postulen para permanecer en sus puestos o acceder a ellos, reciclados a los nuevos aires nacionalistas que soplan en el país. Y se espera una suerte de cogobierno –no exento de dificultades futuras– entre el MAS y los movimientos sociales, algunos de ellos con visiones más corporativistas y otros, más nacionales (“No podemos hacer bloqueos contra nuestro propio gobierno”, se escuchó entre dirigentes campesinos).

la izquierda como continuación de las casi dos décadas de hegemonía neoliberal, cuya duración dependerá de la forma en que el MAS administre el capital político que tiene entre las manos.

Las comisiones económica, política y social han comenzado a actuar como un “gabinete en las sombras” tendiente a garantizar la transición hacia la nueva administración que, en palabras de García Linera, se propone “un cambio no para tres meses o cinco años, sino para el próximo medio siglo”. El gobierno del MAS empezará por desmontar el andamiaje legal del neoliberalismo: anulación de la libre contratación de trabajadores en empresas públicas y privadas y de la libre importación de mercancías. Como ya expresó García Linera, Bolivia no está a las puertas del socialismo, sino de un proyecto que se propone reconstruir el Estado y potenciar un “capitalismo andino-amazónico” que permita integrar las plataformas tradicionales y modernas que dan cuenta del sistema económico-productivo boliviano. Los próximos meses determinarán la profundidad de esta revolución democrática iniciada hace ya cinco años y que el domingo dio un paso más... pero un paso descomunal. ■

Evolución de la inflación

(promedio anual por períodos, en porcentaje)



Asunción en Tihuanacu

Un día antes de asumir como presidente, Evo Morales fue declarado máxima autoridad indígena el 21 de enero de 2006. En su discurso afirmó que los pueblos aymaras, quechuas, chapacos, entre otros, son dueños absolutos de la tierra boliviana y pidió igualdad y respeto para toda la sociedad.

*Periodista e historiador.

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Hidrocarburos en manos del Estado

La tercera es la vencedora

por **Federico Bernal***

En mayo de 2006 Evo Morales dicta el Decreto Supremo de Nacionalización 28.701, luego del triunfo del “Sí” en el referéndum por la nacionalización de los hidrocarburos en 2004. La recuperación por parte del Estado de YPFB generaba en los primeros meses de gobierno grandes expectativas.

© Nick Baylis/Alamy/Latinstock



El valor de las reservas hidrocarburíferas de Bolivia como títulos de valores (sea en forma de acciones como de bonos) supera [a fines de 2005] los 200.000 millones de dólares. Cuenta además con una de las mayores reservas mundiales de estaño, hierro y magnesio. Por ejemplo, la mina de Huanuni (Oruro) es una de las principales reservas mundiales de estaño, calculadas en 6 millones de toneladas (1). Con la cotización del mineral a 9.542,5 dólares/tonelada, su valor ronda los 57.000 millones de dólares. No obstante, la reapropiación efectiva de dichas riquezas capitales –que podrán duplicarse o triplicarse si se avanza en la industrialización de los sectores mineros e hidrocarburíferos– dependerá de la aplicación del Decreto Supremo de Nacionalización 28.701 tal cual fue concebido.

Pero, ¿cuál es la clave del proceso de nacionalización? Ya en 1920, en relación a las riquezas latinoamericanas usufructuadas por intereses foráneos, advirtió el escritor Manuel Ugarte: “Minas, grandes plantaciones, vastas empresas de transportes terrestres y marítimos, etcétera, fructifican siempre lejos de nuestro radio, pues nuestros economistas sostienen que necesitamos capitales para explotarlos. Como si la misma riqueza no fuera capital” (2). El ex ministro de Hidrocarburos boliviano Andrés Soliz Rada, mentor del Decreto de Nacionalización mencionado y ugartista convencido, advirtió a su vez, en una carta abierta al Parlamento boliviano diecisésis días después de la firma de los nuevos contratos con las petroleras: “Bolivia no debe perder el control de sus reservas”. En efecto, Soliz sugiere que “el Congreso redacte un artículo en el que se prohíba a las compañías anotar nuestras reservas en Bolsas de Valores, ya que ellas son de propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado. Por decisión parlamentaria, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe incluir esa cláusula en los contratos petroleros, sin la cual no podrán ejecutarse, por tratarse, precisamente, de contratos de operación” (3).

La nacionalización implica consagrar las reservas como patrimonio nacional. Únicamente así, “el Estado boliviano recuperará la potestad sobre sus riquezas gasíferas, y entonces su valor monetario servirá para que la refundada YPFB emita bonos, reconocidos por las Bolsas de Valores, hecho que permitirá contar con el capital necesario para ingresar, de manera efectiva, en el control de la cadena productiva y en proyectos de industrialización del gas” (4). Y como

la firma y posterior aprobación de los nuevos contratos afectan a la totalidad de las reservas de hidrocarburos, no pueden quedar sujetos a ninguna duda o incertidumbre. De lo contrario, el proceso de nacionalización peligrará en su conjunto.

Una semana después de esta advertencia apareció un artículo cuyo “anónimo” autor intenta convencernos de que “la inscripción de reservas es un requisito contable y no de apropiación” (5), y transmitir la idea de que prohibir a las compañías anotar en Bolsa las reservas bolivianas es una suerte de redundancia, puesto que la cláusula cuarta de los contratos firmados hace explícita mención al no otorgamiento de la propiedad. Finalmente su explicación muta a sutil amenaza: “en caso de prohibir la inscripción de esas re-

“Antes Bolivia recibía 15%, ahora será 85% máximo o mínimo 50%”, afirma Evo.

servas recuperables y potencialmente monetizables en los campos en los que las compañías invirtieron, iría en contra de una práctica petrolera y contable ampliamente aceptada, y requerida, en el resto del mundo”.

Del inefable artículo por encargo se desprende que la cláusula cuarta deja abierta a las petroleras la posibilidad futura de registrar como propias las reservas bolivianas. Si no, ¿por qué motivo se oponen a la recomendación de Soliz cuando la cláusula cuarta es para ellos sinónimo de no otorgamiento de propiedad? Evidentemente, la prohibición indicada por el ex ministro marca la diferencia sustancial con los contratos anteriores.

El comienzo de una nueva era

El 28 de octubre de 2005, las diez petroleras que operaban en Bolivia aceptaron firmar los nuevos contratos con YPFB, conforme a los términos del Decreto de Nacionalización y de la Ley de Hidrocarburos. La firma de los contratos indica que el fin de la era neoliberal en Bolivia ha comenzado, aunque como saldo queda [hasta el año 2005] un endeudamiento externo equivalente al 56% del PBI y un 67,3% de la población por debajo de la línea de la pobreza (6). A pesar de habitar sobre la segunda reserva gasífera

de Sudamérica, en 2006 un 97% de la población boliviana carece de acceso al gas natural por redes; de los cuales un 60% debe emplear gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas para calefaccionarse y cocinar y el 40% restante quemar plásticos, leña, residuos orgánicos e inorgánicos (7).

Decretada la nacionalización el 1 de mayo de 2006, YPFB pasó a gestionar toda la cadena hidrocarburífera, es decir, la extracción, almacenamiento, distribución, refinación de petróleo, fraccionamiento de gas, fijación de precios, industrialización y comercialización interna y externa. Las empresas –antes dueñas, ahora devenidas en meras prestadoras de servicios– deberán entregar el 100% de lo extraído a YPFB, socia obligada cuya participación accionaria será igual o mayor a un 51% (controlante). Igual porcentaje deberá alcanzar la estatal en las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder, aún [en 2006] en poder de Petrobras, para así controlar plenamente su petróleo crudo y ser artífice de la generación y concreción de actuales o nuevos mercados.

Entre 1998 y 2002 la renta petrolera, parte sustancial del PIB, del presupuesto nacional y del ingreso de divisas, dejó al país unos 282 millones de dólares anuales. Las compañías transnacionales, en cambio, ganaron al menos 1.285 millones anuales, el 82% de la renta total. En 2006 se cerró en cambio con una recaudación total de 1.300 millones de dólares para el país, cifra que aumentará hasta alcanzar los 4.000 millones anuales a partir de 2010, siempre y cuando se consiga industrializar los hidrocarburos (8).

Según reveló el ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda Pacheco, de los ingresos obtenidos por la venta de lo producido, YPFB pagará primero las regalías departamentales, las regalías nacionales compensatorias, la participación del Tesoro General de la Nación y el impuesto directo a los hidrocarburos. Estos pagos, conforme a la ley, alcanzan al 50% de los ingresos. Del 50% restante, YPFB le reconocerá al contratista los llamados Costos Recuperables, calculados conforme auditorías previamente autorizadas por la estatal. Una vez descontados los Costos Recuperables del saldo, un porcentaje de los ingresos totales será entregado mensualmente en dólares al contratista. Este porcentaje es fijado mediante un factor que toma en cuenta inversiones, precios y volúmenes producidos (9).

Ahora bien, ¿cuál es la renta promedio

que le quedará a Bolivia producto de los nuevos contratos? El presidente Evo Morales declaró que “antes Bolivia recibía 15%, ahora será 85% máximo o mínimo 50%”. Por su parte, la estimación del ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, fue un poco más precisa: “En promedio el Estado se quedará con el 60% de los ingresos”. En declaraciones al autor, el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada indicó que el rango de participación estatal dependerá de los resultados de las auditorías, esto es, si se reconocen los 3.500 millones de dólares que las petroleras dicen haber invertido. A su vez, la fórmula de distribución variará según los campos, puesto que obedece a los valores de producción, precios, amortización e inversión de cada uno en particular. Si bien aún falta un largo trecho de negociaciones, una aproximación pertinente sería: los considerados “megacampos” oscilarán entre un 60 a un 80% de participación a favor del Estado; los más chicos se acercarán a un 60%.

No obstante las indeterminaciones, algo es seguro: se acabó la algarabía “mercadista” que motivó a un alto ejecutivo de Repsol-YPF en Bolivia, allá por 2003, a emitir declaraciones del tipo: “La rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares”. La ecuación ha cambiado radicalmente; la estructura socioeconómica se sacude con la fuerza irrefrenable de los millones de bolivianos postergados. Es la tercera nacionalización; la que viene para quedarse, la vencedora. ■

1. Universidad Técnica de Oruro (UTO) - Comibol, 2006.

2. *El destino de un continente*, Editorial Mundo Latino, Madrid, 1923.

3. “Bolivia no debe perder el control de sus reservas”, Carta abierta al Parlamento, publicada en varios medios de comunicación, 14-11-06.

4. *Ibidem*.

5. “Reservas de gas son de patrimonio boliviano”, *El Diario*, La Paz, 21-11-06.

6. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Bolivia, 2003 y 2005.

7. INE (Bolivia), IDICSO-USAL (Argentina), La Paz, 2006.

8. Agencia Boliviana de Información, La Paz, 11-11-06.

9. “YPFB y los contratos petroleros”, *La Razón*, La Paz, 9-11-06.

* Bioquímico y biotecnólogo. Autor de *Petróleo, Estado y Soberanía: hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos*, Biblos, mayo de 2005.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur





El conflicto por la autonomía en la “Media Luna”

Un divorcio sin Paz

por **Claudia Peña Claros***

El 2 de julio de 2006 el “Sí” ganó con amplitud el referéndum por la autonomía de Santa Cruz de la Sierra. Durante 50 años las élites del Oriente boliviano han reclamado la separación argumentando una asfixia económica y reivindicando una identidad propia, la “camba/cruceña”, que creen superior a la del resto del país.

Entre las carpas de la cétrica plaza 24 de Septiembre, que albergaban a cientos de huelguistas de hambre contra el gobierno, surgió un grito. Presuntamente, un hombre había estado tomando fotos de los manifestantes quienes, al percatarse de sus rasgos andinos, lo calificaron de inmediato como espía del MAS (Movimiento al Socialismo). Aunque trató de escapar, fue salvajemente golpeado, mientras las cámaras de televisión registraban en vivo la golpiza. Fue el 10 de diciembre de 2007, en Santa Cruz de la Sierra, centro de la más férrea oposición al gobierno de Evo Morales Ayma. La aprobación de la nueva Constitución y el recorte de la coparticipación a los departamentos de los impuestos provenientes de la actividad hidrocarburífera impulsó la decisión del movimiento regionalista de avanzar *de facto* a la autonomía mediante la aprobación de estatutos autonómicos en los cuatro departamentos de la denominada “Media Luna” suroriental del país: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, con el lema “ya somos autónomos”. Pese a la tregua favorecida por las fiestas de fin de año y el cansancio de la población después de largos meses de crispación política, el avance del proyecto autonomista en el Oriente y del proyecto nacionalista indígena en el Occidente anuncia nuevas escaramuzas, la amenaza de un “doble poder” y la perspectiva de continuidad del denominado “empate catastrófico” que vive el país (1). A pesar de la victoria que cada uno de los bandos proclamó el sábado 15 de diciembre de 2007 en varias concentraciones masivas, la incertidumbre persiste: el gobierno desconoce la legalidad de los referéndums para aprobar los estatutos

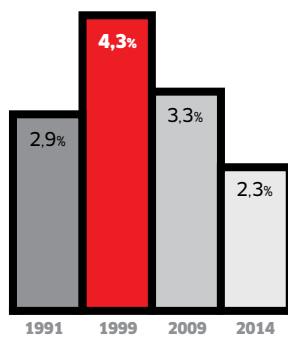
autonómicos por no inscribirse ni en la vieja ni en la nueva Constitución y los considera un acto de sedición, mientras que los gobiernos departamentales de cinco de los nueve departamentos (la “Media Luna” más Cochabamba) desconocen la nueva Carta Magna, a la que consideran un “panfleto del MAS”. No obstante, la efervescencia y la radicalidad de las puestas en escena no pueden comprenderse sin dar cuenta de los procesos desatados en esta región de Bolivia desde octubre de 2003 y los imaginarios sociales que contribuyeron a crear.

La oposición interior

La “Guerra del gas” en octubre de 2003 movilizó a los más diversos actores sociales, generando algo pocas veces visto en la historia de Bolivia: un consenso general respecto a la necesidad de revisar y cambiar la forma de hacer política, las relaciones entre sociedad civil y Estado, y el modelo económico. Pero entonces, mientras las víctimas fatales de la represión militar sobrepasaban el medio centenar y la gente llenaba espontáneamente las calles para pedir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se vivía una tensa calma. No había marchas ni manifestaciones multitudinarias. Como únicas expresiones en contra del gobierno, los informativos locales daban cuenta de bloqueos de caminos y marchas convocados por sindicatos de trabajadores campesinos, en su mayoría migrantes “collas” provenientes de la región andina y de los valles del Occidente del país. Así, la resistencia al gobierno de Sánchez de Lozada se limitaba al área rural del departamento. →

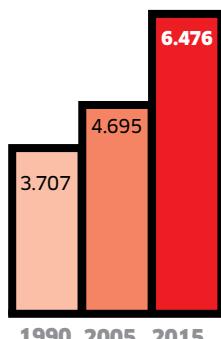
Tasa de desempleo

(en porcentaje, años 1991-2014)



PIB per cápita

(en paridad de poder de compra dólares 2011, años 1990-2015)



Ministerio de Autonomías

Esta institución fue creada en 2009 para fomentar el autogobierno y promover el acceso a la participación y la distribución equitativa de los recursos generados por el Estado. Se reconocen distintos tipos de autonomías: departamental, municipal, regional e indígena originaria campesina.

→ Otro contraste fue que en esa misma plaza 24 de Septiembre se dio el único acto de violencia de un sector de la sociedad civil contra otro. En Santa Cruz de la Sierra una marcha de los campesinos que pedía la renuncia de Sánchez de Lozada fue reprimida y dispersada violentamente por grupos afines al Comité pro Santa Cruz. Así se daba inicio a la acción violenta, cada vez más frecuente, de grupos cívico-juveniles de choque en contra de manifestantes indígenas o habitantes de barrios marginales de la ciudad. No sólo la denominada “agenda de octubre” (que pedía nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente) marcó la política boliviana hasta hoy. La posición que la dirigencia cruceña (cívica y empresarial) asumió durante la crisis también determinó la marcha de ese proceso. Con el argumento de defender el “Estado de Derecho”, la legalidad y el “orden constitucional”, la élite cruceña se puso del lado de Sánchez de Lozada, y con sus llamados, a través de comunicados públicos, a defender la ciudad de los enemigos de Santa Cruz, provocó el rechazo a los manifestantes campesinos que marchaban hacia la urbe. El discurso de la dirigencia cruceña dejó en la sombra el contenido político y económico de la crisis de octubre, y construyó en su lugar un espejismo: el del Occidente boliviano “caótico”, desde donde los “collas” vendrían a avasallar Santa Cruz, porque “están en contra de nosotros”, y el Oriente “emprendedor, trabajador y productivo”. Este discurso está fundamentado en la diferencia identitaria. Así, otro proceso, quizás más doloroso e incierto, se inauguró la tarde del viernes 17 de octubre de 2003 en Santa Cruz, a raíz de aquella golpiza: la polarización regional e identitaria, que complejiza y torna más violento el panorama político y social en Bolivia. De esta forma, como señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, “mientras en el Occidente boliviano emergieron construcciones discursivas que asociaron la crisis económica con la aplicación del modelo neoliberal, en el Oriente –donde perdura una hegemonía política y cultural empresarial– se asociaron los padecimientos con el centralismo paceño y no con el modelo económico, lo que ayudó a consolidar la causa autonomista”(2).

La identidad cruceña

La identidad regional cruceña es una construcción que data de mediados del siglo XX y que se ha ido fortaleciendo a la sombra del Comité pro Santa Cruz. En este proceso, lo indígena andino es al mismo tiempo rechazado y temido. A diferencia de la identidad boliviana, proclive a la autodesvalorización y a la autoinculpación, la cruceña es una identidad positiva, que confía en un futuro brillante y en las capacidades individuales. El departamento de Santa Cruz tiene el índice de crecimiento poblacional y el índice de desarrollo humano más altos de Bolivia. Pero al mismo tiempo muestra elevados niveles de desigualdad económica. En esta contradicción, el discurso regional victorioso es una poderosa fuente de cohe-

sión social. La identidad cruceña es la identidad regional más fuerte en Bolivia, sin que exista ninguna otra comparable en términos de representatividad y capacidad de aglutinación y movilización política. Precisamente, es la clase dominante cruceña la que ostenta la hegemonía sobre el discurso identitario. Es este andamiaje social y simbólico el que se siente interpelado a partir de la crisis de octubre de 2003, intensificándose ante un gobierno nacional que maneja una simbología casi exclusivamente andina, en la que los actores regionales no se sienten incluidos ni representados. Como sostiene la ex congresista Betty Tejada, “la propuesta del modelo autonómico en regiones de vocación capitalista, derechista y elitista fue ideada por la élite económica para amortiguar y frenar el incontenible proceso social de insurrección de Occidente, que explotó en octubre de 2003 y se devoró a los partidos tradicionales [...]. Si Santa Cruz no explotó con la misma intensidad que el Occidente de Bolivia, se debió justamente a que todos los poderes, económico, social, político y mediático estaban en manos de estas élites”(3). A cualquier recién llegado a Santa Cruz de la Sierra no le va a costar trabajo saber cuáles son los colores de la insignia departamental: está en todas partes. Desde hace más de cuatro años, las arengas políticas que apelan a la identidad local como núcleo diferenciador y bandera de lucha han copado los medios de comunicación, los *graffiti* en las calles y la conversación cotidiana. Incluso el 6 de Agosto, día de la Independencia Nacional, la bandera que se coloca en las casas es mayoritariamente la cruceña, antes que la boliviana roja, amarillo y verde. La clase dominante ha logrado construir y establecer una lectura histórica que gira alrededor de relaciones siempre injustas entre el Estado y la región, obviando la historia de los pueblos indígenas presentes en Santa Cruz (4). En efecto, hace apenas cincuenta años esta ciudad (que ahora es la más interconectada de Bolivia con el mundo globalizado) era apenas una aldea secundaria con calles de tierra y alrededor de 50.000 habitantes, prácticamente incapaz de ejercer algún tipo de presión sobre el gobierno central, que gravitaba alrededor de la producción minera en Oruro y Potosí. Constantemente relegada al olvido por el Estado, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y su ámbito económico se debatieron entre la pobreza y el estancamiento. Es a partir de la Revolución Nacional y la “marcha hacia el Oriente”, en los años 50, que la región empieza a despertar. El gobierno nacionalista apoya la diversificación y la expansión de la producción agrícola en Santa Cruz, fortalece la red caminera que interconecta las regiones productivas con la capital departamental, promueve la migración de mano de obra “colla” a las fértiles tierras orientales y otorga créditos para expandir la frontera agrícola. De este modo, se provee a la región de mano de obra y capitales accesibles. Sin embargo, el cuadro no estaría completo si no se toma en cuenta las luchas cívicas. A fines de la década

del 50, el Comité pro Santa Cruz, fundado pocos años antes, logró después de una larga serie de manifestaciones y protestas que el gobierno central cumpliera la ley que establecía el pago del 11% de regalías a los departamentos productores de hidrocarburos. Este dinero es el que posibilitó la modernización de la ciudad: planificación urbana, pavimentación de calles, instalación de agua potable y luz eléctrica, etc. De este modo, la épica regional se construyó en base al olvido estatal que sufrió la región hasta mediados del siglo XX, y a la iniciativa cívica de la sociedad civil, que al socaire del Comité pro Santa Cruz logró modernizar la ciudad e impulsar la economía. A comienzos del siglo XXI, el departamento aportaba la tercera parte del PIB nacional. Así, Estado “ineficiente y lejano” es contrapuesto a sociedad civil “organizada y exitosa”. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la polarización actual? La respuesta es que el Comité pro Santa Cruz capitaliza como propio el proceso de desarrollo regional, constituyéndose en el incuestionable representante de la identidad cruceña.

Una convivencia conflictiva

La declaración exitista “ya somos autónomos” del 15 de diciembre, proclamada en un acto masivo en el Parque Urbano, operó como una suerte de cataráisis colectiva, y las expectativas de enfrentamientos violentos que llevaron a muchos habitantes a abastecerse de víveres los días previos se desvanecieron en festejos populares. Con todo, se mantiene la amenaza de la resistencia civil contra la nueva Carta Magna. Los días previos al cabildo popular, el centro de atención estuvo en la huelga de hambre de unas 800 personas –entre las cuales había empleados públicos– transmitida en vivo por los canales locales en el marco de un fuerte “patriotismo” regionalista. “Con democracia... autonomía. Sin democracia... independencia”, proclamaba uno de los carteles, en clara alusión a una amenaza que ha cobrado más relevancia desde la crisis de octubre de 2003, en el marco de todo tipo de rumores sobre supuestos planes gubernamentales de “invadir” Santa Cruz. La separación de esta región de Bolivia sólo es defendida por una corriente minoritaria, representada por el movimiento Nación Camba, pero tiene cierta influencia en el Comité pro Santa Cruz. “¿Estás preparado para defender a Santa Cruz? Enlázate”; “Contra el comunismo: resistencia”, convocaba un grupo extremista que abrió listas de voluntarios para “luchar por Santa Cruz” ante la eventualidad de un enfrentamiento con fuerzas militares supuestamente enviadas por Evo Morales. Entre rumores que hablan de guerra civil y las golpizas que miembros de la Unión Juvenil Cruceña propinan cada tanto a sospechosos de simpatizar con el MAS, los jóvenes cruceños reciben permanentes llamados a la violencia. Las charlas juveniles giran con demasiada frecuencia en torno a qué arma vale la pena comprar. Pero la población también asiste a otro tipo de



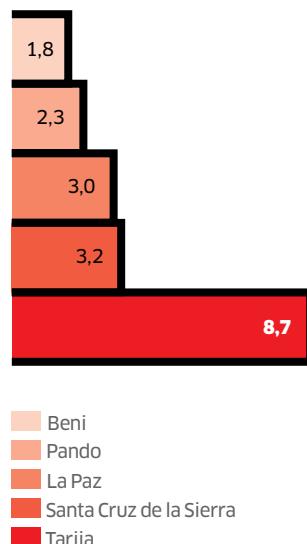
© Paul Liebhardt/Alamy/Latinstock

Diferencias. Si bien el gobierno de Evo Morales estuvo enfrentado con la “Media Luna” (Santa Cruz de la Sierra, Pando, Beni y Tarija), logró una reconciliación con los gobiernos autónomos.

violencia: listas de “enemigos sentenciados de Santa Cruz” con los nombres de al menos medio centenar de cruceños que habrían desertado de la causa cruceña, sea cumpliendo funciones en el gobierno nacional, o emitiendo alguna crítica pública en los medios de comunicación. Hasta ahora, el Comité pro Santa Cruz jamás repudió ninguna de estas formas de intimidación, tendientes a cerrar filas y acallar a la disidencia local, que no es escasa pero no encuentra canales de expresión en un ambiente cargado de mecanismos de silenciamiento y de intimidación en los diferentes ámbitos de la vida social y laboral. La politóloga cruceña Helena Argirakis, que está en una de las “listas negras”, sintetizó: “Los cruceños enfrentamos una dura tarea y responsabilidad histórica, que consiste en mirarnos de manera autocrítica y afrontar una innegable realidad: la necesidad de cambios urgentes y justos, dejando de responsabilizar a un gobierno nacional en las lejuras-alturas, para mirar y asumir nuestras propias falencias, debilidades y ausencia flagrante de un proyecto (país) político alternativo, con contenido histórico, social y con vocación política plena de convivencia tolerante con la otredad”(5). ■

PIB per cápita por departamento

(en miles de dólares corrientes de 2014)



1. Pablo Stefanoni, “Empate catastrófico en Bolivia”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2007.

2. La Insignia, Madrid, 23-1-05 (www.lainsignia.org).

3. Martín Sivak, *Santa Cruz: una tesis. El conflicto regional en Bolivia (2003-2006)*, Plural Editores, La Paz, 2007.

4. Alejandra Boschetti, “Utilización simbólica e ideológica del género en la construcción de la nación camba o cruceña”, ponencia presentada al IV Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, Sucre, 2006.

5. Carta de renuncia de Helena Argirakis Jordán a la Dirección de Ética y Transparencia del Gobierno Departamental de Santa Cruz, 26-6-07.

*Ex ministra de Autonomías de Bolivia.

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur





La evolución económica y social a diez años de la asunción de Evo

Una metamorfosis histórica

por Ignacio Ramonet*

En octubre de 2014, la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera triunfó por tercera vez consecutiva en las elecciones presidenciales. La fidelidad del pueblo boliviano refleja cuánto cambió el país bajo la conducción de un gobierno que ha mejorado significativamente todos los indicadores sociales.

Para el viajero que vuelve a Bolivia varios años después y camina despacito por las empinadas calles de La Paz, ciudad encaramada entre barrancos escarpados a casi cuatro mil metros de altitud, los cambios saltan a la vista: ya no se ven personas mendigando, ni vendedores informales pululando por las aceras. Se percibe que hay pleno empleo. La gente va mejor vestida, luce más sana. Y el aspecto general de la capital se ve más esmerado, más limpio, más verde. Se nota el auge de la construcción. Han surgido decenas de altos edificios llamativos y se han multiplicado los modernos centros comerciales, uno de los cuales posee el mayor complejo de cines (18 salas) de Sudamérica.

Pero lo más espectacular son los sensacionales teleféricos urbanos de tecnología futurista que mantienen sobre la ciudad un permanente ballet de coloridas cabinas, elegantes y etéreas como pompas de jabón. Silenciosas y no contaminantes. Tres líneas se encuentran en funcionamiento: la roja, la amarilla y la verde, creando así una red interconectada de transporte por cable de once kilómetros, la más larga del mundo. Que permite a decenas de miles de paceños ahorrarse un promedio de dos horas diarias de tiempo de transporte.

La Bolivia actual ofrece un grato contraste con la de hace no demasiado tiempo. En su mayoría corruptos y autoritarios, sus gobernantes se la pasaban implorando préstamos a los organismos financieros internacionales, a las principales potencias occidentales o a las organizaciones humanitarias mundiales. Mientras las grandes empresas mineras extranjeras

saqueaban el subsuelo, pagándole al Estado regalías de miseria y prolongando el expolio colonial.

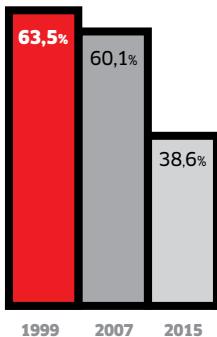
País relativamente poco poblado (unos diez millones de habitantes), Bolivia posee una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados (dos veces Francia). Sus entrañas rebosan de riquezas: plata (piénsese en Potosí...), oro, estaño, hierro, cobre, zinc, tungsteno, manganeso, etc. El Salar de Uyuni tiene la mayor reserva de potasio y litio del mundo, este último considerado la energía del futuro. Pero la principal fuente de ingresos hoy es el sector de los hidrocarburos, con las segundas mayores reservas de gas natural de América del Sur, y petróleo, aunque en menor cantidad (unos 16 millones de barriles anuales).

El crecimiento económico de Bolivia desde que gobierna Evo Morales ha sido sensacional, con una tasa promedio de 5% anual... En 2013, el PIB llegó a crecer hasta el 6,8% (1), y en 2014 y 2015, según el FMI, también fue superior al 5%... El porcentaje más elevado de América Latina (2). Y todo ello con una inflación moderada y controlada, inferior al 6%.

El nivel de vida general se ha duplicado. El gasto público, a pesar de las importantes inversiones sociales, también está controlado; hasta el punto de que el saldo en cuenta corriente ofrece un resultado positivo, con un superávit fiscal de 2,6% (en 2014). Y aunque las exportaciones, principalmente de hidrocarburos y de productos de la minería, juegan un rol importante en esta bonanza económica, es la demanda interna (+5,4%) la que constituye el principal motor del crecimiento. En fin, otro éxito inédito de la gestión del ministro de Economía, Luis Arce: las reser-

Tasa de pobreza

(en porcentaje, años 1999-2015)



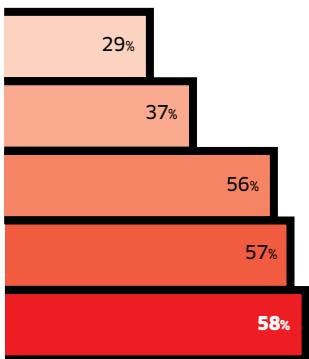
© Hugh Threlfall/Alamy/Latinstock



Cholot. Esta construcción característica de El Alto paceño simboliza el ascenso social de la nueva burguesía dedicada al comercio. Su nombre deriva de la composición de “cholo” y “chalet”.

Trabajadores informales urbanos

(en porcentaje, año 2014)



Chile
Argentina
Colombia
Perú
Bolivia

→ vas internacionales en divisas de Bolivia, con respecto al PIB, alcanzaron el 47%, situando a este país, por primera vez, a la cabeza de América Latina, muy por delante de Brasil, México o Argentina. Evo Morales ha señalado que, de país estructuralmente endeudado, Bolivia podría pasar a ser prestamista, y ha revelado que ya “cuatro Estados de la región”, sin precisar cuáles, se han dirigido a su gobierno pidiéndole créditos...

Con el pueblo adentro

En un país en el que más de la mitad de la población es originaria, Evo Morales es el primer indígena que alcanzó, en enero de 2006, la presidencia del Estado. Y desde que asumió el poder, este presidente diferente desechó el “modelo neoliberal” y lo cambió por un nuevo “modelo económico social comunitario productivo”. Nacionalizó, a partir de mayo de 2006, los sectores estratégicos (hidrocarburos, minería, electricidad, recursos ambientales) generadores de excedentes, e invirtió una parte de estos excedentes en los sectores generadores de empleo (industria, manufactura, artesanía, transporte, desarrollo agropecuario). Y consagró otra parte de esos excedentes a la reducción de la pobreza, mediante políticas sociales (educación, salud), incrementos salariales (a los funcionarios y trabajadores del sector público), estímulos a la inclusión y políticas de subvenciones.

Los resultados de la aplicación de este modelo se reflejan en un dato bien explícito: el 10% de la población salió de la pobreza. La deuda pública, que representa-

ba el 80% del PIB, se redujo a apenas el 33% del PIB. La tasa de desempleo (3,2%) es la más baja de América Latina, a tal punto que miles de bolivianos emigrados en España, Argentina o Chile empiezan a regresar, atraídos por la facilidad de empleo y el notable incremento del nivel de vida. Además, Evo Morales ha emprendido la construcción de un verdadero Estado, hasta ahora más bien virtual. Hay que reconocer que la inmensa y torturada geografía boliviana (un tercio de altas montañas andinas, dos tercios de tierras bajas tropicales y amazónicas) así como la diversidad cultural (37 naciones etno-lingüísticas) nunca facilitaron la integración y la unificación. Pero, lo que no se hizo en casi dos siglos, el presidente Morales está decidido a llevarlo a cabo acabando con la dislocación. Primero, promulgando una nueva Constitución que establece por primera vez un “Estado plurinacional” y reconoce los derechos de las diferentes naciones que conviven en el territorio boliviano. Y luego lanzando una serie de ambiciosas obras públicas (carreteras, puentes, túneles) con el objetivo de conectar, articular, comunicar regiones dispersas para que todas ellas y sus habitantes se sientan parte de un todo común: Bolivia. Nunca se había hecho. Y por eso hubo tantas tentativas de secesión, separatismo y de fraccionamiento.

“Derrotar e integrar”

Hoy, con todos estos éxitos, los bolivianos se sienten orgullosos de serlo. Orgullosos de su cultura originaria y de sus lenguas vernáculas. Orgullosos de su

moneda, que cada día se valoriza más con respecto al dólar. Orgullosos de tener el crecimiento económico más alto y las reservas de divisas más importantes de América Latina. Orgullosos de sus realizaciones tecnológicas, como esa red de teleféricos, su satélite de telecomunicaciones Tupac Katari, o su canal de televisión pública Bolivia TV.

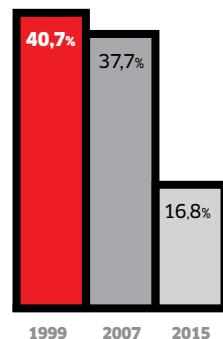
Todas estas hazañas –económicas, sociales, tecnológicas– explican en parte la rotunda victoria de Evo Morales y del MAS en las elecciones del 12 de octubre. Ícono de la lucha de los pueblos indígenas y originarios de todo el mundo, Evo ha conseguido romper, con este nuevo triunfo, varios graves prejuicios. Demuestra, contrariamente a lo que afirman racistas y colonialistas, que “los indios” saben gobernar, y hasta pueden ser los mejores gobernantes que jamás haya tenido el país. Demuestra que, sin corrupción, con honestidad y eficiencia, el Estado puede ser un excelente administrador, y no –como pretenden los neoliberales– una calamidad sistemática. Por fin, demuestra que la izquierda en el poder puede ser eficiente; que puede llevar a cabo políticas de inclusión y de redistribución de la riqueza sin poner en riesgo la estabilidad de la economía.

Pero esta gran victoria electoral también se explica

más pobres, pero sin afectar lo que poseen las clases medias o el sector empresarial. Por eso pudo realizarse un encuentro entre gobierno y Santa Cruz muy fructífero. Nosotros no cambiamos de actitud, seguimos diciendo y haciendo lo mismo que hace nueve años. Los que han cambiado de actitud frente a nosotros son ellos. A partir de ahí empieza esta nueva etapa del proceso revolucionario boliviano, que es la de la irradiación territorial y la hegemonía ideológica y política. Ellos empiezan a entender que no somos sus enemigos, que si hacen economía sin meterse en política les va a ir bien. Pero si, como corporaciones, tratan de ocupar las estructuras del Estado y quieren combinar política con economía, les va a ir mal”.

En su despacho del Palacio Quemado, el ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, me lo explica con una consigna: “Derrotar e integrar”. “No se trata –me dice– de vencer al adversario y de abandonarlo a su suerte, corriendo el riesgo de que se ponga a conspirar con su resentimiento de vencido y se lance a nuevas intentonas golpistas. Una vez derrotado, hay que incorporarlo, darle la oportunidad de sumarse al proyecto nacional en el que caben todos, a condición de que cada cual admita y acate que la dirección polí-

Tasa de indigencia
(en porcentaje, años 1999-2015)



Evo Morales ha emprendido la construcción de un verdadero Estado, hasta ahora más bien virtual.

por razones políticas. El presidente Evo Morales consiguió derrotar, ideológicamente, a sus principales adversarios reagrupados en el seno de la casta empresarial del departamento de Santa Cruz, principal motor económico del país. Este grupo conservador que ensayó desde la tentativa de secesión hasta el golpe de Estado, ha acabado por rendirse y por sumarse en definitiva al proyecto presidencial, reconociendo que el país ha puesto rumbo hacia el desarrollo.

Es una victoria considerable, que el vicepresidente Álvaro García Linera explica en estos términos: “Se logró integrar al Oriente boliviano y unificar el país, gracias a la derrota política e ideológica de un núcleo político empresarial ultraconservador, racista y fascista, que conspiró por un golpe de Estado y trajo gente armada para organizar una secesión del territorio oriental. En segundo lugar, estos nueve años han mostrado a las clases medias urbanas y sectores populares cruceños que tenían desconfianza, que hemos mejorado sus condiciones de vida, que respetamos lo construido en Santa Cruz y sus particularidades. Por supuesto, somos un gobierno socialista, de izquierda y dirigido por indígenas. Pero tenemos la voluntad de mejorar la vida de todos. Nos hemos enfrentado a las empresas petroleras extranjeras, igualmente a las de energía eléctrica, y las hemos golpeado para luego, con esos recursos, potenciar al país, fundamentalmente a los

tica, por decisión democrática de las urnas, la llevan Evo y el MAS.”

Luego de ganar las elecciones de 2014, ¿qué hacer con una victoria tan aplastante? “Tenemos un programa –afirma tranquilo Quintana–, queremos erradicar la pobreza extrema, dar acceso universal a los servicios básicos, establecer una administración económica responsable, industrializar, avanzar hacia una mayor integración latinoamericana, integrar el Mercosur y alcanzar nuestro objetivo histórico: recuperar nuestra soberanía marítima y la salida al mar.”

Por su parte, el presidente Morales ha expresado su deseo de que Bolivia se convierta en el “corazón energético de América del Sur” gracias a sus enormes potencialidades en energías renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, biomasa) además de los hidrocarburos (petróleo y gas). Lo cual se complementaría con la energía atómica civil producida por una central nuclear de próxima adquisición.

Bolivia cambia. Va para arriba. Y su prodigiosa metamorfosis aún no ha terminado de sorprender al mundo. ■

Combatir la pobreza

El gobierno boliviano ha creado ayudas económicas para reducir la pobreza extrema, entre las que se encuentran: el bono Juancito Pinto, un incentivo para la permanencia escolar; el bono Juana Azurduy, para las madres de niños menores de 2 años, y la Renta Dignidad, para mayores de 60 años.

1. Véase *Economía Plural*, La Paz, abril de 2014.

2. Véase *Página Siete*, La Paz, 12 de octubre de 2014.

* Director de *Le Monde diplomatique*, edición española.
© *Le Monde diplomatique*, edición española

Múltiples culturas en un mismo país

Las mil caras de Bolivia

por **Enzo Girardi***

En un territorio de poco más de un millón de km² de superficie conviven diversas culturas y etnias. La disputa entre la organización monocultural-monocivilizatoria y la pluricultural-múlticivilizatoria explica la inestabilidad política y social.

© Gastón Brito/Reuters/Latinstock



Whipala. Símbolo del carácter multiétnico del país.

Bolivia es un país signado por la complejidad étnica de su estructura social. Junto a la población blanca y mestiza conviven 37 comunidades indígenas que conservan su lengua, tradiciones, instituciones y creencias.

El censo realizado en 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas determinó que sobre un total de 10.059.856 habitantes, el 62% de los bolivianos se auto-identifica como indígena; el 49,5% como miembros de la comunidad lingüística quechua; 40,6% habla aymara, chiquitanos el 3,6%, guaraníes el 2,5% y mojenos el 1,4%, entre las principales lenguas.

La coexistencia de culturas indígenas, herencias de colonización española, modernización industrial, economía de mercado y democratización liberal revela la superposición de distintos sistemas políticos, estructuras de valores y modos de producción y de acumulación.

Álvaro García Linera explica que “en términos operacionales, se puede decir que Bolivia es un país donde coexisten de manera desarticulada varias civilizaciones, pero donde la estructura estatal sólo recoge la lógica organizativa de una sola de estas civilizaciones: la moderna mercantilista” (1).

Tensiones entre identidades

El Estado boliviano posterior a la independencia de España devino en una institución monocultural y monocivilizatoria. Expresaba a una parcialidad y, por lo tanto, carecía de legitimidad para articular aquella complejidad sociocultural.

Mientras la organización formal del país responde al paradigma liberal de origen europeo, la mayor parte de su población no se ve reflejada en esa referencia institucional porque en su esencia predomina el sustrato cultural popular y originario.

Esta brecha entre la base social (pluricultural y

multicivilizatoria) y el extremo de la pirámide institucional (Estado monocultural, elitista) sirve para comprender la crónica inestabilidad política que ha sobrelevado la República desde su nacimiento. Denuncia la pervivencia de un Estado que no ha sido legitimado por la mayoría social y cultural, carencia que lo convierte en una entidad inconsistente, incluso virtual e inoperante. Es una parte deslindada del todo, pero que se asume artificiosamente como el todo.

En Bolivia se percibe a diario esta crisis de identidad: una élite sociopolítica impone su universo ideológico y fuerza una homogeneidad cultural. Debajo de esta configuración subyace una sociedad predominantemente preindustrial, multicultural y pluricivilizatoria.

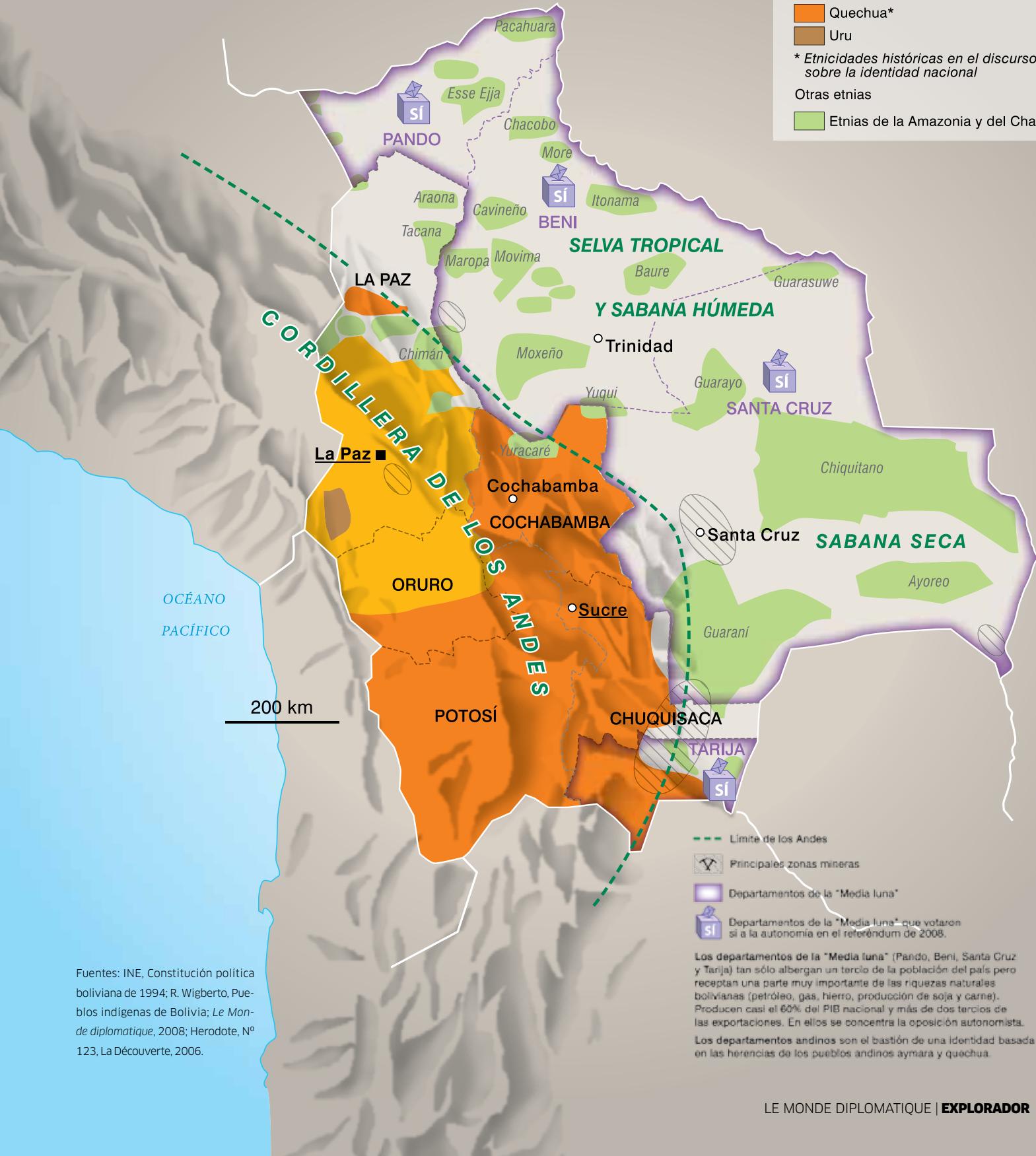
La cultura occidental es aún percibida en vastos sectores populares como un sistema de referencias y valores impuesto por los conquistadores; por ello la rechazan. Esta sostenida actitud de resistencia a la dominación ha reforzado las identidades originales y ha redundado en una tentativa de descolonización parcial. Amparadas en este proceso, las comunidades indígenas reclaman su derecho a ser protagonistas de una construcción nacional, plural y diversa.

García Linera afirma que “Estado multicivilizatorio significaría, precisamente, el reconocimiento de múltiples mecanismos, de múltiples técnicas y sentidos de entender, practicar y regular las pulsiones democráticas de la sociedad, en correspondencia a las múltiples formas de ejercer ciudadanía a partir de la pluralidad de matrices civilizatorias”. ■

1. Álvaro García Linera, “Democracia liberal vs Democracia comunitaria”, en AA. VV.: *Interculturalidad, Descolonización del Estado y del Conocimiento*, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2006.

*Licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Nacional de Córdoba) y especialista en Asuntos Internacionales.
©2009, Capital Intelectual

Un Estado, múltiples naciones



Entrevista a Evo Morales

“Mandar obedeciendo al pueblo”

por Martín Sivak*

En 2012, el autor de este artículo mantuvo una serie de encuentros en Argentina y Bolivia con Evo Morales. El presidente boliviano, entonces en su segundo mandato, se refirió a las resistencias que encontraba en su propia base social, a la crisis europea y al conflicto desarrollo-fundamentalismo ecológico.

© Handout/Reuters/Latinstock



En el mismo césped donde Bolivia le ganó 6 a 1 a Argentina en 2009, Evo Morales elonga los cuadriceps con un fondo de música de bandas militares. A sus pies, una de las cuatro tribunas del estadio Hernando Siles presenta asistencia perfecta: separados por división y por las gamas de sus uniformes, jóvenes aspirantes a las Fuerzas Armadas cantan, hacen la ola y dan aliento al Presidente. El equipo de la Presidencia –donde prevalecen los custodios de Morales– se enfrentará al del vicepresidente, Álvaro García Linera.

El árbitro se demora, las bandas callan y el Presidente acepta una pregunta anticlimática.

—Las revoluciones latinoamericanas del siglo XX han tenido momentos épicos iniciales, pero al cabo de una cantidad de años se instalan en una suerte de amesetamiento. ¿Su gobierno, al que ha presentado como una revolución democrática y cultural, insistirá con los temas iniciales –nacionalizaciones, nueva Constitución– o busca una nueva agenda?

—Hay tres nuevos temas para esta etapa. Valores: la autoridad que no roba, no miente y no es floja será siempre respetada (lo dice en aymara). Eso es cultural. Estamos convirtiendo la política en un sacrificio, no un beneficio. Si eso se mantiene, no sólo por parte del MAS (Movimiento al Socialismo) sino de cualquier partido, será muy bien visto. Segundo tema: que no se privatice los recursos naturales. Tercero: que los servicios básicos sean derechos humanos. Esa es la nueva agenda para este tiempo.

Morales contestará las preguntas de *el Dipló* sobre su gobierno, sobre las relaciones de Bolivia con el mundo y sobre la crisis económica internacional en distintos salones del Palacio Quemado (la Casa de Gobierno), entre dos reuniones y semiacostado en el avión presidencial. Aceptará además dos conversaciones frente a frente.

El líder del MAS ha encontrado en su segunda presidencia resistencias en su propia base social, una alianza de sindicatos, organizaciones indígenas y de colonos, diversas formaciones campesinas y aun clases medias urbanas, decisivas en su equilibrio inestable para lograr el 64% de los votos obtenidos en su reelección. Desde entonces, para evitar el contrabando, anunció un corte de los subsidios a los combustibles, que debió suspender por el rechazo al aumento de los precios de la nafta (el “gasolinazo”). Sumado a ello, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Antonio de Moxos generó el rechazo de organizaciones de pueblos originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isi-

boro Sécur (TIPNIS), que esgrimieron argumentos ambientalistas y cuestionaron el avasallamiento estatal. En una marcha de 64 días, estas organizaciones multiplicaron sus apoyos y llegaron victoriosas a La Paz, donde provocaron la mayor crisis de la segunda presidencia. Su popularidad bajó al 35%. Sin embargo, el proceso de cambio se sostiene en el impulso transformador del primer mandato y en los indicadores sociales y económicos. La pobreza y la desigualdad bajaron gracias a las nacionalizaciones, los programas sociales y los precios internacionales de los *commodities*, y el consumo aumentó en un contexto de estabilidad y crecimiento.

En el salón dorado del tercer piso del Palacio Quemado, entre reuniones con diferentes ministros, Morales contestó algunas preguntas. Nadie lo acompañaba.

—Usted acaba de hacer un balance de la gestión y me gustaría conocer su autocrítica en los dos temas más conflictivos de su segunda presidencia: el proyecto de carretera en el TIPNIS y el "gasolinazo".

—Ninguno de esos dos temas ha sido un error. La derecha boliviana y la Embajada de Estados Unidos aprovecharon el caso TIPNIS para hacer una agresión. El objetivo era sacar al Evo. Lo mismo con la gasolina. Tardé o temprano hay que acabar con la subvención a la gasolina. Mantenerla sería un problema serio para el país.

La charla se mudó a su despacho privado, que sólo usa para ciertas conversaciones telefónicas. Tiene dos computadoras, un equipo de música y, desde luego, varios teléfonos. En una mesa con adornos, bajo dos acuarelas de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y un cuadro con un collage menos solemne que dice "Coca no es cocaína", sobresale la versión en miniatura del satélite Tupak Katari, un proyecto de cooperación con China que proveerá internet a las escuelas rurales bolivianas. A su lado, un Morales en miniatura, como un ekeko aymara, y una escultura de madera del "Che" Guevara que evoca al guerrillero y a *El pensador* de Rodin.

—En su gobierno aparece una tensión entre la línea industrialista-extractivista y la de defensa de la Madre Tierra. ¿Es posible conciliar estas dos posiciones tomando en cuenta lo que sucedió con el TIPNIS?

—Extractivismo sin darle valor agregado sólo provocará que Bolivia siga siendo dependiente como ha sido los últimos 500 años. Si desde el primer momento de la fundación de la República se hubiera dado valor agregado a los minerales, Bolivia no estaría esperando créditos ni inversión ni inversionistas ni

cooperación. Bolivia tendría otro lugar en el mundo. Nosotros queremos darle ese valor agregado cuidando los derechos de la Madre Tierra. Y queremos darles ese valor agregado a la minería y a todos los recursos naturales. Tenemos que darles valor agregado para terminar con la dependencia.

Al día siguiente, el Presidente salió en caravana rumbo al aeropuerto de El Alto para llegar al aniversario de Incahuasi, un pueblo potosino. Primero voló a Sucre en su flamante OI, un avión Falcon francés que reemplazó al precario avión presidencial boliviano para los viajes internos y a las naves que el gobierno venezolano le prestaba para las giras internacionales.

—¿Por qué cree que hasta el momento la crisis económica internacional europea no ha llegado a Bolivia?

—En la década del 80 Bolivia dependía del precio del estano y del mercado norteamericano. Esa dependencia hizo que Estados Unidos presionara a un presidente de izquierdas. (Se refiere al gobierno de la Unidad Democrática y Popular de Hernán Siles Zuazo.) En realidad, lo derrocaron por razones económicas.

—Pero en 1985 hubo una hiperinflación del 20.000 por ciento y una muy inestable alianza política.

—Para mí ese derrocamiento duró por 20 años, que fueron los 20 años del neoliberalismo. Eso nos hizo pensar en cómo deberíamos tratar de evitar que nos asfixiaran de la misma manera. En el 2008 por la crisis financiera de Estados Unidos, Brasil se vio afectado y compró menos gas a Bolivia. Por eso nos hemos replanteado las prioridades. Primero tenemos que garantizar el mercado interno. Además, ampliar el mercado a Argentina, no sólo a Brasil. Un segundo tema es la ATPDEA. (La preferencia arancelaria que Estados Unidos otorgaba a Bolivia por colaborar en la lucha contra el narcotráfico, que se cortó cuando Morales expulsó al embajador Philip Goldberg acusándolo de conspirar contra la democracia.) Si nosotros hubiésemos recibido esa ayuda, la habrían cortado como parte de los recortes por la crisis internacional. Eso habría afectado mucho a los textileros, obreros que dependían de la exportación a Estados Unidos. Lo que hemos hecho es reemplazar ese mercado teniendo como prioridad la exportación de esos productos a Venezuela, Argentina y Brasil. Es un mercado seguro.

—¿Qué debería aprender esta Europa en crisis de los gobiernos de izquierda de América Latina?

—A mí no me gustaría hablar de los otros gobiernos. Puedo hablar de nuestro gobier-

no. Europa debería aprender que los servicios básicos son derechos humanos. El agua en especial. Debería acabar o reducir el consumismo. Debería haber políticas de racionalidad. Habría que reducir las asimetrías. El Estado tiene que controlar la economía nacional. El Consenso de Washington y todas las políticas que proclamaron la primacía de los mercados y el sector privado han fracasado rotundamente. Y es un gravísimo error que se sigan aplicando esas recetas en la crisis europea: sólo la empeorarán. En este contexto, yo sugiero que los movimientos sociales del mundo entero deberían trabajar en una nueva tesis política. Esta crisis mundial es una gran oportunidad para eso.

—¿En qué consistiría esa tesis y cómo complementaría dos perspectivas tan distintas como la corriente anti estatal que suscribe a la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder y otra que, como en el caso de su gobierno, ha apostado a una transformación a través del Estado?

—Creo que esta tesis puede ser universal. Pasar de la democracia representativa a la participativa. Mandar obedeciendo al pueblo. Los servicios básicos deben ser del Estado, no privados. Estados que tengan socios y no patrones. En lo financiero, hay que acabar con los usureros internacionales. Además, debemos cambiar la mentalidad de algunos partidos izquierdistas que sólo piensan en vivir en armonía con el ser humano, de la vida y no de la Madre Tierra. Nosotros queremos recuperar esa armonía.

Intentó dormir antes de aterrizar, pero se distrajo. Habló de su cansancio (en seis años no se ha tomado vacaciones) y de lo mal que jugó los últimos tres partidos de fútbol, especialmente en el estadio Siles.

En la pantalla de su celular la noticia del día: Santos Ramírez, ex presidente de YPFB y ex presidente del Senado, recibió una condena de 12 años de prisión por recibir una coima cuando estaba al frente de la petrolera estatal. Desde que se hizo público el caso en enero de 2009, Ramírez estuvo en prisión y no recibió ninguna ayuda del Presidente. Morales cortó los segundos de silencio, como si estuviese pensando una frase para decir en público: "En Bolivia los corruptos, aunque hayan sido importantes funcionarios de este gobierno, van a la cárcel directo y ahí se quedan. ¿Pasa en muchos sitios?". ■

*Periodista. Autor de *Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales* (Debate, 2008).

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



Los obstáculos de la revolución

por Álvaro García Linera*

El gobierno del Movimiento al Socialismo ha cambiado las condiciones sociales y económicas con una nueva manera de ejercer el poder. Sin embargo, como todo proceso revolucionario, aún presenta tensiones y contradicciones que deben ser superadas para poder fortalecer y continuar el modelo.

Al revelar las dificultades que encuentra una colectividad dada –un pueblo, un Estado–, las contradicciones catalizan el surgimiento de soluciones. A través de estas tensiones, las sociedades se desarrollan, tejen alianzas entre grupos sociales y superan (parcial o completamente) los obstáculos que traban su progreso.

Entre el año 2000, fecha de las primeras movilizaciones sociales masivas que denunciaron la privatización del agua, y 2009, fecha de la reelección del sindicalista campesino Evo Morales para la Presidencia, Bolivia vivió un conflicto fundamental que opuso al pueblo boliviano y al imperio estadounidense y sus aliados de la burguesía local, apegados al neoliberalismo.

La elección de 2009, de la que el gobierno de Morales salió fortalecido, atenuó esas amenazas externas. Surgieron entonces nuevas contradicciones, en el seno del bloque nacional popular, entre los diferentes sectores que conducen el proceso de cambio, relativas a las modalidades de su liderazgo. Cuatro de esas tensiones, secundarias respecto del conflicto central contra el imperialismo, se sitúan no obstante en el corazón del proceso revolucionario boliviano: por una parte, amenazan su prosecución; por otra, permiten imaginar las formas para pasar a la etapa posterior.

Estado vs. movimiento social

La primera se refiere a la relación entre el Estado y los movimientos sociales. La población espera acciones rápidas del gobierno, que aporten respuestas concretas a sus necesidades materiales. Pero esto exige una centralización eficaz de la toma de decisiones y nuestro gobierno está constituido por representantes de

organizaciones sociales indígenas, obreras, campesinas y populares, cuya dinámica propia requiere “tomarse tiempo”. Tiempo para el debate, la deliberación y el análisis de propuestas diversas. El gobierno del presidente Evo Morales –un “gobierno de los movimientos sociales” (1)– es el lugar donde se enfrentan y se liberan las dinámicas de concentración y de descentralización de las decisiones, de monopolización y de socialización de las acciones ejecutivas, entre la rapidez de los resultados y la lentitud de las deliberaciones.

Para intentar resolver esta contradicción, propusimos el concepto de “Estado integral”: el momento en que la sociedad se apropiá progresivamente de los procesos de arbitraje, para así superar la oposición entre el Estado (como máquina de centralizar las decisiones) y el movimiento social (como máquina de descentralizarlas y democratizarlas).

Un objetivo de este tipo no se plantea para el corto plazo. Es el resultado de un movimiento histórico hecho de avances y de retrocesos, de desequilibrios que inclinan la aguja de la balanza tanto hacia un lado como hacia el otro, según se ponga en juego la eficacia del gobierno o la democratización de las decisiones. La lucha (y sólo ella) permitirá mantener el equilibrio entre estos dos polos durante el tiempo necesario para la resolución histórica de esta contradicción.

Hegemonía indígena y popular

La segunda tensión creativa opone la amplitud del proceso revolucionario –que deriva de la creciente incorporación de diferentes grupos sociales y de la búsqueda de alianzas amplias– y la →



Gasolinazo. El gobierno nacional por decreto aumentó un 50% el precio de la gasolina, pero, ante el descontento social, Morales debió dar marcha atrás con la medida.

Nuevos frentes

El gobierno firmó en julio de 2016 un contrato por 11,8 millones de dólares con la empresa italiana Geodata, para el diseño de la planta hidroeléctrica del Bala. Las comunidades indígenas de la zona denuncian el daño ambiental que producirá la obra.

→ necesidad de consolidar la dirección indígena, campesina, obrera y popular, que garantiza la orientación política.

La hegemonía del bloque nacional-revolucionario exige la cohesión de las clases trabajadoras. También implica la proyección de su liderazgo al resto de la población, a fin de asegurar su apoyo.

Por supuesto, siempre habrá un sector reacio a la hegemonía indígena y popular, que en ocasiones actuará como correa de transmisión de los poderes extranjeros. Pero la consolidación de la dirección plebeya exige que el conjunto de la sociedad considere que su situación progresá cuando las clases trabajadoras dirigen el país. Esta necesidad le obliga a un poder de izquierda a tener en cuenta una parte de las necesidades de sus adversarios.

El interés común

Una tercera tensión creativa de nuestro proceso de cambio se ha manifestado con mucha intensidad desde el 2010. Surge en el choque entre el interés general y el particular, de un grupo, de un sector o de un individuo. Entre la lucha social, común y comunista y las conquistas individuales, sectoriales y privadas.

El amplio ciclo de movilizaciones que se inició en el año 2000, con la “Guerra del agua”, comenzó con una movilización local. Pero ésta concernía directamente al conjunto del país, también amenazado por los proyectos de privatización del agua. Luego vinieron la “Guerra del gas”, la lucha por una Asamblea Constituyente y la construcción de una democracia plurinacional: todas reivindicaciones sostenidas de manera sectorial por indígenas y obreros, que sin

embargo afectaban al conjunto de los oprimidos e incluso a la nación toda.

La emergencia de estas exigencias permitió construir un programa de toma del poder capaz de movilizar y unificar progresivamente a la mayoría del pueblo boliviano. Después de la victoria, en 2005, el gobierno se dedicó a implementarlo. Para empezar, se llevó a cabo la Asamblea Constituyente, que, por primera vez en la historia, permitió que la Constitución política del Estado fuera redactada por los representantes directos de todos los sectores sociales del país. Luego, procedimos a nacionalizar grandes empresas, facilitando así la redistribución de una parte del excedente económico a través de los programas Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy.

Si estudiamos el ciclo de la movilización como una curva ascendente que, de acuerdo con la experiencia histórica, se estabiliza y luego declina poco a poco, comprobamos que la primera etapa –o fase ascendente– se caracteriza por la inclusión creciente de los sectores sociales, la construcción de un programa general y la aparición, por parte de las clases “subalternas”, de una voluntad organizada y concreta de toma del poder.

La estabilización de la movilización, en el punto más alto de la curva, corresponde a la vez al momento de la puesta en marcha de los primeros objetivos universales y al de las resistencias más fuertes de los grupos sociales que apoyan el poder neoliberal saliente: desestabilizaciones, intento de golpe de Estado, movimientos separatistas, etc..

Desde que comenzó el segundo mandato de Morales, en 2010, estamos experimentando por lo tanto una tercera etapa de la movilización, declinante: la que se caracteriza por la tensión en el seno del bloque social popular, entre los aspectos general y particular. Superar esta contradicción será el resultado de reforzar el alcance universal de nuestro proyecto. Si, por el contrario, triunfara el particularismo corporativo, la pérdida de dinamismo de la revolución marcaría el punto de partida de una restauración conservadora.

Esta tensión entre reivindicaciones universales y particulares dentro del propio pueblo siempre existió. Por lo demás, es propio de las revoluciones: el pasaje progresivo de un sujeto fragmentado e individualizado –aspecto dominante– a un pueblo constituido como instancia colectiva. Pero, evidentemente, estamos entrando en una nueva etapa de la movilización, como lo sugiere el conflicto entre dos fracciones de la Central Obrera Boliviana (COB): una, aliada al poder; la otra, no.

En el mes de abril de 2011, un grupo de maestros afiliados a la COB inició una huelga en reclamo, principalmente, de mejoras salariales. Sin embargo, desde 2006, la administración de Evo Morales aumentó las remuneraciones de los trabajadores de la salud y la educación en un 12% neto de inflación. Al mismo tiempo, otras ramas de la administración pública sufrieron el congelamiento de sus salarios. Es concebi-

ble que los trabajadores de la salud y de la educación reclamen nuevos aumentos, pero sólo pueden proveer de un incremento en los ingresos del país.

En efecto, la política desarrollada por el presidente Morales apunta a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos y a centralizar los recursos provenientes de las nacionalizaciones y de las empresas del Estado. Se trata de crear una base industrial en el campo de los hidrocarburos, la minería, la agricultura y la electricidad, de manera de generar una riqueza sostenida y de utilizar los recursos del país para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo.

Como “gobierno de los movimientos sociales”, buscamos someter las diferencias existentes en el interior del bloque popular al debate público. Intentamos resolver las tensiones entre tendencias “corporativistas” y “universales” por vías democráticas, motivando a la vanguardia (indígenas, campesinos, trabajadores, obreros y estudiantes) a levantar la bandera del interés común, lo que no significa borrar el individuo o el interés privado, sino alcanzar una existencia razonable en un marco más general.

Desarrollo sustentable

La cuarta contradicción creativa emana de la oposición entre la necesidad de transformar nuestras materias primas (la industrialización) y la del respeto de la naturaleza, el “vivir bien”.

Se nos reprocha el no haber procedido a una “verdadera” nacionalización de los recursos naturales y el dejar que empresas transnacionales se apropien de una parte de las riquezas del país (2). Pero prescindir de las empresas extranjeras implicaría poder dominar las tecnologías de que disponen: aquellas vinculadas con la extracción, pero también con la transformación de las materias primas. No puede haber una nacionalización total de los recursos naturales sin una fase de industrialización.

Lograr poner en marcha una dinámica de este tipo llenaría las arcas del Estado, dado que los bienes manufacturados y los productos semiacabados tienen un valor agregado superior al de las materias primas sin procesar que hoy exportamos. Además, la fase de industrialización favorece los progresos tecnológicos y procura un conjunto de saberes científicos capaces de constituir un trampolín para nuevas actividades industriales, intensivas en tecnología pero también en mano de obra.

No es fácil avanzar en este camino. Por un lado, porque no tenemos experiencia en esta área, lo cual nos obliga a aprender mientras avanzamos. Por otro, la modernización industrial exige inversiones colosales: una usina petroquímica cuesta alrededor de 1.000 millones de dólares. Por último, se trata de un proceso largo: se necesitan tres años, al menos, para que entren en funcionamiento las plantas industriales más pequeñas, cinco o seis para las medianas y diez para las más grandes.

El gobierno tomó la decisión de crear una industria del gas, del litio, del hierro y de algunas reservas de agua. La utilización de los excedentes generados por la industrialización que promueve hoy Bolivia prioriza el valor de uso, no el valor de cambio: satisfacer necesidades antes que ganancias. Tal es el caso de los servicios básicos, elevados a la categoría de derechos humanos y por lo tanto distribuidos, porque son considerados necesarios, no rentables. También es el caso de la compra de productos agrícolas por parte del Estado, que apunta a garantizar la soberanía alimentaria del país y la disponibilidad de alimentos vendidos a un precio “justo”: es decir, fijado de manera que los productos sean accesibles a los consumidores, y no cambia en función de la oferta y la demanda.

De este modo, el excedente resultante de la industrialización ofrece al Estado la posibilidad de poner en cuestión la lógica capitalista de la apropiación privada. No obstante, la generación de estas riquezas provoca un conjunto de efectos nefastos para el medio ambiente. Y cuando la naturaleza es atacada, a fin de cuentas son los seres humanos quienes sufren.

Toda actividad industrial conlleva un costo ambiental. Pero el capitalismo subordinó las fuerzas de la naturaleza, abusó de ellas, colocándolas al servicio de las ganancias privadas, ignorando el hecho de que así destruía el núcleo reproductivo de la propia naturaleza. Debemos evitar el destino al que nos conduce este comportamiento.

“Humanizar la naturaleza y naturalizar al ser humano” (3), explicaba Karl Marx. Ese es el sentido de nuestro proyecto: utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para producir riquezas –caso contrario, ¿cómo se construirían las rutas, los centros de salud, las escuelas que nos faltan y cómo satisfaríamos las demandas de nuestra sociedad?– sin dejar de preservar la estructura fundamental de nuestro medio ambiente. Para nosotros, pero también para las generaciones futuras.

Las tensiones creativas que se debaten en el bloque popular que gobierna Bolivia son características de las dinámicas de transformación social: ¿caso las revoluciones no son flujos caóticos de iniciativas colectivas y sociales, impulsos fragmentados que se cruzan, se enfrentan, se suman y se articulan para dividirse de nuevo y volver a cruzarse? En otras palabras, nada está definido de antemano. ■

1. La expresión “gobierno de los movimientos sociales” sugiere que con la elección de Morales son los movimientos sociales (movilizados desde comienzos de la década de 2000) los que se apoderaron del gobierno.

2. La nacionalización de los hidrocarburos no fue completa, ya que no dispone de la tecnología suficiente para prescindir de los socios privados, el Estado tomó el control del 51% del capital de todos los operadores presentes en su territorio.

3. Karl Marx, *Manuscritos de 1844*, Buenos Aires, Cartago, 1984.

*Vicepresidente de Bolivia.

Traducción: Gabriela Villalba

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

LA DÉCADA DEL MAS

2005

Llegada al Palacio

Evo Morales, líder campesino e indígena, dirigente del Movimiento al Socialismo, es elegido presidente con el 53% de los votos.

2006

Recuperar el gas

Se nacionaliza por decreto Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

2009

Refundar la República

Se ratifica la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgándole derechos a naciones y pueblos indígenas.

2010

Conflictos

Evo Morales asume su segundo mandato. Debe enfrentar el conflicto por la carretera en el TIPNIS y el “gasolinazo”.

2016

El freno a Evo

En febrero, el “No” en el referéndum acerca de la reforma constitucional le impediría a Morales ser elegido por cuarta vez.



3

Bolivia hacia afuera

EL NORTE EN LA REGIÓN

Desde la asunción de Evo Morales Bolivia ha reorientado su política exterior guiada por el sueño de la “Patria Grande”, un anhelo del libertador Simón Bolívar. El giro a la izquierda de los gobiernos latinoamericanos permitió su acercamiento al Mercosur, a pesar del histórico conflicto con Chile. Al mismo tiempo, rompió sus vínculos con los enemigos del movimiento cocalero, liderados por Estados Unidos.



A black and white portrait of Daniel Agramont Lechín, a man with a beard and glasses, wearing a suit and tie.

Vínculos más estrechos con la región

Con la mirada hacia el Sur

por **Daniel Agramont Lechín***

Bolivia, miembro desde hace más de cuarenta años de la Comunidad Andina, dio un giro en su política exterior con la asunción de Evo Morales. Durante su gobierno apoyó al Alba y logró su integración al Mercosur con el objetivo de afianzar su vínculo con los países ideológicamente afines. Su desafío será reordenar el tablero de relaciones sin resultar perjudicado.

Luego de tres años de espera, en julio de 2015 Bolivia fue admitida como miembro pleno en el Mercado Común del Sur (Mercosur). Pero esta admisión generó mucha controversia en el ámbito local ya que, desde 1969, el país es miembro de la Comunidad Andina/Pacto Andino (CAN), un bloque que trasciende la integración puramente comercial. Bolivia tiene una estrecha vinculación con los países que conforman el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela), pero por otro lado siempre existieron temores por posibles perjuicios económicos para Bolivia derivados de su ingreso al bloque sureño, tomando en cuenta la gran diferencia entre países, especialmente en lo que a producción industrial y competitividad se refiere.

Además de las cuestiones comerciales, lo interesante de su ingreso en el Mercosur es que implica un drástico viraje en la política exterior del país. Por un lado, desde las primeras negociaciones con el bloque –hace más de dos décadas–, Bolivia no quiso ser parte de la unión aduanera y tan solo buscaba reducir las barreras al comercio recíproco. Por otro lado, a partir del ascenso de Evo Morales a la Presidencia en 2006, el país decidió apoyar la integración bolivariana –corporizada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP)–, cuyo principio fundamental era “la integración entre los pueblos”. Así, el ingreso de Bolivia en el Mercosur implica un giro no sólo respecto a la política exterior boliviana en las últimas tres décadas, sino también respecto a la política de

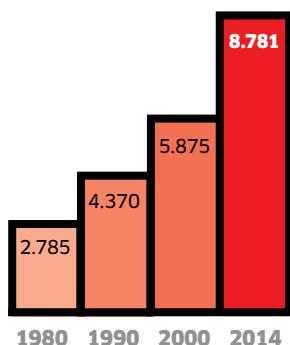
Evo Morales. Surge entonces la pregunta: ¿cuáles son los motivos que llevaron al gobierno del presidente Morales a este viraje? Tal vez más importante: ¿cuáles son los beneficios del ingreso en el Mercosur como miembro pleno, tomando en cuenta las actuales características de este bloque?

Se entiende que, al referirnos a la integración, entramos en uno de los temas más álgidos para la región, porque hablamos de países que si bien siempre manifestaron su vocación integracionista, luego de más de cinco décadas, lograron tan solo avances limitados e insatisfactorios. A menudo se cita el legado de Simón Bolívar y el sueño de la construcción de la “Patria Grande”, pero en la práctica, tras la firma de tratados que incluyen objetivos por demás ambiciosos, los progresos fueron decepcionantes.

El sueño de la integración

En el imaginario colectivo boliviano siempre estuvo presente la posición geográfica privilegiada como “corazón de Sudamérica”. Esto no descarta que el pilar fundamental de la política exterior sea zanjar el problema de la “mediterraneidad”, fruto de la pérdida del litoral marítimo a manos chilenas durante la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX. Más bien, tanto desde el punto de vista político como desde el económico, la geografía pone al país frente al gran desafío y la oportunidad de mantener estrechas relaciones con el resto de las naciones sudamericanas. Una temática clave de la doctrina internacional boliviana que tiene un pilar que se define como “país de contactos”. →

Stock de la deuda externa
(en millones de dólares corrientes, años 1980-2014)

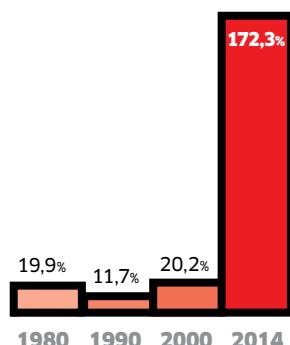


© Ben Pipe/Alamy/Latinstock

Riqueza. El zinc y la plata son los minerales que más exporta Bolivia y su principal comprador es Estados Unidos. La exportación de joyas de oro ha crecido de forma significativa de 2014 a 2015.

Reservas internacionales sobre la deuda externa

(en porcentaje, años 1980-2014)



→ Si bien Bolivia tiene fronteras y relaciones estrechas con los países de la costa del Pacífico, así como con los de la costa atlántica, la firma del Pacto Andino hizo que desde 1969 privilegiara su relación con los países de esa subregión por sobre los del Cono Sur, al menos en cuanto a los compromisos asumidos dentro del bloque. No obstante, esto no significa que Bolivia haya decidido alejarse del sueño de la integración sudamericana, sino más bien que avanzó en primera instancia en el área andina por la voluntad que estos países mostraron de construir un proyecto conjunto.

Con el paso del tiempo, Bolivia fue dando pasos decisivos hacia la asociación e integración con los demás países de la región, buscando ese destino de país integrador. Y no nos referimos únicamente a los dos grandes y conocidos bloques que son la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Grupo Andino. Además de estos, Bolivia ha venido firmando una serie de acuerdos en diferentes materias que trascienden una simple liberalización de los intercambios comerciales.

El acercamiento al Sur

No se puede comprender el reciente ingreso de Bolivia en el Mercosur sin poner la mirada en la gran vinculación geopolítica y económica que se tiene con este bloque. Así lo entiende el ex ministro de Defensa Walker San Miguel: “Para Bolivia, el ingreso al Mercosur tiene carácter estratégico. Nuestro país tiene el 70% de sus fronteras con los países que integran ese bloque y sumado a nuestra posición geográfica, nuestros recursos energéticos y el hecho incontrastable de ser un país-nudo de integración [...] colocan a nuestro

país en una dinámica que no debe detenerse” (1).

Esto no es algo nuevo. La doctrina internacional de Bolivia siempre consideró como un elemento clave el hecho de pertenecer a las tres regiones del subcontinente. El escritor y ensayista Jaime Mendoza concebía a Bolivia como una unidad histórica, geográfica y económica, con gravitación natural hacia tres grandes vías internacionales: el Pacífico, el Plata y el Amazonas.

Con el paso del tiempo, la diplomacia boliviana siempre tomó acciones orientadas a aumentar su gravedad en cada una de estas tres regiones. Después de la Guerra del Chaco (1932-1935), un grupo de diplomáticos encabezados por Alberto Ostria Gutiérrez –bautizado “Pacto de Caballeros”– adoptó un programa de política internacional para el país que incluía como uno de los principales puntos de la política exterior el formar parte de los sistemas del Pacífico, del Amazonas y del Plata. En 1969, además de ingresar en el Pacto Andino, Bolivia firmó el Tratado de la Cuenca del Plata que, aunque no fue un bloque de integración tan profundo como el primero, marcó la primera asociación con los países del Cono Sur, entendiendo la gran importancia que significaba ser parte de este sistema hidrográfico.

Adicionalmente, y como antecedente más reciente, es necesario recordar el acuerdo de complementación económica que Bolivia firmó con el Mercosur en 1996 en el marco de la ALADI; este acuerdo fue el de mayor envergadura hasta ese momento, ya que habilitó la profundización de varios convenios bilaterales que La Paz tenía con cada uno de los países. Haciendo historia, recordemos que la asociación de Bolivia



Integración mundial. Bolivia forma parte de la coalición de países en desarrollo que exige un mayor acceso a los mercados para los productos tropicales dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

con el Mercosur se enmarca en el proceso de liberalización económica boliviano, y este tratado aparecía como un paso lógico en esa dirección. Las negociaciones bilaterales se iniciaron a mediados de 1994, con el objetivo de suscribir un tratado que sustituyera los Acuerdos de Complementación Económica que se encontraban vigentes entre Bolivia y cada uno de los miembros del Mercosur. A pesar del rechazo de los empresarios privados y la controversia que existía dentro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de varios meses de negociación, en diciembre de 1996, el país suscribe el Acuerdo de Complementación Económica N° 36 (ACE 36), cuyo objetivo principal fue la conformación de una zona de libre comercio en un plazo máximo de 18 años. Para 2014, absolutamente todo el universo arancelario fue liberado.

Una política exterior pragmática

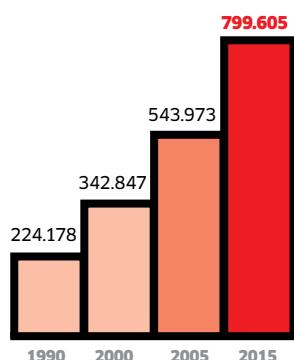
Desde el anuncio en 2012 del ingreso como miembro pleno del Mercosur, Bolivia dejó en claro que ello no implicaba su salida de la CAN. Con esta acción, intentaba superar más de dos décadas de búsqueda fallida de convergencia entre ambos bloques. Si bien sería imposible pensar en la pertenencia a dos uniones aduaneras, el plan boliviano es posible debido al retroceso que se operó en la CAN. Existe, sin embargo, una diferencia marcada con lo que sucedía en el pasado, y es que ahora Bolivia conformará una unión aduanera con el Mercosur y mantendrá su pertenencia a la CAN como zona de libre comercio. Para los teóricos de la integración, este escenario hubiera si-

do impensable hasta hace una década, pero lo cierto es que la política de integración de los países es la continuación de la política económica, y el denominado “giro a la izquierda en la región” determinó un cambio drástico en la conformación de alianzas y bloques.

En este sentido, vale la pena resaltar el pragmatismo que está mostrando el gobierno de Evo Morales en estos últimos años, que evidencia un cambio respecto al radicalismo de los años iniciales de su mandato. Recordemos que en los primeros tiempos el Movimiento al Socialismo (MAS) buscó reconduir la política exterior del país, orientándose a formar alianzas con países gobernados por la izquierda. Bolivia siguió el liderazgo de Venezuela y la política de integración se centró en el apoyo al bloque de contención al avance del capitalismo estadounidense. Este proceso, entendido como “antiimperialista”, recibió un nombre que fue una clara alusión de contrapeso a las propuestas estadounidenses en la región: Alba-TPC. Aunque sin imitar a Venezuela en su abandono del bloque andino, la política exterior boliviana mostró hasta hace algunos años una línea dura, que entendía que sólo se podía asociar con países con la misma ideología. Es decir, la base de la integración era la política. Esto se puso de manifiesto no sólo en la negativa del país de firmar un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos o un acuerdo de asociación con la Unión Europea (hacia lo cual existían múltiples cuestionamientos), sino también en todas las controversias que se mantuvieron con los países vecinos por acciones que el gobierno boli- →

Bolivianos en el extranjero

(1990-2015)

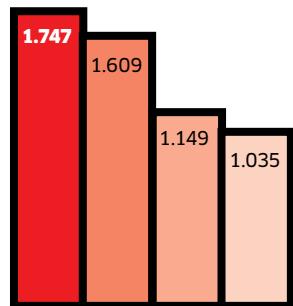


El aliado oriental

La relación de Bolivia con China se afianzó en el gobierno de Evo Morales. A partir de 2006 comienzan a firmar acuerdos de cooperación y fortalecimiento bilaterales. En 2016 China le otorgó un crédito al país por 7.000 millones de dólares para la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Central.

Importaciones por origen

(en millones de dólares corrientes, 2015)



China
Brasil
Argentina
Estados Unidos

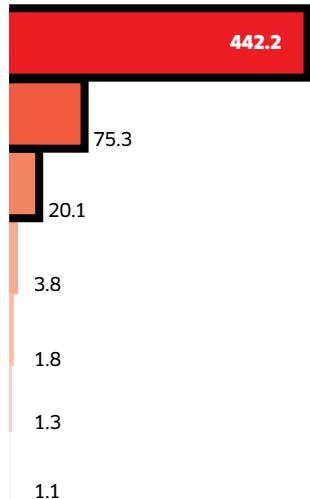


© David Mercado/Reuters/Latinstock

Vecinos. Argentina y Bolivia firmaron una declaración conjunta para mejorar los pasos fronterizos y el control migratorio para combatir el narcotráfico. En 2015 929.927 personas circularon por la frontera La Quiaca-Villazón.

Producción de minerales

(en miles de toneladas métricas, 2015)



Zinc
Plomo
Estaño
Antimonio
Wólfram
Plata
Oro

→ viano consideraba como una amenaza a la unión entre los pueblos. En cambio, en los últimos años, el país comenzó a mirar más allá de las ideologías y se firmaron varios tratados como los Acuerdos Complementarios de Ilo en 2012, con Perú.

Ante lo anterior, parece que perdería relevancia la pregunta sobre cuál es el bloque al que Bolivia debería pertenecer y más bien nos preguntamos cuál es el que debería privilegiar. Consideremos que, además de tener varios tratados bilaterales en temas diversos, el país es miembro de tres bloques económicos –ALADI, CAN y ahora Mercosur– y de dos bloques políticos: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Además, es miembro de un bloque económico-político como el Alba-TCP.

Respecto a la integración económica, a primera vista el Mercosur parece ser el bloque más importante, dado que es el principal comprador del país, con 51% del total de las exportaciones, mientras que la CAN alcanza tan solo el 10%. Sin embargo, profundizando el análisis, encontramos que el 92% de las ventas al Mercosur corresponden a gas natural, mientras que, en el caso de la CAN, la situación es la inversa: la industria manufacturera representa 85% de las ventas al bloque. Existe una clara dicotomía porque el Mercosur ha sido en las últimas tres décadas el principal comprador, pero por otro lado, el mercado de la CAN no puede despreciarse, porque sus integrantes son los grandes compradores de valor agregado (agroindustria), mientras que el Mercosur adquiere bienes primarios. En otras pa-

labras: se mantienen estrechos vínculos con uno por complementariedad (CAN) y con otro por afinidad (Mercosur).

Adicionalmente, no se puede dejar de lado que la gran amenaza del ingreso en el Mercosur será la adopción del arancel externo común (AEC), que ofrece niveles elevados de protección a la producción industrial. En este punto, Bolivia deberá evitar que se produzca una desviación de comercio muy dramática, tomando en cuenta que las compras bolivianas al Mercosur representan tan solo 28% del total, mientras que Asia representa 29%, Europa 14% y Estados Unidos 11%. Para las negociaciones futuras en esta materia, no hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucedió por décadas en la CAN, el Mercosur sólo acepta que los países incumplan el AEC en una lista reducida de productos, que se estima será de 200 para Bolivia. No obstante, a priori se estima que el efecto anterior no sería de gran magnitud, ya que actualmente la protección arancelaria de Bolivia es de las más elevadas en el continente (2).

De lo expuesto se desprende que aunque el país tiene grandes intereses con ambos bloques, es claro que el ingreso al Mercosur no busca mayores mercados para la producción nacional. Esta decisión responde a motivos políticos antes que económicos. Recorremos que ya se había alcanzado la zona de libre comercio y, además, para la venta de gas natural no se requiere de preferencias arancelarias. Más bien, podríamos afirmar que lo que Bolivia busca al dar este paso es aprovechar los beneficios políticos de la integración. Aunque este punto es muy criticado en el

ámbito interno, parece que muchos olvidan que la política es una parte fundamental de los procesos de integración. Recordemos que la adhesión de Bolivia al Acuerdo de Cartagena se “hizo por razones esencialmente políticas. No podía quedar ausente de un proyecto de complementación [...] Las consideraciones comerciales y económicas vinieron después” (3).

Reordenar el tablero

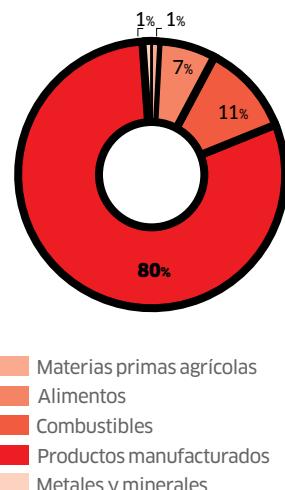
Podemos afirmar entonces que Bolivia persigue dos grandes objetivos políticos con su ingreso al Mercosur. El primero es mantener un elevado y fluido diálogo político. Y esto es algo de suma importancia por la vinculación con esta región. Los puntos en la agenda con este bloque son mucho más amplios de lo que muchos académicos liberales quisieran admitir. Además de los tópicos clásicos de la integración económica –como aranceles y producción industrial–, tenemos que incluir otros como infraestructura, fronteras, narcotráfico, transporte (carretero y fluvial), tránsito, aduanas, energía, medio ambiente, facilitación del comercio, etc. Aquí es importante mencionar que se tienen que renegociar los contratos

desconocer su proyección política, entendiendo que inclusive el proyecto regional del ALCA fue desestimado gracias al liderazgo que planteó el Mercosur en la resistencia. Actualmente [año 2015], el peso político del Mercosur se refleja en la resistencia a los avances en diversos temas comerciales internacionales, tanto en la Organización Mundial del Comercio como en los tratados de Estados Unidos y Europa tal como fueron planteados.

Así, podemos ver que la política exterior de Bolivia está buscando profundizar su integración con todos los países de la región dado que el ingreso al Mercosur no significará la renuncia a su gran bloque histórico, que es la CAN. Más bien entendemos que, ante el cambio de visión en los propios bloques, Bolivia está respondiendo con un cambio en su política de integración. La CAN, luego de más de 45 años de existencia, fue reducida por sus propios miembros a un bloque prioritariamente económico. Al contrario, a pesar de que el Mercosur nació como un proyecto con objetivos únicamente económicos, los temas políticos y sociales fueron ganando cada vez más espacio. Esto se acentuó con la llegada al poder de gobiernos de izquierda en los países miembros fundadores.

Importaciones de mercancías por tipo

(en porcentaje, 2015)



El “giro a la izquierda en la región” determinó un cambio drástico en la conformación de alianzas y bloques.

de gas natural con Brasil y Argentina y eso definirá el precio del producto que representa 51% de las exportaciones totales del país, precio que se basa en un contrato entre Estados.

A esto se suma el segundo objetivo, que es remediar la gran pérdida de relevancia política internacional de la CAN y el Alba-TCP. Si bien la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos (2008-2009) causó una gran división dentro de la CAN, a partir de 2012 la situación se agrava aun más ya que Perú y Colombia conformaron –junto con Chile y México– la Alianza del Pacífico, basada en la apertura comercial y el acceso a mercados. Por otro lado, la difícil situación interna por la que está atravesando Venezuela llevó a que el Alba-TCP no sea un jugador en el tablero regional y global, y que sea más bien un bloque de diálogo interno entre sus miembros.

En contraste, podemos mencionar que el Mercosur es un bloque con proyección política y que a escala mundial es considerado un actor significativo. Para comenzar tiene como miembros a Brasil y Argentina, importantes participantes en la economía global, ya sea por el tamaño de sus economías como por la gran escala de su producción agropecuaria y elevado nivel de producción industrial. Por otro lado, este bloque fue el gran contrapeso al avance de las políticas liberales de Estados Unidos y Europa tanto en el nivel multilateral como en el regional. No se puede

concluimos que, con la membresía plena en los bloques del área andina y del Cono Sur, Bolivia logra dar un paso importante en la consolidación de un pilar histórico de su doctrina de política exterior, que es profundizar su vinculación con los países de Occidente así como con los de Oriente. Esto se entiende únicamente aceptando que, para muchos países en la región, la búsqueda de mercados preferenciales ya no es el principal objetivo de la política exterior. Como miembro de la CAN y del Mercosur, Bolivia tendrá una vasta normativa e institucionalidad común para una diversidad de temas económicos, políticos y sociales, que trascienden la simple eliminación de las barreras a los intercambios comerciales. ■

1. W. San Miguel Rodríguez, “Bolivia en el Mercosur”, *La Razón*, 26-7-2015.

2. Con el objetivo de revertir las políticas neoliberales, en 2007 Bolivia modificó su estructura arancelaria y elevó la protección, alcanzando en muchos productos el 40%, que es el máximo consolidado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

3. Gustavo Fernández, “Vinculación con el mundo. Bolivia y sus circunstancias”, en Fernando Campero Prudencio et al., *Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea*, Harvard Club Bolivia, La Paz, 1999.

* Ex funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Actualmente es coordinador de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Bolivia.

La demanda de gas

Ante el pedido de importación de gas de Brasil y el vencimiento del contrato de exportación a Argentina, en 1999 se inaugura el gasoducto que va desde Río Grande a Porto Alegre. El contrato firmado estableció la venta por 20 años del hidrocarburo.





Un conflicto de más de cien años

La pelea por una salida al mar

por Cédric Gouverneur*

Desde su derrota en la Guerra del Pacífico (1883) Bolivia es el único país de América Latina que no posee salida al mar. Este encierro dentro del continente perjudica su comercio y crecimiento económico. En 2013 el gobierno de Evo Morales demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ésta mediara en la recuperación del territorio perdido.

Amanece en El Alto, suburbio de La Paz, a 4.000 metros de altura. En el frío matinal, Juan Capiona y Sandro T. ponen en marcha los motores de sus semirremolques. Como cada mes, los dos choferes se preparan a partir para la costa chilena. Un viaje difícil a través del Altiplano, los Andes y el desierto de Atacama, de donde volverán con cuarenta y cinco toneladas de carga cada uno. “Sería mucho más simple si no hubiera fronteras”, suspira Capiona, que se prepara a afrontar una vez más las colas, los controles interminables y las formalidades administrativas.

Como la mayoría de sus compatriotas, Capiona sabe perfectamente que la frontera que separa a su país de las olas no siempre estuvo ahí. Al momento de su independencia, en 1825, Bolivia disponía de cuatrocientos kilómetros de litoral, que serían luego anexados por Chile durante la Guerra del Pacífico. Desde ese entonces, el país es el único del continente que se encuentra totalmente enclavado, dado que Paraguay posee un acceso al Atlántico gracias al río Paraná.

Según *El libro del mar*, un documento publicado por La Paz en 2014 (1), esta situación traba el desarrollo del país, especialmente al encarecer sus exportaciones y privarle de los recursos del territorio anexado. Justamente, en cada continente, la nación más pobre es una de las enclavadas: Moldavia, Níger, Afganistán, Nepal... y Bolivia. Pero los bolivianos son los únicos que perdieron su litoral tras una guerra. Por lo tanto, no viven esta situación como una fatalidad geográfica, sino como una injusticia.

Camino con obstáculos

Los dos semirremolques abandonan El Alto en dirección al Sur. Capiona, de 27 años, es camionero desde hace seis. En forma regular se dirige hacia Chile para cargar la mercadería que a veces conduce hasta la frontera brasileña. Para él, el océano es “hermoso, sin límites” y como todos los bolivianos que encontramos, sueña con que “un día, nuestra bandera flamee nuevamente en algunos kilómetros de costa”.

Capiona apoya al presidente Evo Morales respecto de esta cuestión central. El 24 de abril de 2013, el presidente inició un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya invocando la obligación de Chile de “negociar de buena fe y de manera efectiva con vistas a lograr un acuerdo que asegure un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”. Sobre este tema, Evo Morales concita la unanimidad, o casi. Señal de que ese combate trasciende las divisiones partidarias, el embajador itinerante boliviano encargado de defender la causa marítima a través del globo no es otro que el ex presidente conservador Carlos Mesa (2003-2005).

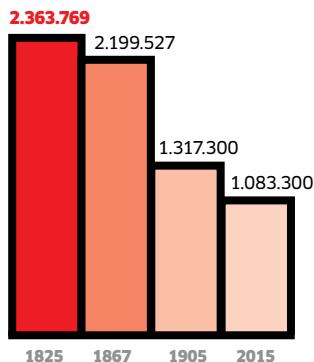
Cerca del mediodía, a la salida de la ciudad minera de Oruro, los dos camiones doblan hacia el Oeste. El Altiplano se vuelve cada vez más árido y en el horizonte se erigen los picos nevados de la cordillera. Al fondo de un barranco, un contenedor deshecho testimonia la peligrosidad de la ruta, que todavía no está asfaltada. Sin embargo, se iniciaron obras con el apoyo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, un programa →



Día del mar. El 23 de marzo se conmemora la heroica defensa de Calama, durante la Guerra del Pacífico, liderada por el coronel Eduardo Abaroa.

Territorio boliviano

(en km², años 1825-2015)



→ de modernización imaginado en gran parte por la burguesía de San Pablo para asegurarse un acceso a la costa del Pacífico. La ruta, aunque llena de baches, no deja de ser un eje vital del comercio mundial.

Al final de la tarde, llegamos a Pisiga, caserío boliviano adormecido que marca la frontera. Capiano y su compinche no se olvidan de cargar el tanque allí: en Chile, el combustible cuesta dos veces más caro. Luego, se van a estacionar ante la barrera ya cerrada, para poder cruzarla entre los primeros a la apertura de la aduana, al día siguiente a las 8 de la mañana. Detrás de ellos, pronto vienen camiones y ómnibus a encolumnarse a lo largo de centenares de metros. Según la Cámara de Exportadores bolivianos (Camex), el 40% de las exportaciones del país, es decir, alrededor de 1,5 millones de toneladas por año, deben transitar por los puertos del vecino chileno.

A la mañana siguiente, los dos hombres ubican sus camiones frente al puesto fronterizo, donde serán inspeccionados sus vehículos. Papeles en mano, ocupan su lugar en la cola que lleva a las ventanillas del servicio migratorio. Primera sorpresa: no hay una fila reservada para los profesionales. Los camioneros bolivianos se encuentran, pues, sumergidos en medio de centenares de pasajeros de los ómnibus de turismo que unen los dos países.

Los controles, meticulosos, parecen interminables. Bolivia se encuentra entre los principales productores de cocaína y las "mulas" (pasadores de droga) prueban su suerte diariamente en ese puesto fronterizo. Acostumbrados a estas formalidades, los dos choferes toman su mal con paciencia. Tres horas más tarde, finalmente vuelven a subir a sus camiones. "A veces es más largo", desliza Capiano.

Ahora los camiones trepan por las escarpadas rutas del desierto de Atacama, antes de volver a descender hasta el Pacífico. En mitad de la tarde, los choferes hacen una pausa en Alto Hospicio, un pueblo situado a una decena de kilómetros de Iquique donde deben permanecer todos los camioneros en tránsito.

Al día siguiente, volvemos a encontrarlo en la Zofri. Esta zona franca, creada en 1975 por iniciativa de los "Chicago boys", es la más importante de América del Sur. Una verdadera ciudad dentro de la ciudad, donde, libres de derechos de aduana, circulan productos provenientes de Asia. Estibadores chilenos cargan uno de los semirremolques con 428 motos niponas *made in China*; el otro, con centenares de cajas de licor. Una vez sus cargas sujetas y cubiertas por una lona, los dos camioneros volverán a subir al día siguiente hacia Arica, donde sus camiones serán pesados. Entonces, atravesarán nuevamente el desierto de Atacama y los Andes hasta Bolivia. De allí, subirán hasta Cobija, en la frontera con Brasil (principal socio comercial de Bolivia), destino final de sus mercaderías. Luego, volverán a descender hasta Santa Cruz de la Sierra, capital económica de Bolivia, para fletar un nuevo cargamento antes de regresar finalmente a La Paz.

Según el Banco Mundial, esta ronda infernal explica en parte por qué las exportaciones de Bolivia son un 55% más caras que las de Chile. El país andino registra los costos de transporte más altos de América del Sur: superan la media del 31%. Respaldadas por esas cifras, las autoridades bolivianas achacan en parte el retraso del país a la pérdida del litoral.

Negociaciones frustradas

Del lado chileno, suena otra campana. En Iquique, Jorge Soria Quiroga, un ex atleta de 78 años, es una figura de la vida política local. Soria Quiroga se sale de sus casillas ante la mención de las reivindicaciones bolivianas. Con su voz de barítono, se subleva: “¿Ustedes aceptarían que un corredor alemán atravesara París?”. ¿Comparación arriesgada? En todo caso, ilustra la extrema sensibilidad que suscita la cuestión aquí. Soria Quiroga continúa: “Las fronteras de Europa son el resultado de guerras. Nadie se imagina a los europeos volviendo atrás su trazado. Hasta Augusto Pinochet había buscado una solución al conflicto: le había propuesto a Hugo Banzer un corredor al norte de Arica. ¿Y adivinen qué pasó? Perú se opuso, porque así ya no habría tenido más frontera con Chile. Esta es claramente la prueba de que rediseñar las fronteras es imposible”. Desde el fracaso de esas negociaciones, en 1978, La Paz y Santiago no tuvieron más relaciones diplomáticas. Ya en 1970, Chile y Bolivia habían discutido la posibilidad de establecer un corredor boliviano. Pero la toma del poder por parte del general Banzer puso fin a las negociaciones...

El 8 de julio de 2015, sin embargo, durante su visita a Bolivia, el papa Francisco alentó a ambos países vecinos al “diálogo” diciendo “estoy pensando en el mar”. Santiago se mostró decidido a restablecer “in-

mediatamente" y "sin condiciones" las relaciones diplomáticas con La Paz. Morales por su parte invitó a Michelle Bachelet a encontrarse con él en el Vaticano "para alcanzar una solución definitiva que le restituya a Bolivia un acceso soberano al Pacífico, con un garante, el papa Francisco". Así las cosas, el presidente boliviano habla del Sumo Pontífice como de un aliado, evocando incluso en una entrevista "el apoyo del Papa a la causa marítima" (2).

En defensa de la soberanía

"El mar nos pertenece. Recuperarlo es un deber y no un derecho", replica, del otro lado de los Andes, una placa de cobre. Todos los años, el 23 de marzo, Bolivia entera celebra el "Día del mar", aniversario de la defensa desesperada de Calama llevada a cabo por el coronel Eduardo Abaroa. Ese día, los representantes de las instituciones se reúnen solemnemente alrededor del monumento a Abaroa en la plaza que lleva su nombre. "¡Nunca más Bolivia sin mar!", repitió el presidente Morales el 23 de marzo de 2015 ante su gobierno reunido, la policía, el ejército e incluso la improbable marina boliviana, cuyos navíos nunca probaron la sal. Los alumnos, durante su clase de instrucción cívica cantan el "Himno al mar". En clase aprenden que la "Guerra del Salitre", según la denominación boliviana del conflicto, fue injusta; que

de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico'. Junto con ello, Bolivia goza de autonomía aduanera, preferencias tarifarias y facilidades de almacenamiento. A través de estos privilegios en territorio chileno, Bolivia tiene amplio acceso al océano Pacífico" (3). En Antofagasta y Arica, el almacenamiento de las importaciones bolivianas es gratuito durante un año y el de las exportaciones, durante dos meses.

Daniel Agramont Lechín, director de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia de 2010 a 2012, da un brinco cuando se le mencionan esas ventajas: "Desde 2004, los puertos chilenos de Arica y Antofagasta están privatizados. De esta manera, Chile privatizó, de forma unilateral, sus obligaciones respecto de un tercer país. Esta es la prueba de que Chile actúa como le parece y, por ende, que la cuestión no se puede resolver sin soberanía boliviana".

Un beneficio para la región

A partir de ahora La Paz espera que la CIJ resuelva el diferendo. Álvaro García Linera resume ante nosotros: "Desde la firma del Tratado de 1904, hemos llevado a la práctica todo para encontrar una solución amistosa. Hasta ahora sin resultados. Respetuosos del derecho internacional, confiamos en que la Corte de La Haya nos haga justicia". El vicepresidente bo-

El país andino registra los costos de transporte de mercancías más altos de América del Sur: superan la media del 31%.

Chile, cómplice del imperialismo británico, atacó por sorpresa, al día siguiente del carnaval, para mutilar a su patria. Del lado chileno, los manuales escolares insisten en el deber de defender a los chilenos de Antofagasta a los que un Estado boliviano inestable gravaba con altos impuestos.

En marzo de 2015, Evo Morales anunció que, a partir de ese momento, la lectura de *El libro del mar* pasó a ser obligatoria en los colegios. Gonzalo Chávez Álvarez, profesor de Economía en la Universidad Católica de La Paz, explica: "Desde que somos niños se nos enseña que Chile nos robó nuestro mar. Así pues, importa poco que Chile conceda tal o cual ventaja a nuestras empresas en sus puertos. Lo que quieren los bolivianos es un acceso soberano".

A esta reivindicación de soberanía, Chile replica que, en la práctica, Bolivia dispone de un acceso al Pacífico. En *Mito y realidad*, un documento publicado en junio de 2014 en respuesta a *El libro del mar*, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile alega: "Más del 20% de los países del mundo carecen de litoral. Bolivia es uno de los que gozan de mayores derechos para acceder al mar. En virtud del Tratado de Paz y Amistad de 1904, Chile reconoció a favor de Bolivia y a perpetuidad 'el más amplio y libre derecho

liviano tiene razones para ser optimista: en enero de 2014, después de seis años de proceso, la CIJ le devolvió a Perú una zona marítima anexada por Chile al final de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, Bachelet objetó la competencia de La Haya para juzgar la cuestión. A Bolivia le gustaría convencer a Chile de que ese acceso al mar sería beneficioso para todos. Las audiencias públicas tuvieron lugar en mayo de 2015 y la CIJ el 24 de septiembre de ese año se declaró competente para iniciar el juicio sobre la demanda de La Paz contra Santiago por un acceso al océano Pacífico. A la espera de que la CIJ se expida, Bolivia inició otra demanda contra Chile por el uso de las aguas del río Silala, ya que el gobierno de Morales argumenta que les pertenece al no ser un río internacional. ■

1. Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR), *El libro del mar / The Book of the Sea*, La Paz, 2014, www.diremar.gob.bo
2. *El deber*, Santa Cruz de la Sierra, 6-8-15.

3. "Chile y la aspiración marítima boliviana: mito y realidad", Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, junio de 2014, www.mitoyrealidad.cl

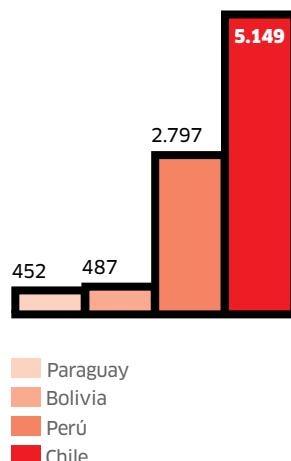
* Periodista.

Traducción: Bárbara Poey Sowerby

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Gasto militar

(en millones de dólares, 2014)



El documento

En 2014 el gobierno boliviano presentó *El libro del mar*. Su autor es el ex presidente y vocero de la Causa Marítima Boliviana Carlos Mesa, quien describe los hechos históricos previos a la Guerra del Pacífico, el Tratado de Paz de 1904 y las negociaciones para recuperar la salida al mar. En 2015 el documento fue declarado oficial y de uso obligatorio en las escuelas.

Intento de desestabilización internacional

Enemigos íntimos

por Hernando Calvo Ospina*

La relación entre Estados Unidos y Bolivia transitó por momentos de calma y otros de gran tensión. Desde la elección de Evo Morales como diputado en 1997 y más aun como Presidente en 2005, la potencia del Norte no duda en instrumentar operaciones desestabilizadoras si entiende que sus intereses son amenazados.



© David Mercado/Reuters/Latinstock

Además de la “zanahoria” económica y el “gran garrote” de la intervención militar, a Estados Unidos no le faltan ideas para contener las veleidades emancipadoras de sus vecinos del Sur. Uno de sus métodos consiste en apoyar las reivindicaciones independentistas de las élites locales cuya “identidad” sería puesta en duda por... las políticas de redistribución de los gobiernos progresistas. Una estrategia utilizada en Nicaragua a principios de los años 1980 (1). Y, más recientemente, en Bolivia.

En diciembre de 2005, Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia. Apoyado por la pequeña burguesía urbana, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) sedujo también a las organizaciones indígenas con una campaña en la que el discurso identitario se llevaba la mejor parte (2). Ahora bien, el Estado plurinacional promovido por el MAS suscitó enseguida una reivindicación inesperada: la de las élites locales que defendían un “separatismo” social” al que el proyecto de nueva Constitución –que “aprueba diferentes niveles de autonomía, indígena, municipal o regional, sin definir su articulación” (3)– le abrió el camino, según ellas. Claro está, todo llevó a Estados Unidos a apoyar un movimiento como ese: de la defensa de las minorías oprimidas... a la posibilidad de desestabilizar a las autoridades bolivianas.

Rápidamente la estrategia estadounidense identificó al departamento de Santa Cruz como un objetivo prioritario: la economía de Bolivia depende de sus recursos naturales (hidrocarburos, oro y hierro, principalmente). Igual de ricos en gas y en tierras fériles, los departamentos de Tarija, Pando y Beni –que, con el de Santa Cruz, constituyen la región que se conoce como la Media Luna– se sumaron pronto a las reivindicaciones de Santa Cruz, cuya capital del mismo nombre se transformó en la sede de la oposición a Morales.

Dos meses después de haber presentado sus credenciales, el 13 de octubre de 2006, el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, entró en contacto con la oposición de la Media Luna. De 1994 a 1996, en el momento de la Guerra de los Balcanes, el diplomático había dirigido las oficinas de Bosnia del Departamento de Estado. Más tarde, de 2004 a 2006, había sido “jefe de misión” en Pristina, Kosovo, donde, según Morales, “apoyó al separatismo de esa región, con miles de muertos como resultado” (4). Semejante pedigree anuncia más que el simple apoyo de los estadounidenses a las organizaciones políticas de la oposición “separatista”.

En Bolivia, “su trabajo no era un secreto

para nadie –afirmó Hugo Moldiz, abogado y director del semanario *La Época*–. Tampoco se escondía. El plan que tenían apuntaba a provocar un estado de ingobernabilidad a partir de acciones violentas y mortales, implicando a las fuerzas armadas y a la policía, y tenía como objetivos la renuncia del Presidente y la llamada a unas elecciones que ganarían los candidatos cooptados por la embajada”.

En septiembre de 2008, grupos paramilitares asesinaron a cerca de treinta campesinos indefensos, antes de tomar el aeropuerto de Beni y campos petroleros de Tarija y Santa Cruz. Sergio Espinal, un oficial retirado, está convencido de que “el modo en el que operaron dejaba traslucir tanto los consejos de expertos extranjeros como la participación de paramilitares colombianos”. Peor aun, “la pasividad de las fuerzas armadas, que incluso se dejaron desarmar en los campos petroleros, demostraba que algunos de sus miembros formaban parte de la maniobra”.

Cercanos a las élites de la Media Luna, los medios de comunicación privados no se quedaron de brazos cruzados: “La prensa reportaba todos estos hechos no para condenarlos, sino para contribuir a un clima de inestabilidad y miedo –recuerda un campesino cocalero que al día de hoy es el coordinador general del Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas de Bolivia, Sabino Mendoza–. El mensaje que transmitía era que si ‘Evo’ no renunciaba podía estallar una guerra, con intervención del ejército de Estados Unidos. Rumores, mentiras y exageraciones apuntaban a sembrar la confusión en las mentes de quienes, como yo, apoyaban al Presidente”.

Vigilancia internacional

A partir de julio de 2007, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue acusada de entregarles fondos a los grupos de oposición. El gobierno había interceptado documentos que hablaban de la necesidad de financiar programas para “re establecer un gobierno democrático”. Un eufemismo muy común, explicaba la socióloga Cristina Guzmán: “Estas organizaciones, directamente o por intermedio de otras agencias, financiaban a varias organizaciones no gubernamentales (ONG), estructuras de la supuesta ‘sociedad civil’ y partidos políticos para que, bajo el estandarte de los derechos humanos, de la libertad de prensa y de empresa, incentivarán la hostilidad hacia el gobierno”.

Durante todo ese tiempo, el despacho de Morales estuvo absurdamente cerca de... una oficina de la Central Intelligence Agency

(CIA), dentro del mismo palacio presidencial (vestigio de una época en la que los gobiernos se preocupaban menos por la soberanía que por las buenas relaciones con Estados Unidos). “¡Era un servicio que estaba a cargo de un general de la policía, llamado Centro de Operaciones Policiales Especiales (COPES), que dependía directamente de la embajada de Estados Unidos!”, precisó Jorge Cuba, director de la Agencia Boliviana de Prensa (ABP).

Constatando que un viento de internacionalismo derechista soplababa sobre las brasas del separatismo local, Morales hizo desmantelar la mencionada oficina. El 3 de noviembre de 2008 anunció además que, por razones de “dignidad nacional”, la Agencia ya no era más bienvenida en Bolivia. El día anterior había expulsado a la organización estadounidense de lucha contra los estupefacientes, la Drug Enforcement Agency (DEA), observando que sus prerrogativas parecían haber sido ampliadas en apoyo a la oposición secessionista de la Media Luna... sin que eso estuviera comprendido en el marco de su misión oficial. Para terminar, el 11 de septiembre de 2008, con una situación extremadamente tensa entre el gobierno y la oposición, el presidente Morales declaró persona *non grata* al embajador de Estados Unidos.

Expulsión del embajador, límites impuestos a la USAID, partida de la CIA y de la DEA: extrañamente, la fiebre separatista dio señales de apaciguamiento. Sin contar que Morales siguió consiguiendo importantes triunfos electorales. Los más radicales abandonaron tranquilamente cualquier reivindicación política y pasaron, sin pestañear, de la supuesta “defensa de la democracia” al proyecto de asesinato. Para ellos había, en efecto, una sola opción: terminar con ese presidente “índio” y con su vicepresidente Alvaro García Linera.

La operación la piloteó el empresario Branco Marinkovic. Hijo de un ustacha (5) croata refugiado en Bolivia, que presidió entonces el Comité pro Santa Cruz (CPSC) (6) y dirigió el Movimiento Nación Camba de Liberación (MNCL), que reclama la independencia de la Media Luna. En la página de internet del MNCL en efecto se puede leer: “Antes que la sangre corra por el río, ¿no sería mejor separarnos como amigos para que cada nación gestione sus propios recursos y resuelva sus propios problemas?”. A pesar de esta propuesta almibarada, Cuba estimó que, para Marinkovic, se trataba de “trasladar a Bolivia el escenario racista, religioso y secessionista de la Guerra de los Balcanes”.

De esa región del mundo, precisamente, Marinkovic hizo viajar a Eduardo Rózsa, que

participó en el conflicto dentro de las fuerzas croatas nacionalistas. Llegó acompañado por Michael Dwyer (irlandés), Arpád Magyari (rumano-húngaro), Elod Toaso (húngaro) y Mario Tadic (croata), casi todos veteranos de la Guerra de los Balcanes. “El plan se desarrollaba perfectamente –contó Cuba–, hasta que un policía –un ‘indie’–, habrían dicho se infiltró en el grupo. El 16 de abril de 2009, la policía llegó al hotel en el que se encontraban y tres de ellos que se negaban a entregarse fueron abatidos, entre ellos Rózsa. Esa noche también murió el último proyecto de división de Bolivia.” En ese contexto, Marinkovic prefirió huir y encontró asilo en Estados Unidos.

Una tela de araña de fundaciones y de ONG se aprovecharía así de su imagen de miembros intocables de la “sociedad civil” para desestabilizar gobiernos. La historiadora ecuatoriana Adriana Villegas no lo dudó: “Todas demostraron, en diferentes situaciones alrededor del mundo, que pueden ser más eficaces que un ejército de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)”.

Testeado en Bolivia, el método también parece haber sido utilizado en Ecuador y en Venezuela. “Más allá de la Media Luna boliviana –analizó Villegas–, se alienta, en Venezuela, a los que desean la independencia del Estado de Zulia –que cuenta con una de las industrias petroleras más importantes del mundo–, y, en Ecuador, a los que tienen el mismo proyecto para la provincia de Guayas, donde se encuentra el puerto principal y centro económico del país. Además, así como Santa Cruz unió a su causa a otros tres departamentos [Beni, Pando y Tarija], el Estado de Zulia obtuvo el apoyo de los de Tajira y Mérida, y, en nuestro país, Guayas obtuvo el de Manabí.” ■

1. Véase Maurice Lemoine, “L'autonomie perdue des Miskitos du Nicaragua”, *Le Monde diplomatique*, París, septiembre de 1997.

2. Los indígenas representan oficialmente el 60% de la población de Bolivia.

3. Franck Poupeau y Hervé Do Alto, “L'indianisme est-il de gauche?”, *Civilisations*, N° 58-1, Bruselas, 2009.

4. *El Mundo*, Madrid, 11-9-2008.

5. Ustacha fue una organización terrorista fundada en 1929 por Ante Pavelić basada en el racismo religioso nacionalista croata que tenía como objetivo independizar Croacia. Fue aliada del nazismo y se vio influenciada por el fascismo italiano.

6. Institución regionalista creada por el departamento de Santa Cruz y muy influenciada por la patronal local.

* Periodista. Autor de *Sur un air de Cuba*, Le Temps de cerises, Pantin, 2005; de *Rhum Bacardi. CIA, Cuba et mondialisation*, EPO, Bruselas, 2000.

Traducción: Aldo Giacometti





La “comunidad internacional” contra la coca

La hoja de la discordia

por Johanna Levy*

La hoja de coca permanece ligada a la cocaína, sus consumidores son identificados como adictos y sus productores como narcotraficantes. A lo largo de los años se han realizado estudios que desmienten esta versión y vinculan a la planta con sus propiedades médicas y nutritivas. Sin embargo su estigmatización avalaría la injerencia de Estados Unidos en los países que la cultivan.

“¿Conoce usted muchas plantas que contengan más calcio que la leche, más hierro que la espinaca y tanto fósforo como el pescado?”. Nieves Mamani es miembro de una de las seis federaciones sindicales del Trópico de Cochabamba, en el Chapare boliviano. Al igual que a cientos de miles de campesinos andinos, el desempleo y la falta de competitividad de otros productos agrícolas la obligaron a hacer de la producción de coca su principal fuente de subsistencia. “Todas nuestras esperanzas están puestas en la posibilidad de comercializarla en todo el mundo –precisa Mamani–. Esto nos brindaría no sólo una seguridad económica, sino también la garantía de no estar más a merced de los narcotraficantes.” Sí, pero... Una vez más, en su informe del 5 de marzo de 2008, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (1) calificó a la coca de “ilícita”, instando nuevamente a “Bolivia y Perú a modificar su legislación nacional para eliminar o prohibir las actividades contrarias a la Convención de 1961, como la masticación de la hoja de coca y la fabricación de mate de coca y otros productos que contienen alcaloides, para el consumo interno o la exportación”. Para el gobierno de Evo Morales, se trató de un revés: desde su llegada al poder en enero de 2006, el Presidente boliviano está muy decidido a demostrar a la “comunidad internacional” que la hoja de coca no es un estupefaciente. Cultivador de coca en Los Yungas, otra gran región productora, Emilio Caero señala con énfasis que la coca no estaría estigmatizada como lo está si los paí-

ses del Norte no la consumieran en forma de clorhidrato de cocaína: “Sin Estados Unidos, la coca no estaría asimilada a una droga. Se paga el precio de una práctica totalmente ajena a nuestra cultura”.

Un prejuicio internacional

Utilizada con fines religiosos y terapéuticos durante miles de años por las civilizaciones incaica y preincaica, la hojita verde (*erythroxylon coca*) se destaca por sus efectos energizantes. Una vez masticada –lo que multiplicaba el rendimiento de la mano de obra indígena sometida a trabajo forzado en las minas–, o consumida como infusión, la coca haría la fortuna de los conquistadores españoles... antes de hacer la de la más célebre bebida del mundo, ¡Coca-Cola!. Pero son fundamentalmente sus propiedades anestésicas y analgésicas las que la llevarán al pináculo de la ciencia médica con el descubrimiento de Albert Niemann del alcaloide cocaína en 1858. Éste representa menos del 1% de los catorce alcaloides que pueden extraerse de la hoja de coca. Así, constituirá el principal medicamento de la farmacopea moderna –utilizado como anestésico local en cirugía oftalmológica, pero también para el tratamiento de enfermedades respiratorias– hasta su reemplazo en 1923 por la molécula sintética. La hoja de coca perdió entonces el favor del mundo occidental. Peor aun. Se la considera responsable de la adicción de millones de consumidores, en todas partes del mundo, al clorhidrato de cocaína, la cocaína. Para los investigadores de la red Transnational →

UN SÍMBOLO DE LUCHA

La planta sagrada

por Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto*

Tempranamente, la coca fue utilizada como energético para maximizar la productividad de los indígenas en la brutal explotación a la que fueron sometidos, especialmente a partir del descubrimiento de las ricas vetas de plata de Potosí en 1545. Sin embargo, en los inicios del período colonial, la hoja de coca era tenida por una invención del demonio, por lo que se la consideraba una hoja diabólica (1). Este juicio se justificaba principalmente por su papel en rituales nativos (los pobladores indígenas creían que sabiéndola usar con propiedad podía traerles suerte y al enemigo calamidades) y se mantuvo hasta que los jesuitas resaltaron sus atributos medicinales y de sustituto nutricional: los mitayos que la mascaban rendían el doble en el trabajo y podían prescindir por varias horas de la ingesta de alimentos.

En el caso andino, esta práctica ancestral derivó en grandes debates acerca de sus efectos, asociados en muchos casos con la “degeneración racial de los indios”. Incluso representantes teóricos del indianismo boliviano condenaron a la coca, como Fausto Reinaga (2), quien la inserta en la matriz de opresión que padecen los pueblos originarios: “La coca que mascan indias e indios es la sustancia que anestesia, que adormece el hambre del indio”.

La valoración y los discursos con relación a la coca –en el ámbito internacional– han variado a lo largo del tiempo al ritmo de los cambios en la estructura social y normativa de las sociedades.

De la “época dorada” –que acompañó el proceso de *laissez-faire* y medicalización de la sociedad desde principios del siglo XIX– se pasó a la prohibición impulsada en Estados Unidos por el movimiento puritano, que inició una cruzada moral contra las drogas llegando a promocionar acuerdos internacionales para regular su producción y comercialización (3).

A partir del 2006 el relato sobre la coca refiere a las tradiciones y es símbolo de lucha. La hoja otrora diabólica es hoy la “hoja sagrada” de los movimientos campesinos e indígenas, a la vez su sustento económico familiar y una de las bases materiales de su accionar político-sindical.

1. Scarlett O’Phelan Godoy, *La gran rebelión en Los Andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari*, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, PetroPerú-CBC, Cusco, 1995.

2. Fausto Reinaga, *La revolución india*, Ediciones PIB, La Paz, 1969.

3. Álvaro Argandoña, *Coca, cocaleros y discursos en Bolivia*, tesis de maestría, inédito, Cochabamba, 2003.

*Historiador y politólogo, respectivamente.

Fragmento del libro: *La revolución de Evo Morales. De la coca al palacio*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.

→ Institute, especializados en el análisis de las políticas globales contra las drogas, la hoja de coca fue víctima de un doble error: la confusión entre sus efectos y los de la cocaína; su asimilación, con la cocaína, al modelo de dependencia física de los opiáceos. Para los expertos del Transnational Institute, la prohibición internacional que pesa sobre el comercio de la hoja de coca es “el fruto de una política injusta, basada en datos científicos erróneos que no expresan más que prejuicios culturales. Traduce un dogmatismo institucional”.

Desde mediados de los años 70, se ha demostrado a través de estudios que la hoja de coca no podía en ningún caso afectar al sistema nervioso (2). Liberada durante la masticación, la poca cocaína contenida en la hoja sería totalmente hidrolizada por el sistema digestivo. Mejor aun. Los beneficios del arbusto fueron, en varias oportunidades, confirmados por análisis científicos. Investigadores de la Universidad de Harvard señalaron, en 1975, que “en términos de nutrición, no existen diferencias entre el uso de la coca y el consumo directo de alimentos”, afirman los autores del informe (3). Además de sus propiedades alimenticias, también pudieron demostrarse sus virtudes terapéuticas y farmacéuticas. Un análisis de tres de sus alcaloides (cocaína, cis-cinamilcocaína y trans-cinamilcocaína), realizado por la Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar (ORSTOM) y laboratorios bolivianos, probaron en efecto que la coca permitía no sólo “adaptarse a la vida en la altura” –estimulando la oxigenación–, sino también regular el metabolismo de la glucosa (4).

Estas características permiten presagiar toda una serie de beneficios para la salud. Sin embargo, el campo de la investigación sigue estando restringido por la condena internacional que pesa sobre el arbusto.

Una proscripción cuestionada

Breve repaso de los hechos. En 1949, a instancias del representante de Perú ante Naciones Unidas, una comisión efectuó una visita relámpago a ese país y a Bolivia para “investigar los efectos de la masticación de la hoja de coca y las posibilidades de limitar su producción y controlar su distribución”. En conclusiones apresuradas, la comisión acusó a la masticación de la coca de causar desnutrición y “efectos indeseables de carácter intelectual y mental” (5) en las poblaciones de las regiones andinas. Considerada además responsable de la pobreza del subcontinente debido a que disminuiría la capacidad de trabajo de dichas poblaciones, la *acculico* (masticación de la coca) continuó siendo calificada sin embargo de “costumbre”. Pero, en 1952, el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó su postura. Concluyó que la *acculico* “tiene todas las características de una adicción” (6), una “forma de cocainomanía” (7).

En lo que concierne a la “comunidad internacional”,

los efectos de la hoja de coca se asimilaron así a los del clorhidrato de cocaína. En 1961, bajo la presión de Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo de cocaína, la hoja de coca fue clasificada por la Convención Única sobre Estupefacientes entre las “plantas psicotrópicas” del Cuadro N°1, es decir, capaces de producir una droga en estado vegetal. Proscripta por todas las instancias internacionales, la hoja de coca no puede desde entonces producirse, industrializarse ni comercializarse. Sólo se permite su uso tradicional en los países donde existen pruebas de su consumo ancestral, como en el caso de Bolivia, Perú y el norte de Argentina. Sin embargo, dos importantes actores escapan a la regla general y se encuentran curiosamente protegidos: la industria farmacéutica estadounidense –para producir cocaína para uso médico– y la célebre empresa Coca-Cola. Mientras se asocia a la planta andina con la cocaína, a sus consumidores con toxicómanos, y a sus productores, pronto, con narcoterroristas, la “comunidad internacional” le declara la guerra. En todas partes los países productores implementan políticas de erradicación forzada. Mientras que el mercado multimillonario de la cocaína sigue haciendo la fortuna del extranjero, las principales víctimas de esta política son los pequeños productores andinos. Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por laboratorios independientes son ignorados. Los diferentes pedidos de revisión del estatuto de la hoja de coca presentados por los gobiernos boliviano y peruano fracasaron. Única evaluación realizada hasta el momento, el informe de 1950 sigue siendo el criterio de referencia de Naciones Unidas. Una esperanza nació sin embargo en los años 90 con el lanzamiento por parte de la OMS de un programa ambicioso, conjuntamente con el Instituto Interregional de Naciones Unidas para la Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI): el “Proyecto Cocaína OMS/UNICRI”. Con cuatro años de trabajo, cuarenta y cinco investigadores internacionales asociados, diecinueve países estudiados en los cinco continentes, se trata del mayor estudio jamás realizado sobre el tema. Señalando los beneficios para la salud humana del uso tradicional de la hoja de coca y preconizando la realización de nuevas investigaciones sobre sus propiedades terapéuticas, el informe causó un escándalo durante la 48^a Asamblea Mundial de la Salud reunida en Ginebra en 1995. Acusando al estudio de “defender la cocaína argumentando que la utilización de hoja de coca no producía daños perceptibles en la salud física o mental”, Neil A. Boyer, representante de Estados Unidos ante la OMS, amenazó con suspender el apoyo financiero de su gobierno si se adoptaban oficialmente las conclusiones del informe. Éste fue enterrado de inmediato.

Estrategia para la intervención

Para los países andinos, esta clasificación tendrá consecuencias funestas. Los años 90 se caracterizaron en efecto por la aplicación de políticas de erradicación cada vez más represivas. En 1998, la Asamblea

General de Naciones Unidas se reunió con el propósito de endurecer la “guerra contra las drogas”. Bajo la presión de Washington, aprobó el “Plan Dignidad” puesto en marcha por Bolivia. Con el lema “coca cero”, este plan se tradujo en la erradicación forzada y sin compensación de los cultivos de coca. El mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó el “proyecto de eliminación de la droga en el Hemisferio Occidental”, que incluía un presupuesto de 23 millones de dólares para mejorar la eficacia de los herbicidas utilizados en dicho país, con el fin de erradicar la coca. Se probaron nuevos microherbicidas, a pesar de los riesgos para el medio ambiente y la salud humana. No debe olvidarse que en Bolivia el cultivo ilegal, destinado al narcotráfico, se convirtió en una estrategia de supervivencia en períodos de ajustes estructurales. En Bolivia, durante ese período, los enfrentamientos se volvieron cotidianos. En el Chapare no se hizo ninguna distinción entre el traficante de cocaína y el campesino. “¡Viva la coca, mueran los yanquis!”, se convirtió en el grito de guerra de los pequeños productores. Sin impacto en el mercado mundial de la cocaína, la estrategia de lucha contra el narcotráfico preconizada por las organizaciones internacionales aceleró en efecto la construcción de la más poderosa organización sindical del país, las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba. En 2005, el movimiento llevó a su dirigente Evo Morales a la Presidencia. Es en él en quien descansa la dura tarea de convencer a Naciones Unidas de revisar el estatuto de la hoja verde de los Andes. El “Proyecto Cocaína OMS/UNICRI” sigue presente en la memoria. Pero convencer al gobierno estadounidense de la validez de la gestión boliviana no será fácil. Para Jorge Alvarado, responsable de la misión diplomática boliviana en Venezuela, la explicación es sencilla: “Mantener la exigencia en términos de reducción de los cultivos y sostener que nuestro gobierno contribuye con la producción de estupefacientes permite al gobierno de Estados Unidos seguir interviniendo políticamente en nuestros asuntos internos”. ■

1. Órgano de control casi judicial encargado de supervisar la aplicación de los tratados internacionales sobre el control de drogas. www.incb.org/incb/fr/annual-report-2007.html

2. *Drogas y conflicto*, N°13, Transnational Institute, Amsterdam, mayo de 2006.

3. Véase Timothy Plowman y Andrew Weil, “Coca Pests and Pesticides”, *Journal of Ethnopharmacology*, 1979.

4. E. Cáceres, R. Favier y L. Guillon (bajo la dirección de), “Coca chewing for exercise: hormonal and metabolic responses of nonhabitual chewers”, *Journal of Applied Physiology*, Vol. 81, N° 5, noviembre de 1996.

5. www.unodc.org/unodc/en/bulletin/bulletin_1950-01-01_4-page005.html

6. OMS, *Technical Report Series 57*, marzo de 1952, www.who.int/es/

7. OMS, *Technical Report Series 76*, marzo de 1954, www.who.int/es/

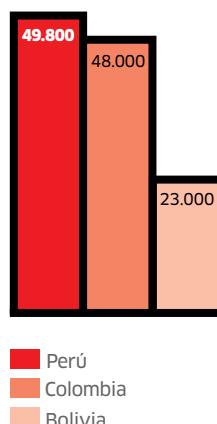
* Periodista, Caracas.

Traducción: Gustavo Recalde

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Cultivo ilegal de arbustos de coca

(hectáreas, 2013)





4

Lo vivido, lo pensado,
lo imaginado

IMAGINAR DESDE LA DIVERSIDAD

Bien lejos del estereotipo de las visiones eurocéntricas, Bolivia cuenta con una producción cultural rica en sus diferencias. La literatura primero y el cine después han retratado a la sociedad desde puntos de vista que expresan la compleja trama de su cultura. Los artistas bolivianos se nutren de las tensiones y de una multiculturalidad donde se cruzan los pueblos originarios y la burguesía tradicional.





El imaginario social en la pantalla grande

La realidad plural en el séptimo arte

por Rodrigo Ayala Bluske*

Las transformaciones sociales e identitarias que vive Bolivia no sólo son visibles en su cotidianidad sino que son reflejadas en sus productos culturales. El autor, cineasta boliviano, analiza en este artículo el fenómeno pluricultural a lo largo de la historia cinematográfica del país del Altiplano.

Bolivia es un país que hasta hace dos o tres décadas se pensaba fundamentalmente en clave de “clase” y que a partir de la crisis constituyente de los primeros años de este siglo intenta entenderse en términos de “cultura”, especialmente de “cultura originaria” (1).

El “clasismo” (enarbolado con características propias por el marxismo y el nacionalismo) marcó a fuego a la mayor parte de los teóricos y pensadores del siglo XX, hasta que el proceso constituyente que alcanzó su punto culminante con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009 terminó de poner en la mesa la plurinacionalidad, de la mano de actores que habían jugado un rol secundario en la democracia boliviana. Así surgieron nuevas y agresivas clases medias de rostro cobrizo, dispuestas en muchos casos a constituir nuevos círculos empresariales y así surgió también lo “indígena originario-campesino”, un ente sujeto a diversas contradicciones e interpretaciones de acuerdo al caso, pero dotado de un protagonismo del que careció en toda nuestra vida colonial y republicana.

La Bolivia de hoy ha dado un salto cualitativo al reconocer a las culturas nativas un rol oficial en su conducción (e incorporar a algunos de sus actores a los centros últimos de decisión política y económica). Pero a su vez, ese “sinceramiento” ha abierto diversos interrogantes. ¿Cuál será finalmente la mecánica de poder entre los pueblos mayoritarios de lengua materna aymara y quechua y la élite mestiza-blancocatólica tradicional? ¿Finalmente su relación estará determinada por la reivindicación étnica o más bien por la

mecánica de clase? En ese contexto, ¿qué ha ocurrido con las formaciones culturales criollas, especialmente la “camba” y la “chapaca” en las que la mayor parte de la población, incluyendo la campesina, tiene como lengua materna el castellano?

Lo “pluri” de la realidad boliviana alude hoy a un país en el que las diversas formaciones culturales y los modos de producción diversos que se dan en su seno (capitalismo moderno, producción comunitaria, etc.), se implican de diferentes maneras.

Para nuestro caso, la pluralidad implica una realidad de difícil “reinterpretación”. En este artículo intentaremos reseñar algunos de los aspectos clave respecto a la evolución del rol de las formaciones culturales y su lugar en el nuevo escenario político-social boliviano y enumeraremos los hitos de nuestro cine que, creemos, han reflejado la evolución de la conciencia del país respecto “a sí mismo”, a su identidad y a la forma como ésta se ha ido complejizando.

El cine bajo la sombra del indio

La encomienda y el trabajo en las minas han sido las formas centrales de explotación económica que se han desarrollado en el Altiplano boliviano en los últimos 500 años. Durante la Colonia, en la medida en que el Cerro Rico surtía de plata a la corona española, el territorio del Alto Perú, y con él las comunidades indígenas que se encontraban en su seno, iban distribuyéndose entre los recién llegados.

Se impuso a las estructuras sociales existentes en el incario una suerte de “pacto de reciprocidad”, obligado. Hasta cierto punto les permitió conser-

PROTAGONISTA DE LA RESISTENCIA

La voz de “Domitila”

Es raro que le permitan hablar a una mujer del pueblo, que lucha por el pan cotidiano, se poetiza y adquiere la envergadura de un líder popular. El libro “*Si me permiten hablar*” (1) se convirtió en una suerte de *Germinal* (2) (una novela sobre una huelga de mineros en el norte de Francia en la década de 1860) del Tercer Mundo.

La vida de Domitila Barrios –que se casa con Chungara– se confunde desde hace quince años con la lucha de los mineros bolivianos. Era natural que el cineasta Jorge Sanjinés le pida que represente su propio papel en la película *El coraje del pueblo*. En la mina son a menudo las mujeres las que deciden el comienzo de la huelga, cuando no hay nada de comer y la pulperia se niega a darles crédito. Y no son las últimas en enfrentar a la policía y al ejército. Domitila –que una vez abortó bajo la tortura y echó al mundo a un niño que murió antes de nacer, intoxicado por los gases lanzados en el interior de los pozos de la mina– sabe algo de esto. En 1978, Domitila tuvo una participación decisiva en la organización de la huelga de hambre que obligó a retroceder a la dictadura militar del general Hugo Banzer.

Pero su testimonio adquiere una dimensión suplementaria cuando cuenta su experiencia en el foro del Año Internacional de la Mujer, en México, en 1975. Como una cineasta hizo que la invitaran a pesar de la oposición del gobierno boliviano, allí se enfrentó con las feministas norteamericanas: sin subestimar al machismo, ella consideraba que el enemigo principal era el sistema. Enfrentar al hombre sí, pero para conseguir poder luchar como él.

En este libro, ¿cuál es la función de Moema Viezzzer, periodista brasileña que durante semanas siguió a Domitila para recoger este testimonio irreemplazable? Basta con haberla oído en un mitin sindical, haberla visto presidir una sesión de los derechos del hombre en Siglo XX, donde reside. No hay lugar a dudas: ella habla como su libro.

→ var sus formas orgánicas básicas, a cambio de una compensación monetaria: el tributo indígena. De esa manera surgió una sociedad parasitaria. Sin embargo, es gracias a ese pacto que la encomienda primero y la hacienda feudal después dieron “refugio” a la comunidad indígena, el lugar en que se conservaron las culturas nativas mayoritarias del Altiplano boliviano.

En el siglo XX, el de la mina y el de la hacienda son los dos mundos de explotados que conviven juntos. Y mientras en uno de ellos se desarrolla el marxismo como ideología política, en el otro perviven los elementos centrales de las culturas originarias.

A partir del “boom” del estaño, el “proletariado minero” boliviano se convirtió en una fuerza decisiva en el universo político-social del país. ¿Por qué los mineros bolivianos cuyas lenguas maternas eran el aymara y el quechua no hicieron suya la reivindicación étnico-cultural? Las asambleas de mineros, los documentos que aprobaban y sus acciones políticosindicales se realizaban en castellano, pero la familia, la comunidad, se desenvolvía en el idioma nativo.

Se trata de un caso que muestra el “poder de la ideología”. El marxismo, y especialmente el trotskismo, marcaron a fuego la vida sindical minera y lograron que los obreros bolivianos se miraran en clave de clase. En 1952, en gran medida gracias a su labor ideológica, se produjo la “primera revolución proletaria” de América Latina, (2) pero fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el que se hizo del poder dotándola de su propio contenido. Para los unos el enemigo era la burguesía, para los otros la “antinación”, lo cierto es que en las construcciones políticas bolivianas del siglo XX, por lo menos en sus primeras ocho décadas, casi no encuentran espacio las reivindicaciones étnico-culturales.

No ocurrió lo mismo en la vida social y en las artes. La minoría blancoide-mestiza nunca pudo susstraerse de la figura del “indio”, cuya presencia en el imaginario social era desbordante. Los pensadores cumbre de la “feudal-burguesía” (3) articularon sus lógicas (muchas veces en forma contradictoria), tratando de encontrar un sentido, una justificación a su postura de clase frente a esa realidad deformada, heredera de la imposición colonial.

No es casual entonces que en el nacimiento de nuestro cine la figura del indio fuera omnipresente. *Corazón aymara* (1925), del italiano Pedro Sambarino está considerado como el primer largometraje boliviano. *La profecía del lago* (1925), de José María Velasco Maidana, y *La gloria de la raza*, de Arturo Posnasky (1926), le siguieron. En 1930 el mismo Velasco Maidana produjo *Wara Wara*.

En las películas mencionadas se encuentran algunas de las vetas fundamentales en el tratamiento de la temática; *Corazón aymara* (4) (en la que se narra la historia de la esposa de un indígena acosada por un mayordomo y condenada injustamente) contempla una de las preocupaciones fundamentales de la época: la “relación” que se da entre “cholos-mestizos” e

1. “*Si me permiten hablar*”. *Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia*, Moema Viezzzer, México, Siglo XXI Editores, 1978.

2. *Germinal*, Émile Zola, España, Alianza Editorial, 2013.



“¿Quién mató a la llamita blanca?”. El film dirigido por Rodrigo Bellott, estrenado en 2006, cuenta en clave de comedia la historia de “Los Tortolitos”, una pareja que debe transportar cocaína desde El Alto hasta la frontera con Brasil.

indios. Esa tendencia, tan bien expresada en el ensayo *Pueblo enfermo* del escritor boliviano Alcides Arguedas, refleja la hostilidad hacia el estamento social inferior más cercano a la élite: el cholo. *La profecía...* cuenta una historia de amor entre una señora de alta sociedad y un indígena, lo que motivó su prohibición. *La gloria de la raza* hacía una revisión de las culturas precolombinas y *Wara Wara* narró la relación entre una princesa indígena y un capitán español.

Una veintena de años después, en el contexto de la Revolución Nacional, el cine vuelve a dar un salto en la temática. *Vuelve Sebastiana* (1953), de Jorge Ruiz, es uno de los escalones más altos en la construcción de una obra reivindicadora de la identidad indígena. La película narra la incursión de una niña chipaya en el mundo de los aymaras que, a pesar del entusiasmo que le genera conocer un entorno social más avanzado, finalmente decide volver a sus raíces. En esta película la temática deja el terreno de lo general, de la postal histórica, para introducirse en una realidad concreta. Ruiz reivindica la identidad en la relación entre las dos etnias e insinúa la complejidad del entorno multicultural.

La fuerza de la ideología

Sin embargo es en la obra de Jorge Sanjinés donde la ideología se da la mano con la reivindicación cultural. Su primer largometraje, *Ukamau* (1966), probablemente la obra más importante del cine boliviano, no es un film explícitamente político; narra una historia de venganza de un indígena hacia un cholo, y su grandeza deriva de la descripción que realiza del carácter del protagonista y su integración con el entor-

no natural. En ese sentido, si bien inaugura la obra del director, en realidad es la culminación de la tradición de recreación indigenista que venía desde los primeros largometrajes de nuestro cine

En su siguiente película, *Yawar Mallku* (1969), Sanjinés avanza hacia un cine de denuncia enmarcado en el pensamiento de la izquierda de la época. Ahí es donde la reivindicación cultural se da la mano con la ideología de izquierda. La trama narra las acciones de esterilización masiva en una comunidad indígena. Se trata de una toma de posición antiimperialista. Posteriormente, en *El coraje del pueblo* (1971), Sanjinés reconstruye una masacre minera.

Más adelante, en *La nación clandestina* (1989), el director se aproxima nuevamente al universo indígena, narrando una historia de redención: un comunario que ha servido a las dictaduras y expulsado de su comunidad, vuelve y baila hasta la muerte en un ritual ancestral. Se trata una reivindicación de lo comunitario y una valorización de la ética en un momento en el que la “democracia pactada” (5) se salpicaba de denuncias de corrupción.

En busca de la complejidad

Hasta no hace más de dos o tres décadas la imagen de Bolivia estaba estrechamente asociada al Altiplano, lo que demuestra la vitalidad de las estructuras económicas que se asentaban en su seno (hacienda, mina). Las llamas, el lago Titicaca, la imagen de indígenas de la zona, parecían resumir la identidad nacional, a pesar de que la mayor parte del territorio está constituido por llanos y valles.

Tras conquistar el poder en 1952, el MNR se →

Día del cine boliviano

Desde el 2007, el 21 de marzo es el día del cine de ese país en memoria del asesinato, a manos de grupos paramilitares en 1980, del español Luis Espinal, quien desde su lugar de cura jesuita, periodista y cineasta denunció los abusos a los derechos humanos y luchó por la libertad e igualdad de los pueblos en Bolivia. Espinal colaboró en la película *Chuquiago* y dirigió el semanario *Aquí*.



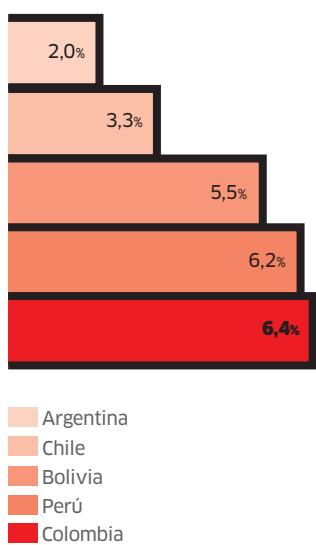
Zona Sur. Película premiada en 2010 en el Festival de Sundance.



El siku. Este instrumento es originario de la zona andina y su nombre en aymara significa “preguntar”, ya que la técnica de ejecución responde a una estructura de diálogo.

Tasa de analfabetismo

(porcentaje de personas de 15 años o más, años 2011-2013)



→ propuso estructurar la “nación boliviana”, incorporando los valles y los llanos del Oriente al manejo efectivo del país; de esa manera se estructuró el “eje central” formado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La apuesta de la Revolución Nacional fue el mestizaje. La tierra se entregó a los indígenas, pero pretendiendo convertirlos en propietarios individuales, “campesinos”, los que a su vez se agruparon en “sindicatos” agrarios. En la mayor parte de los casos se impuso la propiedad individual, pero no se pudo destruir por completo la propiedad “comunal” y menos la acción político-orgánica de la comunidad, uno de cuyos ejes aglutinantes es la identidad cultural.

En general, la revolución produjo una reestructuración profunda; se formó una burguesía nacional (débil pero burguesía al fin), y se comenzaron a formar nuevas clases medias, en muchos casos provenientes del segmento “campesino” de lengua materna nativa.

Otro de los efectos del proceso integrador fue visibilizar las formaciones culturales “criollas” de Bolivia. En los llanos bolivianos y en el valle central de Tarija no existieron estructuras indígenas tan fuertes como las de los quechuas y aymaras, por tanto la poca población de los pueblos originarios permitió el desarrollo de formaciones culturales que tienen el castellano como lengua materna tanto en el campo como en la ciudad.

Ladinámica formación de las estructuras culturales en estos lugares parece haber sido similar: antes del 52 las élites criollas de los hacendados se diferenciaban de los campesinos y utilizaban términos discriminatorios para referirse a ellos: “cambas”, en el caso de Santa Cruz

y “chapacos” en el caso de Tarija. Luego de la revolución, las élites criollas, por la destrucción de la hacienda y ante la necesidad de diferenciarse del resto del país (tener una bandera ideológica para expresar los intereses regionales frente al Estado Nacional), asumieron las formas culturales de sus subordinados y las convirtieron (por lo menos formalmente) en patrimonio del conjunto social. De esa manera, hoy lo “camba” (en Santa Cruz) y lo “chapaco” (en Tarija) se han convertido en la expresión de identidad de esas formaciones culturales criollas.

Entrada la década del 70 aparece un cine que busca, de una manera u otra, describir la complejidad social y regional de ese país emergente de los cambios que propuso el 52.

Chuquiago (1977), de Antonio Eguino, es el equivalente de *Ukamau* en el ámbito urbano. Su director describe la ciudad de La Paz y para hacerlo recurre a la estructuración clasista. La película se arma narrativamente en base a los espacios geográficos de la ciudad. De esa manera un niño indígena migrante (Isico), un mestizo en busca de ascenso social (Jhony), un “clase mediero” blanco (Carloncho) y una “niña bien” (Patricia), retratan el universo social paceño. Con *Chuquiago* el cine boliviano se plantea la descripción de mundos, que en los años anteriores habían sido mediatizados por el empuje del cine reivindicativo, centrado sobre todo en la acción de mineros e indígenas.

Si *Chuquiago* describe la conformación social de la ciudad, *Mí socio* (1982), de Paolo Agazzi, expresa la “vertebración del país”. La cinta refleja el viejo sueño de los artífices del 52; el Occidente y el Oriente unidos, en este caso por una “road movie”. Los protagonistas son un colla y un camba que después de una antipatía inicial, aprenden a conocerse y finalmente estimarse. El “colla” algo renegón, el “camba” joven e inquieto, se convierten en “socios”, dibujando el país deseado.

La pluralidad al asalto

La reforma agraria que destruyó la hacienda feudal en Bolivia tuvo por lo menos un efecto no contemplado en las intenciones de sus impulsores: el surgimiento de las ideologías indianistas y kataristas contrarias al espíritu del mestizaje que propugnaban los naciona-listas. De manera lenta se inició el debate respecto a la reivindicación étnica. Los campesinos, una vez libres de la hacienda y dotados de sus propios organismos político-sindicales, consiguieron una libertad de la que habían carecido desde la colonización.

La revolución del 52 liberó a los indígenas de la hacienda, pero no los incorporó a los mecanismos de decisión política y económica del país. A efectos prácticos los bolivianos de lengua materna indígena se convirtieron en ciudadanos, pero de segunda categoría.

El proceso constituyente (de 2003 a la fecha), denominado “Proceso de Cambio” por el MAS y los movimientos sociales, que han sido sus principales actores políticos, tuvo la virtud de culminar con el proceso

de inclusión de los ciudadanos de lengua materna no castellana (especialmente aymaras y quechua) a los círculos últimos de decisión política y económica. Pero de ahí en adelante queda el interrogante sobre cómo se desarrollará la relación entre las clases medias y las élites "mestizadas" del Occidente boliviano (de lengua materna castellana) y sus poblaciones (mayoritarias) de lengua materna quechua y aymara (una parte de las cuales surge estructurada en nuevas y agresivas clases medias), y entre las élites de "cultura criolla" del Oriente y el Sur y, a su vez, sus respectivos movimientos sociales, así como los pueblos indígenas minoritarios que se desenvuelven en esos territorios.

El "colla" que pronuncia con dificultad el castellano, el "camba" algo flojo, el "chapaco" lento y aficionado a la guitarra, son los tipos centrales que pueblan el imaginario boliviano. Tradicionalmente fueron el teatro popular (en La Paz) y luego el café concert (en Cochabamba y Santa Cruz), los que mediante el humor retrataron el relacionamiento de estas representaciones. Recrear estos tipos presupone riesgos (caer en el lugar común, discriminar, etc.), pero también significa saldar cuentas con años de relaciones tensas y prejuicios (el "colla" centralista, el "camba" sepa-

sin sinuosa como se ha desarrollado la relación económica y de poder entre ellos. La casa de la familia de los aristócratas es comprada por los nuevos ricos de lengua materna indígena. "Isico" o por lo menos "Jhonny", han comprado la casa de "Patricia".

En *Ivy Maraey*, un intelectual confronta sus inquietudes existenciales frente a la realidad de los guaraníes. Se trata de un esfuerzo por confrontar la conciencia individual (representativa de una clase, de una cultura?) frente a una realidad colectiva. El problema de fondo, sin embargo, está en la capacidad para narrar la realidad en su verdadera complejidad más allá de las simplificaciones. En una de las escenas clave los criollos en una fiesta desprecian a los indígenas; esto puede interpretarse como una descripción de determinada realidad histórica, pero lo cierto es que en la Bolivia actual, la del "Proceso de Cambio", la situación hubiera sido completamente distinta. Es muy probable, por ejemplo, que los criollos hubieran agasajado a los guaraníes, invitándolos a su fiesta, a fin de poder afiliarse a su TCO (6) y así establecer una alianza que les permitiera compartir determinados beneficios (compensaciones petroleras, bonos, representación política, etc.). No se trata de

El padre de la novela

El escritor Alcides Arguedas es considerado el creador de la novela boliviana y uno de los representantes más importantes del indigenismo latinoamericano. Entre sus obras se encuentran: *Wara Wara* (1904), *Pueblo enfermo* (1909) y *Raza de bronce* (1919).

Uno de los retos pendientes del cine boliviano es narrar los cambios que se han producido en el último decenio.

ratista, etc.). El cine tardó, pero finalmente se abocó a ello mediante la comedia, bebiendo de las formas artísticas anteriormente mencionadas.

Sena Quina (2005) de Paolo Agazzi y *¿Quién mató a la llamita blanca?* (2006) de Rodrigo Bellott muestran la interrelación entre los tipos regionales. En la primera, dos estafadores (cambay colla) tratan de embauchar a un chapaco y finalmente los tres terminan amigándose. En *¿Quién mató a la llamita blanca?*, dos policías, un camba y un colla, persiguen a dos delincuentes, cuyo jefe es en realidad un gringo. Esta última tiene la virtud, además, de ironizar sobre algunos temas centrales de la Bolivia contemporánea: la droga, la corrupción, etc. Si *Mi socio*, en los 80, "presentaba" la diversidad nacional, veinte años después estas cintas la problematizan y profundizan en ella.

Uno de los retos pendientes del cine boliviano es narrar los cambios que se han producido en el último decenio. No es fácil, cuando aún la sociedad no ha terminado de leer la naturaleza exacta de los mismos. El cineasta que más se ha aproximado a dicho propósito es Juan Carlos Valdivia, con dos cintas: *Zona Sur* e *Ivy Maraey*.

Zona Sur es de alguna manera la continuidad conceptual de *Chuquiago*. Al igual que en la última, la caracterización de la clase social descrita parte de su ubicación geográfica en la ciudad de La Paz. En *Chuquiago* se describía a los estamentos, en *Zona Sur* se

que en la nueva Bolivia no haya racismo o no existan tensiones interculturales, lo que ocurre es que estos fenómenos adoptan diversas modalidades (el racista fácilmente puede ser padrino del discriminado y viceversa) y en general el discurso de lo "políticamente correcto" camufla los diversos enfrentamientos.

Bolivia es un país al cual todavía le falta determinar el carácter definitivo del "cambio" que viene sufriendo en la última década. Claramente, la grandeza de su cine dependerá de los caminos que descubra para describir dicha complejidad.

1. La Constitución Política del Estado de Bolivia promulgada en 2009 denomina a Bolivia un "Estado Plurinacional".

2. En la revolución del 52, los mineros aliados con la policía destruyeron en las calles al ejército boliviano. Se formó el gobierno MNR-COB, de coalición entre este partido político y los sindicatos.

3. Feudal-burguesía, porque estaba formada por una combinación de industriales mineros y hacendados.

4. Las copias tanto de *Corazón aymara* como de *La profecía del lago* y *La gloria de la raza* han desaparecido, aunque existen reseñas y testimonios sobre su contenido.

5. Período de gobierno que va de 1985 a 2003, caracterizado por diversos acuerdos de gobernabilidad.

6. Territorio Comunitario de Origen, reconocido por el Estado como espacio territorial de propiedad colectiva de pueblos originarios.

* Antropólogo y cineasta. Ha escrito diversos trabajos de análisis político. Ha realizado la trilogía compuesta por las películas *Día de Boda*, *Historias de Vino*, *Singani* y *Alcoba* y *La Huerta* en la que describe, en tono de comedia, la clase media tradicional de la ciudad de Tarija.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

300 mil

espectadores

tuvo el film *La nación clandestina* (1989) dirigido por Jorge Sanjinés. Esta película fue remasterizada en 2014 por el INCAA.

Mitos y usos de una deidad andina

El enigma de la madre Tierra

por Renaud Lambert*

La Pachamama suele ser asociada a la figura de una madre que pone límites y castiga a los hombres causando catástrofes naturales cuando no es protegida. La creencia en esta divinidad ancestral es utilizada por las ONG y las empresas de turismo para hacer más atractiva la cultura del país andino.



© David Mercado/Reuters/Latinstock

En enero de 2006, Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia y agradeció a la Pachamama por su victoria. ¿Pachamama? “La ‘madre Tierra’ entre los indios de América Latina”, explica complacido el presidente Morales. Desde hace algunos años, su nombre aparece con más frecuencia en la prensa, en las publicaciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) o en la literatura ecologista y antiglobalista. Para *Libération*, el término resume el tenor de los debates de la XI Universidad de Verano de la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y para la Ayuda Ciudadana (2010). *Pachamama* es también el título que el director de los Verdes, Patrick Farbiaz, dio a su revista, dedicada a la ecología política.

Mientras que las amenazas ligadas al cambio climático pasaron del estatus de hipótesis al de evidencia, la divinidad andina se impuso como encarnación de la Tierra que alimenta, a la que ahora hay que proteger de la agresión humana. Ahora bien, quien dice “Pachamama” dice necesariamente “poblaciones indígenas que viven en armonía con ella”.

La corriente ecologista dominante, lo mismo que los gobiernos de las grandes potencias (tanto industriales como emergentes) se interesan en la noción de “desarrollo sustentable” que reintegra, en el discurso de aquellos, la relación hombre-naturaleza. Según los investigadores argentinos Diego Domínguez y Daniela Mariotti, esta búsqueda de modelos de interacción armoniosa conduce a identificar “al indígena como ‘ecologista natural’” (1). Supervivencia local de una época en que, según el ecologista franco-británico Edward Goldsmith, “todo el mundo, en todas partes, sabía vivir en armonía con el mundo natural” (2). Visto desde el Norte, la Pachamama nos invitaría, pues, a redescubrir nuestra propia sabiduría ancestral, olvidada. ¿Y qué sucede del lado de los indios?

La etnóloga Antoinette Molinié observa que en América Latina, “hace apenas treinta años, se hablaba muy poco de la Pachamama” (3). Además, en los Andes, la “Pachamama” tradicionalmente nombra a una divinidad que provoca tanto la sequía como la fertilidad, que es a la vez amenazante y ávida de sacrificios humanos. ¿Una “madre” un poco ruda? Para nada: la etimología de la palabra no remite ni a la noción de tierra ni a la de madre. “‘Pacha’ marca un campo semántico amplio que incluye los ciclos del tiempo, del espacio y de la tierra, y ‘mama’ envía a la noción de autoridad, que no es específicamente femenina”, explica el sociólogo Franck Poupeau (4). La imagen europea de la Pachamama llegó de todos modos hasta América Latina.

Desde el prisma europeo

Nada indica una permeabilidad particular de las comunidades tradicionales rurales a esas enseñanzas. Sin embargo, este tipo de iniciativas favorecen el desarrollo de conceptos –“armonía ancestral”, “auténticidad cultural”– que son el eco de los elaborados por la industria del turismo y las grandes ONG. Una situación que conduce a veces a ofrecer a los observadores europeos lo que ellos vinieron a observar. Como el “mercado de las brujas” de la capital boliviana, La Paz, por ejemplo. En estos puestos, cualquiera puede proveerse de fetos de llama para ofrecerlos a la Pachamama. La operación, que es una muestra cotidiana de espiritualidad, permite hoy “asegurarse la prosperidad y la protección de la Pachamama” (según la *Guide du routard*). Sin embargo, a fines de los años noventa, esta ofrenda caracterizaba un “pedido urgente para una causa desesperada”, recuerdan Molinié y Jacques Galinier. No estaba dirigida a una Pachamama continentalizada, sino a divinidades locales, asociadas a tal o cual cima montañosa. Para obtener el precioso feto, “era necesario movilizar a las relaciones familiares” y, a menudo, esperar. Ahora, cuentan los dos antropólogos, los stands de los médicos tradicionales exhiben fetos a granel. “Se marcan las nuevas entregas y se las presenta, para más publicidad, rodeadas de cóndores desecados, que nunca tuvieron función alguna en las ofrendas rituales” (5).

Cualquiera sea la modalidad, la irrupción de la Pachamama en la realidad latinoamericana es ahora indiscutible. ¿Da cuenta, sin embargo, de la idea según la cual “el indígena” sería el “ecologista natural” que algunos han identificado? Sin duda alguna, teniendo en cuenta la Declaración Final de la II Cumbre Continental de los Pueblos y Naciones Indígenas (julio de 2004): “Nuestros antepasados nos enseñaron a amar y a venerar a nuestra fecunda Pachamama, a vivir en armonía y en libertad con las especies naturales y espirituales que coexisten en su seno”.

“Rechazamos [...] todo plan de prospección o de explotación de minerales y de hidrocarburos”, prosigue la declaración. Sin embargo Humberto Cholango, indio también él, declara en nombre de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quechua del Ecuador, que la lucha de los indios para la reapropiación de la tierra, del agua o de los hidrocarburos “apunta a que los recursos naturales sean nacionalizados y que beneficien a millones de ecuatorianos; no únicamente a una camarilla de familias y de empresas transnacionales”.

La lucha de los indígenas por la posesión de la tierra, ¿no sería pues necesariamente sinóni-

mo de lucha por la madre Tierra? ¿Su defensa de los recursos naturales nacionales no es siempre equivalente a la de una Pachamama inmaculada?

La reinvencción del relato

En Bolivia la celebración de la Pachamama coexiste con otras reivindicaciones. Sostenidas por poderosos movimientos populares –identificados o no como “indios”–, estas reivindicaciones participaron de la conducción al poder de dirigentes que prometían, entre otras cosas, nacionalizar los recursos naturales a fin de luchar contra la pobreza.

Ahora bien, la tarea no es simple y, a veces, parece más fácil “defender a los indios” haciendo suyo un discurso cosmogónico que atacando el modelo socioeconómico al que se oponen. En una alocución pronunciada el 20 de abril de 2010, el ministro de Asuntos Extranjeros boliviano –indio– David Choquehuanca, defendía la concepción indígena del mundo: “Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, [...] El hombre viene último”. Una semana más tarde, aceptaba la proposición del grupo Bolloré de explotar las reservas de litio de Bolivia, porque el industrial francés prometió (sin reírse) trabajar “en armonía con la Pachamama” (6).

Según Domínguez y Mariotti, la influencia de las ONG, por otra parte, puede conducir a los movimientos populares indios a absorber progresivamente una terminología concebida por la ecología dominante –a riesgo de reducir el alcance político y social de sus reivindicaciones–. Con lo cual, la “pachamamización” de los discursos progresistas. Un fenómeno que no constituye, después de todo, sino el último avatar en una búsqueda del “buen salvaje” latinoamericano que ya tiene varios siglos.

En las naciones andinas, la figura del “indígena” aparece en el siglo XIX. Durante la independencia, algunas élites buscan un grupo social a partir del cual “construir” las nuevas naciones. Estos dirigentes políticos que casi siempre son blancos rechazan a la vez a los europeos, de los cuales tratan de emanciparse, y a los indios, poseedores de la legitimidad territorial, pero de los cuales nadie desea realmente poner en duda el estatus de dominados despreciables.

Remontarse a las civilizaciones precolombinas permite a los fundadores de las nuevas repúblicas no cambiar nada del orden social pero identificar al mismo tiempo una autoctonía ideal, caracterizada por la sabiduría y la armonía. Pronto, “no hablan [más] de indios, seres reales así llamados con desprecio, sino de ‘indígenas’, término desociologizado, purificado de su contenido peyorativo”, explican Molinié y Galinier, que concluyen: “Entre la palabra ‘indio’ y la palabra ‘indígena’ hay toda la distancia

que separa la realidad de la ficción”.

A partir de principios de los años 80, cierto tipo de indigenismo se vio favorecido por el apoyo de instituciones financieras internacionales (IFI). En plena crisis de la deuda las IFI condicionan su ayuda a la defensa de los derechos culturales de las minorías, asociados al reconocimiento de su identidad. Entre 1990 y 2000, más de una docena de Estados latinoamericanos se declaran multiétnicos y pluriculturales y acuerdan derechos particulares –no sociales– a los indios. Estas políticas participaron del debilitamiento de los Estados nacionales en el “patio trasero” de Estados Unidos, que poco a poco se deshacía de las dictaduras, sin poner trabas, no obstante, a la adopción de políticas neoliberales.

El indigenismo, que se reinventa regularmente en función de las necesidades del momento, se caracteriza por una paradoja, que el socialista peruano Alberto Flores Galindo señalaba en 1986: “En los Andes, el imaginario colectivo terminó por situar la sociedad ideal –el paradigma de toda sociedad posible y la alternativa para el futuro– en la etapa anterior a la llegada de los europeos”. Sin embargo, continúa Galindo, la “sabiduría ancestral” de las poblaciones indígenas no habría sido menos perturbada por el advenimiento del capitalismo, el cual procedió “al desarraigo y la destrucción de las sociedades rurales” y “del mundo tradicional”.

Por su parte, la Declaración Final de Cochabamba –que critica duramente el modelo capitalista– sugiere que para poner un fin a la “destrucción del planeta”, el mundo debe no sólo “redescubrir y volver a aprender los principios ancestrales y los modos de obrar de los pueblos indígenas”, sino “reconocer a la madre Tierra como a un ser vivo” y acordarle “derechos” propios. Una idea que suscitó la atención de una parte del movimiento antiglobalista.

Sensible a la urgencia de la crisis ecológica, el geógrafo David Harvey rechaza toda dicotomía entre sociedad humana y naturaleza. Pensar la transformación de tal o cual ecosistema implicaría no tanto defender los derechos de una hipotética “madre Tierra” como modificar “las formas de organización social que la han producido”.

1. *Realidad Económica*, N° 256, Buenos Aires, julio de 2006.

2. *The Way: An Ecological World View*, University of Georgia Press, Athens (Georgia), 1998 (primera edición: 1992).

3. Entrevista con el autor.

4. “L'eau de la Pachamama”, *L'Homme*, París, septiembre de 2011.

5. Jacques Galinier y Antoinette Molinié, *Les néo-Indiens. Une religion du III e millénaire*, Odile Jacob, París, 2006.

6. Associated Press, 28-4-10.

* Jefe de redacción adjunto de *Le Monde diplomatique*, París.
Traducción: Florencia Giménez Zapiola

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



5

Lo que vendrá

UN DEVENIR IMPREDECIBLE

Luego de diez años de gobierno del MAS, Evo Morales se ha encontrado con limitaciones para continuar con su proyecto político. Si bien pudo superar diferentes conflictos internos y externos durante su segunda presidencia, después del referéndum de febrero de 2016 que no le permitirá volver a postularse por cuarta vez como presidente en 2019, Morales debe rediseñar su estrategia política para revitalizar la marcha de la revolución.

El MAS en su encrucijada

por Pablo Stefanoni*

Hace ya una década que Evo Morales gobierna una Bolivia que progrésa: sostenido crecimiento económico, inclusión social de los sectores indígenas, modernización del país y de la infraestructura urbana y el legítimo orgullo del satélite Túpac Katari. Sin embargo en febrero de 2016 recibió un duro golpe: el pueblo votó “No” a la reforma constitucional que le permitiría presentarse a una nueva reelección. Con más del 50% de imagen positiva, Morales evalúa repetir el referéndum. Cómo continuar con el proyecto político del MAS, enfrentar los conflictos internos y replantear sus vínculos con una región que cambia de rumbo político son los desafíos de la nueva etapa.

La derrota electoral de Evo Morales el 21 de febrero de 2016 marcó un punto de inflexión en la década de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Desde su llegada al poder el 22 de enero de 2006, el presidente boliviano vapuleó, elección tras elección, a una oposición incapaz de encontrar la fórmula para enfrentar el “sistema Evo” –que combinó inclusión de los “movimientos sociales” en el Estado con estabilidad y crecimiento económico–. Pero el escenario del referéndum para reformar la Constitución planteó un nuevo desafío: la oposición no necesitaba esta vez presentar un candidato alternativo –que no tiene– sino solamente conseguir que la ciudadanía votara contra la posibilidad de un cuarto mandato de Evo Morales y Álvaro García Linera. Y lo consiguió.

Un crecimiento complejo

En estos diez años de gobierno del MAS, Morales hizo rimar “socialismo” con crecimiento macroeconómico, se ganó elogios de varios organismos financieros internacionales e incluso los empresarios de la discola región de Santa Cruz terminaron por bajar sus armas para dedicarse a aprovechar el auge y hacer negocios. Evo tiene dos ministros desde su primer día de gestión hace diez años. Uno es el de Economía, Luis Arce Catacora, quien controla la caja con mano firme. El otro, el canciller aymara David Choquehuanca. Y un tercero, aunque con intervalos, es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ex militar y sociólogo con fama de duro.

La memoria de la hiperinflación de los años 80, que hizo estallar al entonces gobierno de izquierda de Hernán Siles Zuazo, y la propia visión campesina del ahorro visible en el presidente, tallaron el “populismo prudente” que explica gran parte del éxito de la década evista. Durante estos años, en las ciudades bolivianas crecieron los edificios de departamentos, se redujo la pobreza y sectores indígenas ocuparon nuevos espacios de visibilidad social, desde los shoppings hasta las universidades privadas. La inversión pública se multiplicó y el Estado se fortaleció mediante varias nacionalizaciones, sobre todo de hidrocarburos y servicios públicos. La economía creció a una tasa anual de alrededor del 5% durante la década y el Producto Bruto Interno (PBI) se triplicó entre 2005 y 2015. Según datos difundidos por el Banco Mundial, la pobreza total descendió del 59 al 39% (y la extrema del 38,3% a 17,8%); el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) bajó de 0,60 a 0,47 (1).

En efecto, el patrón primario-exportador activó dinámicas endógenas de economía popular así como nuevos patrones de distribución (2), al tiempo que la coparticipación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) hacía fluir el boom de los *commodities* –especialmente los ingresos por las exportaciones de gas– hacia las regiones.

El fuerte aumento del consumo y de la importación de productos para las clases populares –que posicionó a China entre los principales proveedores de bienes importados–, produjo un auge de las ciudades intermedias



Referéndum. En febrero de 2016 se votó acerca de la reforma de la Constitución que habilitaría a Morales a presentarse como candidato presidencial para un cuarto mandato. Los resultados fueron 51,3% para el “No”.

a partir de la recreación de los vínculos urbanos-rurales, y una expansión de las redes de transporte interprovincial (3). Las rutas comerciales entre la Zona Franca de Iquique y la amazónica ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, son una de las expresiones de los procesos de “globalización desde abajo” que impulsaron a las economías populares (en especial las importadoras) durante este período. Pero también Bolivia vivió una enorme expansión del crédito así como de los depósitos bancarios (que pasaron de 3.800 a casi 20.000 millones de dólares entre 2005 y 2015) y un fuerte crecimiento de la construcción. Como se afirma en un libro reciente, “varios sectores populares participan en la captación directa de rentas extractivas (cooperativas mineras, cocaleros, sindicatos castaños, pequeños sojeros, organizaciones indígenas ligadas al sector maderero, incluyendo a otros grupos que realizan hasta negocios ilícitos con la explotación de recursos naturales)” (4).

Asimismo, la expansión de restaurantes y cafés *chics* en barrios como Sopocachi o la Zona Sur paceña (5) dio cuenta de transformaciones urbanas, respecto de los patrones de consumo y el “gusto”, en línea con los cambios globales. Y en paralelo, están los denominados “cholets” (combinación de cholo y chalet) en El Alto, una de las figuras arquitectónicas del capitalismo popular. Con vidrios y colores fuertes y hasta chiltones, estas construcciones son parte de los esfuerzos de la burguesía comercial alteña por reafirmarse y plasmar su éxito económico en edificios multifuncionales (incluyen vivienda, comercios y salón de fiestas) que resaltan entre el monótono paisaje de la ciudad.

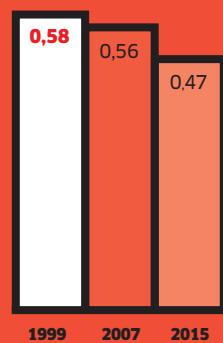
Pero esto no es todo. Aunque a priori parezca pa-

radojal respecto de su discurso indigenista, Morales quiere pasar a la historia como el modernizador de Bolivia. La nueva red de teleféricos de transporte urbano es uno de sus proyectos estrella junto al satélite Túpac Katari. Tres de sus líneas (roja, verde y amarilla) unen El Alto con una Zona Sur “blanca” y “burguesa”, cuyas mutaciones están bien retratadas en la película *Zona Sur* de Juan Carlos Valdivia (2009). Tomando la línea amarilla y luego la verde se pueden recorrer los siete kilómetros y medio que separan El Alto de Irpavi, donde la altitud es menor y el clima más agradable. Pero este renovado vínculo puede declinarse como invasión e incluso como un “choque de civilizaciones”. Poco después de su inauguración, las fotografías de un grupo de alteños sentados en el piso del Megacenter (el centro comercial más grande de La Paz) generaron fuertes expresiones de racismo en las redes sociales, y se encendieron los debates entre quienes querían preservar sus espacios libres de estos intrusos y quienes justificaban sus prácticas en virtud de su “vínculo con la madre Tierra”. Ahora están construyendo varias líneas más. Su efecto social, en un territorio dividido en tres –El Alto, La Paz centro y la Zona Sur– será, sin dudas, tema para sociólogos y antropólogos urbanos en el futuro... pero su efecto en términos de integración urbana parece innegable.

La otra pata de la economía boliviana –más convencionalmente “capitalista”– es la agroindustria del Oriente del país, con Santa Cruz como núcleo económico y político. La decisión del gobierno de volver mucho más laxa la “reconducción comunitaria de la reforma agraria” en esta región fue parte de un →

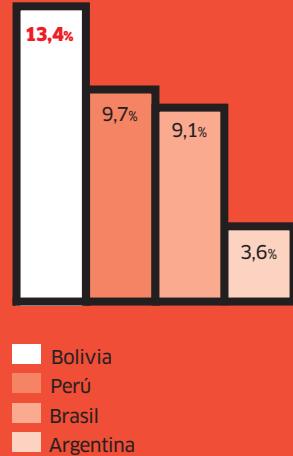
Desigualdad de ingresos

(Coeficiente de Gini, 1999-2015)



Tasa de incidencia de la pobreza

(porcentaje sobre la base de \$3,10 por día (2011 PPA) 2013)

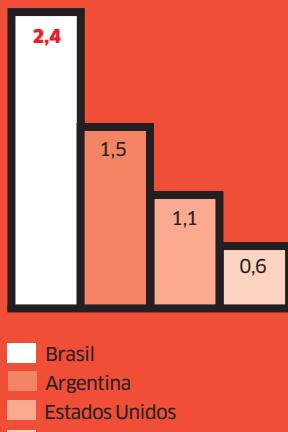




Futuro energético. Morales impulsa la industrialización del litio del Salar de Uyuni, que permitirá producir energía eléctrica. Bolivia posee el 40% de la reserva mundial del metal.

Exportaciones por destino

(en miles de millones de dólares, 2015)



→ acercamiento con la burguesía local, con la finalidad de acabar con la crisis regionalista que el país vivió en 2008. Mientras que la élite política fue derrotada en 2009, Evo Morales tendió puentes hacia la élite económica y en 2014 logró incluso ganar las elecciones en esta región (aunque el gobierno regional sigue en manos de la oposición). La fórmula del “capitalismo andino-amazónico” del vicepresidente Álvaro García Linera, como horizonte para Bolivia, se propuso darles orden y coherencia a todos estos mundos en un modelo con hegemonía estatal, capital privado y “comunitario”. Pero, como veremos, ello presenta varios interrogantes hacia el futuro.

El culto al líder

Con todo, los avances de la década no fueron suficientes para que los bolivianos votaran por la posibilidad de un cuarto mandato mediante una reforma constitucional y transformaron el 21 de febrero de 2016 en uno de los días más amargos para Evo Morales. Si en otras oportunidades su poder había sido desafiado por sectores “oligárquicos”, esta vez fue el pueblo en las urnas el que dijo “No” a una reforma constitucional que le permitiría al presidente volver a postularse a fines de 2019. Era el primer traspaso electoral en una década en la que consiguió por dos períodos los dos tercios del Congreso. En una campaña electoral que ya se veía difícil, García Linera llegó a decir ante los campesinos que en caso de una derrota de Evo, “el sol se va a esconder y la luna se va a escapar y todo será tristeza”.

Finalmente, el sol siguió brillando, pero el presidente no pudo digerir la derrota en las urnas e incluso avaló la posibilidad de repetir el referéndum, un

pedido de algunas organizaciones campesinas que consideran que el “No” ganó gracias a las “mentiras de la derecha” (6). Muchos bolivianos, sobre todo de sectores urbanos que se expresaron como nunca antes en las redes sociales, consideraron que una década y media –el tiempo que Morales gobernará hasta el fin de su tercer mandato– es suficiente. De hecho, es el presidente que más tiempo ocupó el Palacio Quemado: en 2015 superó a Andrés de Santa Cruz, uno de los padres de Bolivia, un país siempre hostil a las reelecciones y a la perpetuación de sus gobernantes en el poder.

Morales rompió el hechizo, emergió como un presidente-símbolo y se consolidó en el poder como pocos imaginaban gracias a dos elementos: por un lado, corporizó una Bolivia tradicionalmente excluida, o que al menos así se sintió. Por el otro, desde la presidencia puso los ingentes ingresos de los recursos naturales al servicio del ya mencionado estatismo redistributivo que entraña con una potente cultura política –casi una mentalidad– antiliberal, sindicalista y nacionalista revolucionaria que se puede rastrear a lo largo de la historia boliviana. Alguna vez, el pensador René Zavaleta dijo que los sectores populares bolivianos hacen política desde sus sindicatos y el Movimiento al Socialismo es precisamente una gelatinosa federación de sindicatos y organizaciones territoriales que sólo Morales puede entender y conducir. El propio presidente saltó a la política desde ese mundo sindical, como dirigente de los campesinos cultivadores de coca en la región subtropical de el Chapare y aún en la actualidad sigue siendo el jefe de ese sector.

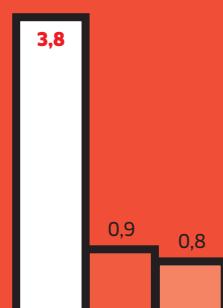
Pero hoy Evo ya no es “un campesino más” como se declaraba los primeros años de su mandato. A lo largo de esta década se ha procesado un creciente culto a la personalidad y se construyó la imagen del líder excepcional predestinado a comandar la nación. En un documental de 2006 un campesino podía decir “Hartos Evos hay aquí, ¡mejores todavía!”. Hoy esa idea de que hay muchos Evos desapareció del discurso oficial. Como muestra el libro *Pachakuti: el retorno de la nación*, de Vincent Nicolas y Pablo Quisbert (7), algunas aristas del culto a la personalidad de Morales se pueden comparar con las del presidente Víctor Paz Estenssoro, líder de la Revolución Nacional de 1952 que entregó la tierra a los campesinos y nacionalizó la gran minería. Si los nacionalistas de los años 40 y 50 se proclamaban la continuidad de los próceres de la independencia, Evo sería la continuación de la gesta del caudillo anticolonial Túpac Katari, descuartizado por los españoles. Es más, habría venido a reconstruir ese cuerpo indígena mutilado para refundar la patria, en un discurso que combina indigenismo e izquierda tradicional; antiimperialismo y pragmatismo sindical.

El canciller Choquehuanca, alguna vez coleccionista de ediciones del *Libro Verde* del libio Muamar Kadafi, no dudó en afirmar que “hay un solo Fidel,



Principales exportaciones

(en miles de millones de dólares, 2015)



Exportación. El gobierno del MAS proyecta aumentar un 40% sus reservas de gas natural. En 2016 la producción diaria fue de 60 millones de metros cúbicos, cantidad que le permite exportar y abastecer al mercado interno.

un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo”, y la reciente filtración de un himno militar que ensalza su figura generó polémica. En la lirica, destinada a ser cantada en los cuarteles, se dice: “Evo Morales tú tienes la luz [...] /Evo Morales tú eres la voz/ que al imperialismo fue quien lo enfrentó/para todos los hijos un gran porvenir/anticapitalista y anticolonial”.

Estados Unidos que incluyó la expulsión del embajador Philip Goldberg en 2008 bajo la acusación de injerencia en medio de los enfrentamientos con la élite cruceña. Y pese a las gestiones posteriores, los embajadores no se repusieron. “Duele ver el panorama del Mercosur, con Maduro estamos solos”, dijo Morales en una entrevista con *Página/12* tras el triunfo de

El cortoplacismo que primó en muchos proyectos impidió avanzar hacia una etapa de reformas de más largo aliento.

De hecho, las Fuerzas Armadas son uno de los sectores potenciados en esta década, se les impuso el lema –“Patria o muerte”– y hasta se organizaron desfiles indígenas-militares para conmemoraciones especiales, como la inauguración de la Asamblea Constituyente de 2006, destinada a “refundar a Bolivia”.

Al mismo tiempo, el enjuiciamiento de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el acceso al mar, perdido en la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX, busca cohesionar el espacio interno y construir a Evo como presidente irremplazable. La “descolonización” que imagina Morales se parece muy poco a un retorno al pasado y es más bien una mezcla de imaginarios desarrollistas y mayor autoestima nacional. Esta política “descolonizadora” se tradujo en nuevos alineamientos internacionales (como la adhesión a la Alianza Bolivariana para Nuestra América (Alba) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)) y, en paralelo, un distanciamiento con

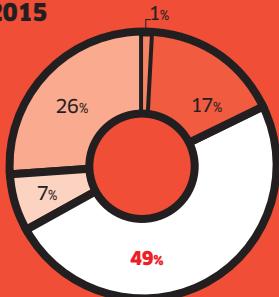
Mauricio Macri en Argentina y cuando ya se anticipaba el *impeachment* sobre Dilma Rousseff. Aunque acotó como consuelo: “Felizmente nuestros pueblos son antiimperialistas”.

¿Desencanto del modelo?

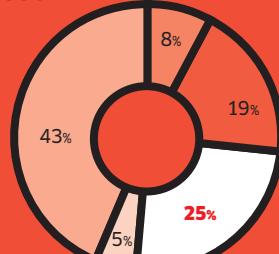
En el caso de Bolivia, aunque el MAS gobernará al menos hasta 2020, el modelo de Evo ha venido perdiendo la magia de antaño. Sobre todo en sectores urbanos crecen las críticas a un ejercicio no siempre pluralista del poder, a la corrupción y a una justicia excesivamente dependiente del Ejecutivo. Pero además, comienzan a ajustarse expectativas (y utopías) con la realidad. Asimismo, con la caída de los precios de las materias primas empiezan a quedar en evidencia las debilidades. Y así, varias fábricas estatales están en problemas financieros, los conflictos sociales –reconducidos con bastante éxito en esta década– empiezan a plantear nuevas amenazas y →

Exportaciones de mercancías por tipo
(en porcentaje)

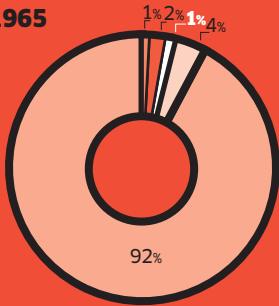
2015



1990



1965



- Materias primas agrícolas
- Alimentos
- Combustibles
- Productos manufacturados
- Metales y minerales



© David Mercado/Reuters/Latinstock

Conflictos. A pesar de la mejora de las condiciones de vida, la movilización social continuó con protestas de discapacitados exigiendo puestos de trabajo y de la COB en contra del cierre de la textil Enatex, entre otras.

→ los discursos que ven el “vaso medio vacío” logran más seguidores. Empero, Evo Morales mantiene una popularidad aún alta y recién en 2018 decidirá su estrategia: intentar forzar una nueva consulta o buscar un sucesor. Hoy suena Choquehuanca –vinculado a Evo desde los años 90 y unido a él por fuertes lazos de lealtad personal– pero es probable que aún corra bastante agua bajo el puente. Por otro lado, la figura del canciller, que combina pragmatismo con discurso “pachamámico”, parece poco adecuada para reconquistar el apoyo urbano perdido en este tiempo (8). Aún no es claro si la oposición logrará apartarse de sus figuras tradicionales, estancadas en términos de votos. En cualquier caso, es poco probable que Morales se retire a su “chaco” en el Chapare, como anunciara en algún momento, y con seguridad seguirá siendo un actor político de envergadura.

El conflicto entre el gobierno y los cooperativistas mineros que el 25 de agosto de 2016 terminó con el linchamiento del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes (9), puso de relieve los problemas del “capitalismo popular” y de las visiones corporativas que reducen la democracia a que todos los movimientos accedan a puestos en el Estado. Estas cooperativas son uno de los tres grandes actores de la minería boliviana junto con las ramas estatal y privada, y están acostumbradas a disputar vetas de minerales de manera aguerrida e incluso violenta, como quedó claro en 2006 con el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros estatales con un saldo de 16 muertos. Sobrevivientes de la crisis de la minería estatal en los años 80, las cooperativas crecieron bajo todos los gobiernos, pero lo hicieron en mayor medida en esta década al calor del aumento de los precios internacionales de los minerales.

Los cooperativistas también participaron del ciclo de luchas populares de los años 2000, y estuvieron entre quienes impidieron, en Sucre, que asumiera un “neoliberal” tras la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005. En esta década fueron parte del bloque del cambio y consiguieron parlamentarios y otros cargos en el Estado, incluyendo el primer ministro de Minería de Morales. Pero detrás de estas figuras, como ocurre con la llamada “economía informal”, existe un mundo en extremo complejo de explotación, autoexplotación, acumulación, precariedad, comunitarismo, individualismo, lógicas pragmáticas y “extorsivas” frente al Estado. Sus demandas –como el rechazo a la sindicalización de trabajadores de las cooperativas y la defensa de sus contratos de asociación con empresas privadas– dan cuenta de estas ambivalencias.

De hecho, este conflicto es la expresión de que el Estado “fuerte”, que desde su lógica nacional-popular Evo Morales busca construir, choca con las propias estructuras sociales fuertemente corporativas que permitieron su propia llegada al poder. El impulso al cambio nacido en 2005 parece estar perdiendo fuerza en el marco de un Estado que, aunque creció en tamaño, lo hizo menos en capacidades técnicas e institucionales. El cortoplacismo que primó en muchos proyectos –el “obrismo” de relativamente rápida ejecución que marcó la política pública y que por momentos proyectaba a Evo Morales como un alcalde ocupado de pequeñas obras– junto a la crónica debilidad institucional del Estado, impidieron avanzar hacia una etapa de “sintonía fina” y reformas de más largo aliento. Y eso se ve en campos como salud y educación, donde los avances fueron muy modestos. Lo mismo se puede decir de las dificultades para



Resistencia. Las cooperativas mineras se manifestaron en contra de la nueva Ley de Minería que imposibilitaría la participación de empresas transnacionales y que impulsa la sindicalización de sus trabajadores.

avanzar en la diversificación económica.

Pese a que en algunos sentidos la década de Evo Morales fue fundacional –y así se escenificó–, especialmente respecto a la ampliación de la “foto de familia” de la nación, que hoy incluye a todos sus habitantes, puede insertarse al Estado Plurinacional en el período más largo de la democracia boliviana recuperada en 1982. Muchas de las reformas de los años 90, como la Ley de Participación Popular (LPP) que descentralizó y municipalizó al país –y profundizó las prácticas democráticas locales– o ciertas instituciones económicas como un Banco Central más institucionalizado –garante de la estabilidad– perduraron bajo el gobierno de Morales. Y, al mismo tiempo, operó un proceso de descolonización que, lejos de ciertos paradigmas descoloniales que buscan un renacimiento del comunitarismo, se desplaza por otros carriles, a menudo mercantiles (movilidad social, acceso al consumo, entrada de sectores de origen indígena o “cholo” en universidades privadas, etc.) y anticipa un tipo de modernidad *sui géneris*.

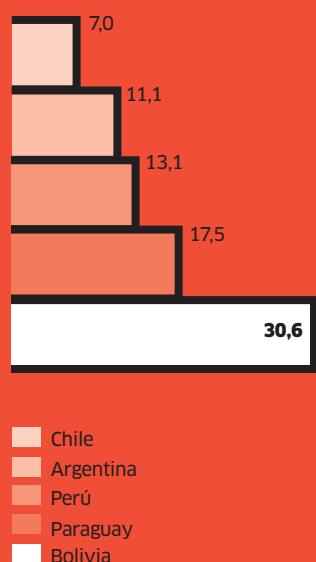
Una de las paradojas del proceso de cambio boliviano es que tras el discurso del “socialismo comunitario”, el crecimiento económico, el incremento de la bancarización y la mencionada expansión del consumo dejan en pie unos pilares de expansión del capitalismo que con seguridad se proyectarán en los próximos años. El futuro post-evista es aún un enigma. Pero no es menos incierto un escenario en el que el presidente prosiguiera en el gobierno. A los efectos políticos de cualquiera de ambos escenarios (con Evo o sin Evo en la presidencia) se suma el futuro económico. Es posible avizorar, si esta caída de los precios de las materias primas deriva en un “aterrizaje suave” y no en una crisis económica, que proseguirán

ciertos avances modernizadores, entrelazados con las formas abigarradas del capitalismo popular. Pero también persistirá la capacidad de veto de la “calle boliviana” al Estado, que ni siquiera Evo Morales, como presidente-sindicalista, logró conjurar.

En cualquier escenario, con seguridad Bolivia estará tan lejos de las (exageradas) ilusiones desarrollistas del actual gobierno como de las ilusiones comunitaristas de quienes vieron en el proceso de transformaciones iniciado en 2006 una vía para cosmovisiones alternativas a las tendencias globales del capitalismo actual. ■

Tasa de mortalidad infantil

(por cada mil nacidos vivos)



© Reuters/Bolivian Presidency/Handout

Rodolfo Illanes. Asesinado en la protesta minera (agosto 2016).

Agenda patriótica 2025

El gobierno de Evo Morales propuso trece pilares para construir una sociedad y un Estado incluyentes hacia el Bicentenario del país. Algunos de los ejes: erradicación de la extrema pobreza; soberanía científica, tecnológica y sobre los recursos naturales; reencuentro soberano con el mar, y socialización y universalización de los servicios básicos para el “Vivir Bien”.

1. Bolivia: *Panorama general*, Banco Mundial, 7-4-2016.
2. Nico Tasi, Carmen Medeiros, Antonio Rodríguez-Carmona y Giovana Ferrufino, “Hacer plata sin plata”. *El desborde de los comerciantes populares en Bolivia*, La Paz, Pieb, 2013, p. 49.
3. *Ibid.*, p. 82.
4. *Ibid.*, p. 59.
5. Hugo José Suárez, “Gustu”, *Página 7*, La Paz, 8-2-2015.
6. Sobre las razones de la derrota electoral y el affaire Zapata, ver Pablo Stefanoni, “Un referéndum por penales”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, ed. web, febrero de 2016.
7. Vincent Nicolas y Pablo Quisbert, *Pachakuti: el retorno de la nación. Estudio comparativo del imaginario de nación de la Revolución Nacional y del Estado Plurinacional*, La Paz, Pieb, 2014.
8. Puede encontrarse una entrevista biográfica a Choquehuanca en Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Bruno Fornillo, *Debatir Bolivia. Perspectivas de un proceso de descolonización*, Buenos Aires, Taurus, 2010.
9. Pablo Stefanoni, “Bolivia frente a sí misma”, *Nueva Sociedad*, ed. web, agosto de 2016.

*Periodista e historiador.

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

PRIMERA SERIE**SEGUNDA SERIE****TERCERA SERIE****CUARTA SERIE****EXPLORADOR****TÍTULOS DE LA COLECCIÓN**

- 1 CHINA**
2 BRASIL
3 INDIA
4 RUSIA
5 ÁFRICA

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

- 1 ESTADOS UNIDOS**
2 ALEMANIA
3 JAPÓN
4 GRAN BRETAÑA
5 FRANCIA

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

- 1 IRÁN**
2 MÉXICO
3 COREA DEL SUR
4 TURQUÍA
5 ESPAÑA

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

- 1 CUBA**
2 COLOMBIA
3 VENEZUELA
4 PERÚ
5 BOLIVIA

Los números anteriores se consiguen en librerías o por suscripción a través de www.eldiplo.org

LE MONDE
diplomatique

PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS

La Revolución Nacional del MNR, por Cristine Koehler Zanella, Pâmela Marconatto Marques, Ricardo Antônio Silva Seitenfus, página 7, *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, mayo-junio de 2007.

Golpe a golpe: la resistencia, por Alain Labrousse, página 11, *Le Monde diplomatique*, París, julio de 1978.

El giro neoliberal, por Nicole Bonnet, página 14, *Le Monde diplomatique*, París, marzo de 1986.

El largo estallido, por Walter Chávez, página 17, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre de 2003.

Los nuevos sujetos de poder, por Enzo Girardi, página 22, *El ejemplo aymara en Bolivia*, Enzo Girardi, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009.

El surgimiento de una "nueva izquierda", por Walter Chávez y Sergio Cáceres, página 24, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2002.

Evo: un cocalero al poder, por Pablo Stefanoni, página 29, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2006.

Capitalismo andino-amazónico, por Álvaro García Linera, página 30, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2006.

La tercera es la vencedora, por Federico Bernal, página 34, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2006.

Un divorcio sin Paz, por Claudia Peña Claros, página 37, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2008.

Una metamorfosis histórica, por Ignacio Ramonet, página 40, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre de 2014.

Las mil caras de Bolivia, por Enzo Girardi, página 44, *El ejemplo aymara en Bolivia*, Enzo Girardi, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009.

"Mandar obedeciendo al pueblo", por Martín Sivak, página 46, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2012.

Los obstáculos de la revolución, por Álvaro García Linera, página 49, *Le Monde diplomatique*, Buenos Aires, septiembre de 2011.

Con la mirada hacia el Sur, por Daniel Agramont Lechín, página 55, *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2015.

La pelea por una salida al mar, por Cédric Gouverneur, página 61, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2015.

Enemigos íntimos, por Hernando Calvo Ospina, página 64, *Le Monde diplomatique*, París, junio de 2010.

La hoja de la discordia, por Johanna Levy, página 67, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2008.

La planta sagrada, por Pablo Stefanoni y Hervé do Alto, página 68, *La revolución de Evo Morales*, Pablo Stefanoni y Hervé do Alto, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.

La voz de "Domitila", página 74, *Le Monde diplomatique*, París, julio de 1978.

El enigma de la madre Tierra, por Renaud Lambert, página 78, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2011.

FUENTES DE LOS GRÁFICOS

Bolivia en América del Sur, página 18. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

PIB (año 2015), página 31. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Población indígena, página 31. Fuente: *Los pueblos indígenas en América Latina*, 2010, CEPAL

Crecimiento del PIB, página 32. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Evolución de la inflación, página 33. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Tasa de desempleo, página 38. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia - Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

PIB per cápita, página 38. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

PIB per cápita por departamentos, página 39. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.

Tasa de pobreza, página 42. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.

Trabajadores informales urbanos, página 42. Fuente: Cepal, *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*, 2015.

Tasa de indigencia, página 43.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.

Stock de la deuda externa, página 56.

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Reservas internacionales sobre la deuda externa, página 56.

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Bolivianos en el extranjero, página 57. Fuente: Trends in International Migrant Stock: Migrants by destination and Origin (United Nations Database 2015)

Importaciones por origen, página 58. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.

Producción de minerales, página 58. Fuente: Cifras del Estado Plurinacional de Bolivia, Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, agosto de 2016.

Importaciones de mercancías por tipo, página 59. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Territorio boliviano, página 62. Fuente: Wikipedia 2016.

Gasto militar, página 63. Fuente: The SIPRI Military Expenditure Database.

Cultivo ilegal de arbustos de coca, página 69. Fuente: UNODC Global Drug Report 2015.

Tasa de analfabetismo, página 76. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Desigualdad de ingresos, página 83. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.

Tasa de incidencia de la pobreza, página 83. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Exportaciones por destino, página 84. Fuente: INE-Bolivia

Principales exportaciones, página 85. Fuente: Cifras del Estado Plurinacional de Bolivia, Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, agosto de 2016.

Exportaciones de mercancías por tipo, página 86. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

Tasa de mortalidad infantil, página 87. Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial 2016, Banco Mundial.

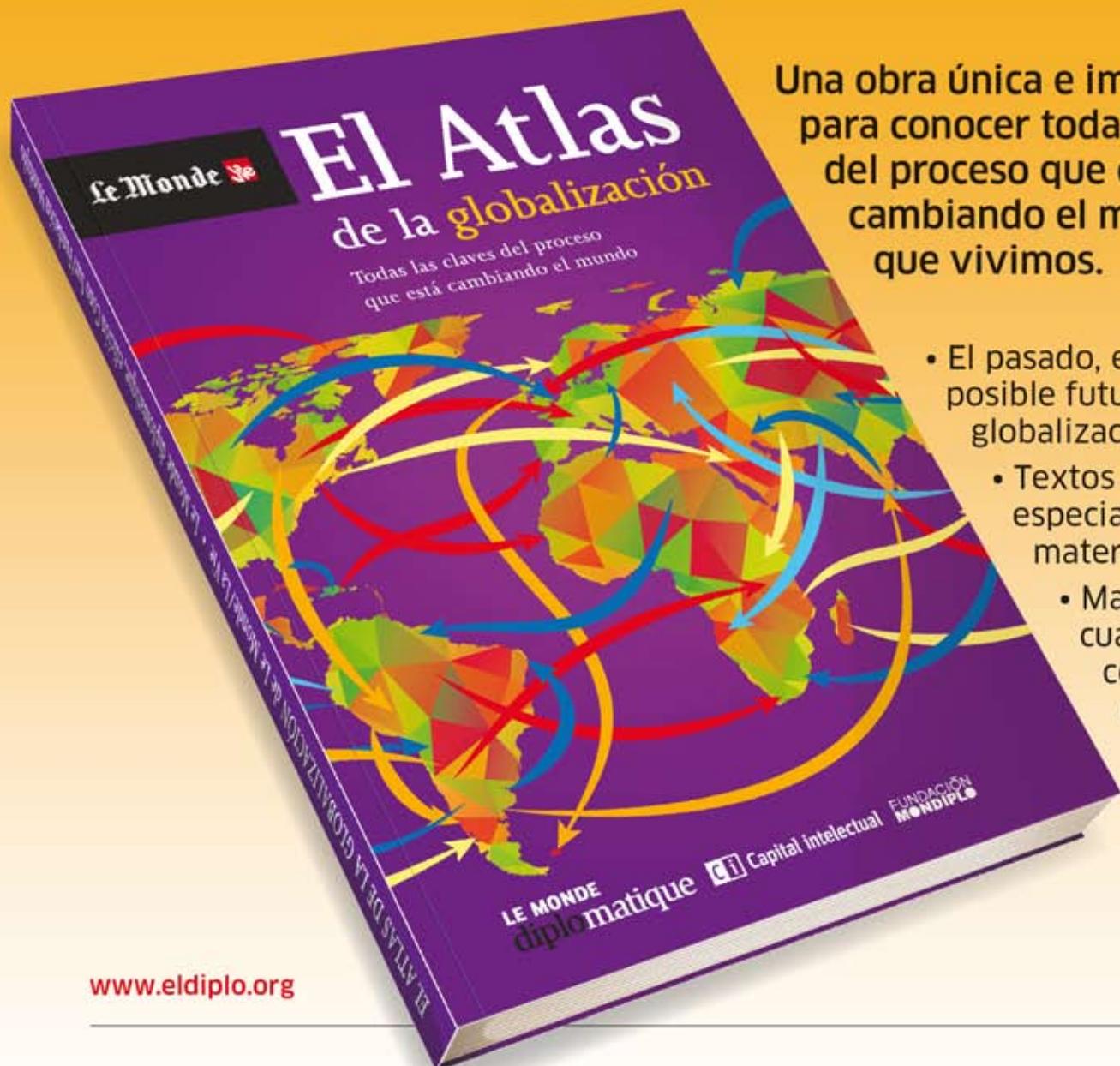
MAPA

Un Estado, múltiples naciones, página 45, *El Atlas de las minorías de Le Monde - La Vie*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2013.

El Atlas de la globalización

de Le Monde/La Vie

EN VENTA EN
LAS MEJORES
LIBRERÍAS



Una obra única e imprescindible para conocer todas las claves del proceso que está cambiando el mundo en que vivimos.

- El pasado, el presente y el posible futuro de la globalización.
- Textos de los mayores especialistas en la materia.
- Mapas, gráficos, cuadros comparativos y estadísticas.

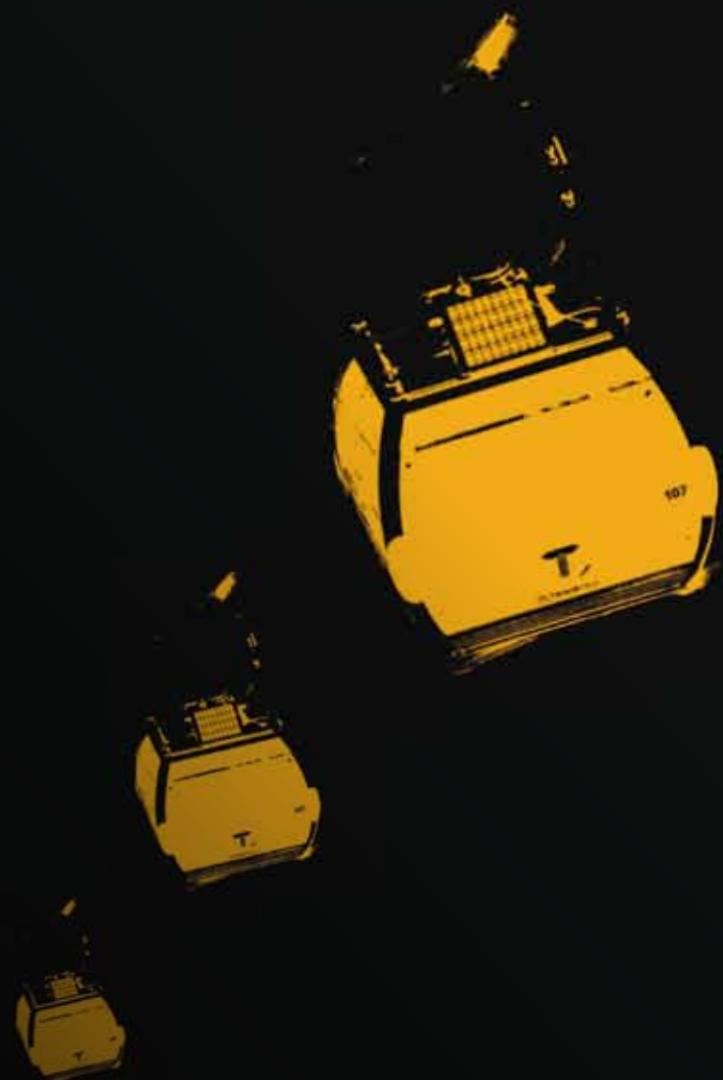
www.eldiplo.org

LE MONDE
diplomatique

ci Capital intelectual

FUNDACIÓN
MONDIPLO

LE MONDE
diplomatique



Bolivia: La inclusión conflictiva La Revolución Nacional del 52 **La era neoliberal** El despertar indígena **Evo: un cocalero al poder** Nacionalización de los hidrocarburos **La lucha por la salida al mar** Mirar a la región **Coca: la hoja de la discordia** Identidad multicultural **La encrucijada del MAS**

EXPLORADOR

El mundo
cambia

5